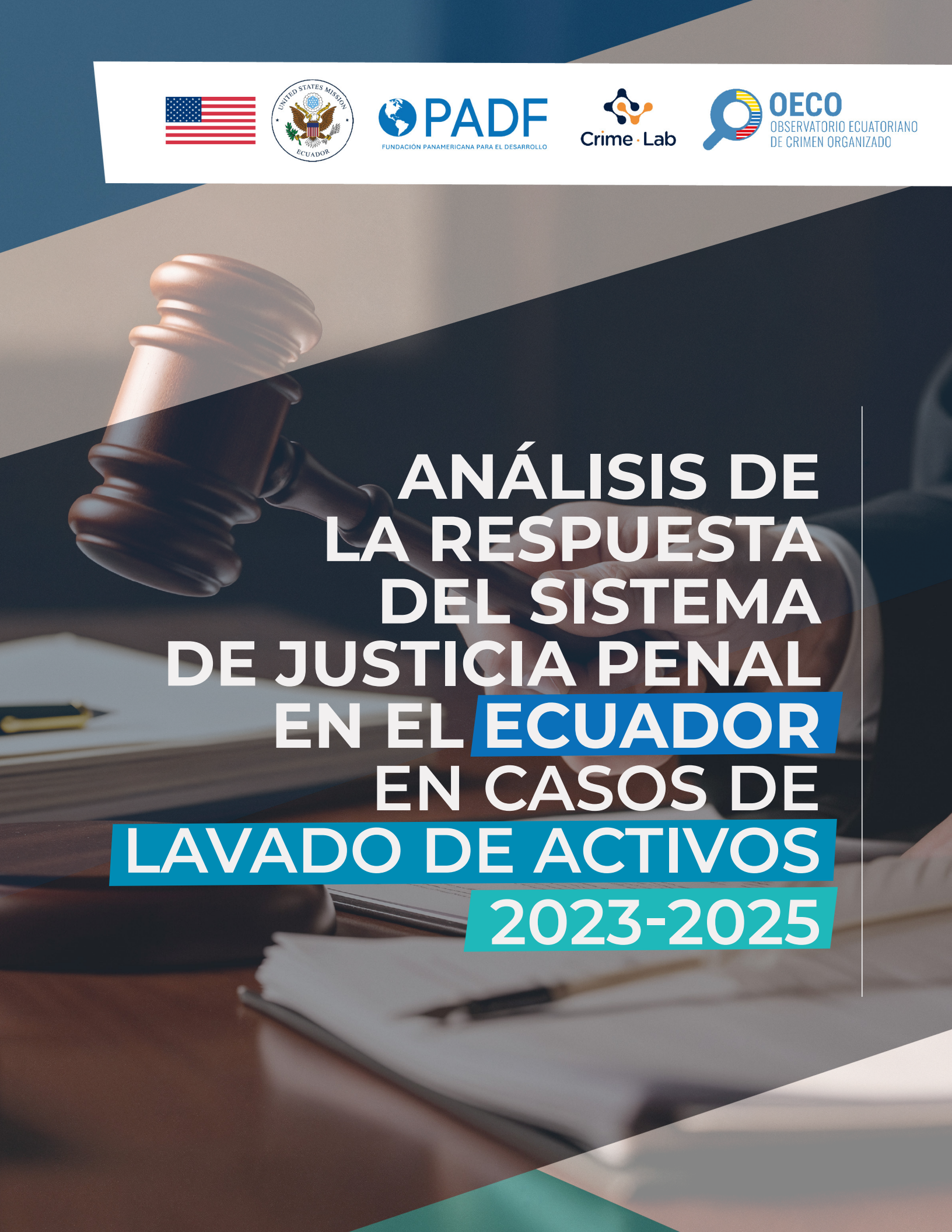


ANÁLISIS DE LA RESPUESTA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ECUADOR EN CASOS DE LAVADO DE ACTIVOS 2023-2025

Fundación Panamericana para el Desarrollo - (PADF)

Coordinación General Paz, Justicia y Seguridad

Kevin Mills
David Álvarez Veloso
Beatriz Quintero

Proyecto Crime-Lab II

Alicia Contero
Byron Villagómez, OECO
María Fe Vallejo, OECO
Mateo Villaquirán, OECO
Evelyn Jaramillo, OECO

Apoyo en investigación

Cynthia Jiménez, practicante OECO
Valentina Espinosa, practicante OECO

Diseño y diagramación
Linda Chaves Olaya

Proyecto Crime-Lab II

© 2026 Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO)
© 2026 Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF)

Financiado por INL Ecuador

El contenido de este informe no refleja necesariamente las opiniones de PADF, de INL o la Embajada de Estados Unidos.

Tabla de contenido

1 **Introducción** 5

2 **Principales** hallazgos 9

3 **Marco** normativo y conceptual 13

4 **Metodología** para el análisis de casos y sentencias 42

5 **Resultados** 49

6 **Recomendaciones** 97

7 **Referencias** 102



1 Introducción

El presente documento es una contribución de Crime-Lab II, proyecto implementado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), orientado a analizar la delincuencia organizada transnacional en Ecuador. A partir del trabajo del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), este informe busca aportar insumos para el estudio crítico y la toma de decisiones basadas en evidencia mediante el análisis de la respuesta judicial al delito de lavado de activos.

En el año 2023 el OECO publicó su *Estudio de sentencias por lavado de activos en Ecuador 2020-2022*, en el cual analizó el comportamiento de la justicia penal respecto a este delito en dicho periodo. El presente estudio continúa la serie y ofrece una actualización y profundización, en esta oportunidad con respecto al periodo 2023-2025.

El lavado de activos constituye una de las principales amenazas para la integridad de los sistemas económicos, financieros e institucionales, al permitir la incorporación y circulación dentro de la economía formal de recursos provenientes de actividades ilícitas. Su estrecha vinculación con la delincuencia organizada, la corrupción y otras economías criminales ha convertido a este fenómeno en un problema de creciente complejidad, cuya prevención y control representan un desafío para los Estados. En este contexto, resulta indispensable abordar el lavado de activos desde una perspectiva científica y empírica que permita comprender cómo operan los mecanismos diseñados para su detección, investigación y sanción. Con ese propósito, el presente estudio analiza los procesos judiciales y las sentencias dictadas por este delito, con el fin de aportar evidencia sobre el funcionamiento del sistema de justicia penal y contribuir al fortalecimiento de las políticas e instituciones encargadas de combatir esta expresión criminal.

Analizar el comportamiento del sistema de justicia penal es indispensable, tanto desde el punto de vista académico como desde una perspectiva de política pública. Si bien el funcionamiento de la justicia penal se encuentra regido y condicionado por un sistema de normas preestablecido, en el que se conjugan principios y reglas de jerarquía constitucional y legal, en la práctica judicial inciden factores institucionales, sociales y estructurales que en mayor o menor medida pueden determinar los procesos de toma de decisiones y sus resultados (Savelsberg, 1992).

En ese sentido, la literatura especializada ha identificado tres grandes bloques de "preocupaciones focales" que influyen en las decisiones de los jueces y tribunales penales (Galvin & Ulmer, 2022; Steffensmeier et al., 1998; Ulmer & Johnson, 2004; Ulmer et al., 2023):



1. Preocupaciones sobre la protección de la comunidad: relacionadas, entre otras, con la probabilidad y gravedad de la reincidencia, lo que puede incluir considerar fines teóricos de la pena como la incapacitación o la prevención especial negativa.



2. Estimaciones sobre la culpabilidad, que abarcan el carácter ilícito y nocivo de la conducta prohibida, la vulnerabilidad de las víctimas, el daño causado a los bienes jurídicos protegidos, o su impacto social y económico.



3. Consideraciones prácticas, que engloban tanto cuestiones individuales de la persona procesada (sexo, edad y salud), como con cuestiones organizativas o institucionales (tales como el mantenimiento de las relaciones profesionales entre actores y agencias del sistema penal, reducción de la carga procesal, tasa de condenas, o prevención del hacinamiento en las prisiones).

Las investigaciones empíricas respecto a estas variables han constatado que, en general, los factores formales-legales, como la gravedad del delito, los antecedentes penales y las circunstancias agravantes o atenuantes, son los que mayor significancia tienen sobre la decisión judicial (Ulmer, 2012; Ulmer et al., 2023). Sin embargo, otros factores relacionados con cuestiones más prácticas como la carga procesal, el interés por proteger a la comunidad, o la presunta peligrosidad del delincuente también han mostrado tener incidencia en la toma de decisiones de los actores que intervienen en los procesos penales (Ulmer, 2012; Ulmer et al., 2023). Por consiguiente, es admisible considerar que la respuesta del sistema de justicia penal a los delitos en general, y al lavado de activos en particular, no es necesariamente monolítica, unívoca y homogénea, sino que puede estar sujeta a variaciones o fluctuaciones a lo largo del tiempo.

Al respecto, no se puede dejar de mencionar que el Ecuador atraviesa actualmente una crisis de seguridad bastante compleja, directamente relacionada con la incidencia del crimen organizado. Como lo ha evidenciado el OECO (2026a), en los últimos años "las organizaciones criminales han acentuado su control territorial y consolidado sus capacidades alrededor de los eslabones de las cadenas ilícitas, con operaciones efectivas y eficientes que apoyan su consolidación a nivel nacional, pese a la fragmentación interna de sus estructuras". En ese marco, el lavado de activos aparece como la cuarta expresión más relevante del crimen organizado en el Ecuador, conjugándose con el narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción como los mercados ilícitos de mayor calado en el país; en ese marco, el lavado de activos es parte del ecosistema criminal ecuatoriano como un motor de las economías ilícitas de todo tipo (OECO, 2026a).

Por tales motivos, es necesario llevar a cabo una evaluación periódica al funcionamiento del sistema de justicia penal, tanto con la finalidad de medir indicadores de eficiencia y cumplimiento de metas, como para identificar y descifrar tipologías y modalidades en las diversas expresiones delictivas de los grupos de crimen organizado. En este marco, el OECO ha venido llevando a cabo, desde hace cerca de 5 años, estudios acerca de la respuesta del sistema de justicia penal al fenómeno criminal.

Para este reporte, se ha extraído información de un total de 48 procesos por el delito de lavado de activos, en los cuales se procesaron a 249 personas naturales y jurídicas. De ese universo, se destacan 8 procesos con sentencia, en los que 38 personas fueron condenadas. El análisis incluye un conjunto de variables relevantes, en línea con el estudio anterior. No obstante, se han incorporado nuevos factores de interés relacionados con aspectos tales como: sectores de la economía formal con mayor incidencia, participación de facilitadores, cuantificación de los montos dispuestos en comiso, inclusión de estudios patrimoniales como sustento probatorio, evaluación de la aplicación y seguimiento de medidas cautelares reales, consonancia procesal de los comisos, entre otros.

Este estudio tiene una base empírica, es decir, sus hallazgos, resultados, conclusiones y recomendaciones se basan en evidencia científica. Para el efecto, se aplicaron estándares metodológicos rigurosos que le brindan fiabilidad al estudio y favorecen su replicabilidad. Si bien se ha procurado subsanar, en la medida de lo posible, las limitaciones intrínsecas de las fuentes de la información, ciertas categorías de datos presentan algunas brechas, lo que se hará notar en cada caso. La presente investigación pretende llegar a un público amplio, que incluye hacedores de política pública, académicos e investigadores, profesionales del Derecho, periodistas y medios de comunicación, organismos del tercer sector y público en general.



2 Principales hallazgos



1. Predominio de procesos individuales sobre estructuras criminales. Aunque el lavado de activos suele estar asociado a organizaciones criminales, la mayoría de los procesos involucra únicamente entre una y tres personas naturales. Son relativamente pocos los casos que incorporan personas jurídicas, entramados societarios o estructuras criminales complejas, lo que sugiere una respuesta judicial centrada en individuos más que en organizaciones. No obstante, dichos casos presentan elementos destacables que pueden servir de ejemplo de buenas prácticas.

2. La mitad de las personas procesadas fue llamada a juicio. Tomando como unidad de análisis a las personas naturales y jurídicas procesadas, en general los procesos judiciales alcanzaron etapas avanzadas, siendo el llamamiento a juicio el tipo de resolución más frecuente. De las 249 personas procesadas, 125 (50,20%) recibieron llamamiento a juicio y sus casos continúan en trámite, 42 (16,87%) sentencia, 27 (10,84%) archivo por no formulación de cargos, y 25 (10,04%) fueron sobreseídas por falta de acusación fiscal. Los procesos restantes se concentran en casos en etapa preparatoria de juicio (5,62%), apertura de investigación previa (4,42%), archivo de investigación previa (1,20%), sobreseimiento por decisión judicial (0,40%), e inhibición del juez (0,40%).



3. 3 de cada 4 procesos no registran sentencia. De los 48 procesos por lavado de activos, la categoría más frecuente (33%) corresponde a casos que aún no registran sentencia (16 casos). A ella le siguen los archivos por no formulación de cargos, con 13 casos (27%); y los sobreseimientos por falta de acusación fiscal, con 7 procesos (15%). Entre estas 3 categorías se aglutinan 36 de los 48 casos analizados, lo cual equivale al 75% del total.





4. Predominio de condenas y penas elevadas. En el periodo examinado se dictó sentencia en 8 procesos a 42 personas; de las cuales, 38 (90%) fueron condenadas y a 4 (10%) les ratificaron su inocencia. Las penas se concentraron en los rangos medios-altos, ya que 20 de las 28 personas naturales condenadas (71,43%) recibieron penas de 120 o 156 meses de prisión —10 y 13 años, respectivamente. A ello se añade que el 100% de las personas condenadas estuvieron sujetas al comiso de bienes, alcanzándose un valor agregado de activos comisados de aproximadamente USD 40 millones. De igual manera, las multas impuestas oscilaron entre USD 57.380 y USD 19,9 millones.

5. Dificultad para identificar el delito precedente. En 26 de los 48 casos analizados (54,17%) no fue posible determinar el delito precedente; es decir, solamente en cerca del 46% de los procesos se identificó el delito base. Si se restan de los 26 los 12 casos archivados por no formulación de cargos, los casos sin delito precedente son 14, es decir, el 29% de los 48 procesos, que sigue siendo considerable. En los 8 casos con sentencia sí se identifica el delito precedente.



6. Las investigaciones no reconstruyen el entramado criminal completo. Las investigaciones rara vez reconstruyen de forma completa la estructura organizacional, los facilitadores, los beneficiarios efectivos y las relaciones societarias que rodean al esquema de lavado, lo que limita una aproximación sistémica al fenómeno.





7. Narcotráfico lidera entre los delitos precedentes identificados. Entre los delitos precedentes del lavado de activos, en los casos en los que sí se identificó, el tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización fue el más frecuente (8 casos; 16,67%), seguido por la corrupción (5 procesos; 10,42%).

8. Las empresas fachada y la compraventa de inmuebles son clave para canalizar recursos ilícitos. Cuando intervienen personas jurídicas, estas son utilizadas principalmente para canalizar recursos ilícitos mediante empresas, contratación entre sociedades relacionadas y adquisición de bienes. Asimismo, la compra de inmuebles constituye el mecanismo patrimonial más frecuente, confirmando una tendencia ya observada en el estudio del período 2020-2022.





3 Marco normativo y conceptual

a. Base jurídica y normativa

La comunidad internacional, y el Estado ecuatoriano como parte de ella, se ha comprometido desde hace décadas a tipificar y sancionar penalmente todos los actos relacionados con el blanqueo de capitales. La primera referencia en ese sentido es la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrita el 20 de diciembre de 1988 y ratificada por el Ecuador el 23 de marzo de 1990 (R.O. 378, 15-II-1990). El artículo 3, letra b) de dicha Convención compromete a los Estados parte a adoptar las medidas necesarias para tipificar como delito penal los actos intencionales dirigidos a ocultar o encubrir el origen ilícito de bienes procedentes de conductas vinculadas al tráfico ilícito de drogas.

La segunda referencia normativa relevante a nivel internacional es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (y sus Protocolos), suscrita en diciembre del año 2000 y ratificada por el Ecuador el 17 de septiembre de 2002 (R.O. 561, 23-IV-2002). El artículo 6 de este instrumento internacional exige a los Estados parte adoptar, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole necesarias para tipificar como delito el blanqueo del producto de los delitos descritos en dicha Convención.

En la legislación ecuatoriana el lavado de activos se encuentra tipificado en el artículo 317 del COIP. El texto original que entró en vigor en agosto de 2014 ha sido objeto de dos reformas. En primer lugar, en agosto del año 2021 (R.O. 525-5S, 27-VIII-2021) se incorporó expresamente como conducta punible la declaración de valores de mercancías superiores a los reales. En segundo lugar, a través de una reforma legal efectuada en julio de 2024 (R.O. 599-S, 12-VII-2024), se agravaron de forma estructural todas las penas previstas para las distintas modalidades de este delito.

Con estos matices, el tipo penal contenido en el citado artículo 317 del COIP describe los siguientes mecanismos de lavado de activos:

1. Tenencia, adquisición, transferencia, posesión, administración, utilización, mantenimiento, resguardo, entrega, transporte, conversión u obtención de beneficios de cualquier tipo, de activos de origen ilícito.
2. Ocultación, disimulo o impedimento de la determinación real de la naturaleza, procedencia o vinculación de activos de origen ilícito.
3. Prestar el nombre propio, o el de la sociedad o empresa del presunto responsable que sea socio o accionista, para la comisión de cualquier modalidad de lavado.
4. Organización, gestión, asesoramiento, participación o financiamiento para la comisión de cualquier modalidad de lavado.
5. Realización, por sí mismo o por medio de terceros, de operaciones y transacciones financieras o económicas, con el objetivo de dar apariencia de licitud a actividades de lavado de activos.
6. Ingreso o egreso de dinero de procedencia ilícita por pasos o puentes del país.
7. Declaración de valores de mercancías superiores a los reales, con el objetivo de dar apariencia de licitud a actividades de lavado de activos.

La referida disposición del COIP establece expresamente que estas modalidades del lavado de activos deben ser procesadas y sancionadas como delitos autónomos de otros cometidos dentro o fuera del país, sin perjuicio de los casos de concurso de delitos y la consiguiente acumulación de acciones o penas. El mismo artículo determina que esto no exime a la Fiscalía de investigar el origen ilícito de los activos objeto del delito.

En lo concerniente a las penas previstas para este delito, el mismo artículo 317 del COIP establece los siguientes rangos en función de la modalidad:

Tabla 1
Modalidades delictivas y penas para el lavado de activos según el COIP

Modalidad	Rango de la pena privativa de libertad
Monto de los activos inferior a 100 SBU	5 a 7 años
La comisión del delito no presupone la asociación para delinquir	7 a 10 años
Monto de los activos igual o superior a 100 SBU	10 a 13 años
Asociación para delinquir, sin servirse de la constitución de sociedades o empresas, o de la utilización de las legalmente constituidas	10 a 13 años
Utilización de instituciones del sistema financiero o de seguros; instituciones públicas o dignidades; o desempeño de cargos directivos, funciones o empleos en dichos sistemas	10 a 13 años
Monto de los activos superior a 200 SBU	19 a 22 años
Asociación para delinquir mediante la constitución de sociedades o empresas, o mediante la utilización de las legalmente constituidas	19 a 22 años
Utilización de instituciones públicas, dignidades, cargos o empleos públicos	19 a 22 años

Elaboración: Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

Para todas estas modalidades, además, se prevé una multa equivalente al quíntuplo del monto de los activos objeto del delito. Asimismo, se contempla el comiso como pena sobre los bienes, así como la disolución y liquidación de las personas jurídicas creadas para la comisión del delito. Complementariamente, se establecen las mismas penas para los casos de delitos cometidos sobre bienes cuya extinción de dominio haya sido declarada. Finalmente, la citada disposición prescribe la imposición del máximo de las penas previstas cuando las conductas descritas se realizaren en el marco de operaciones de cambio o comercio exterior, o se introdujeren mercancías al territorio nacional.

Teniendo en cuenta los rangos de las penas, se puede colegir que el legislador ecuatoriano ha valorado la gravedad de la respectiva modalidad del lavado de activos en función de los siguientes criterios:



Tanto desde el punto de vista conceptual como de su tipificación legal a nivel nacional e internacional, el lavado de activos presupone un delito subyacente, base o previo. A nivel procesal, *a priori* esto puede plantear algunos desafíos. Por un lado, se puede presuponer la necesidad de verificar legalmente y de forma previa la existencia de dicho delito original. De otro lado, cabe dilucidar la importancia y pertinencia de concursar los delitos, no solamente con el fin de una eventual acumulación de penas, sino también con el propósito de identificar plenamente la estructura delictiva de forma integral.

Respecto a lo primero, la Corte Nacional de Justicia emitió la Resolución No. 20-2024 (R.O. 689-2S, 22-XI-2024), en la cual estableció como precedente jurisprudencial obligatorio el siguiente criterio: "Debido al carácter autónomo del delito de lavado de activos, bastará prueba indiciaria para demostrar el origen ilícito de los activos objeto del delito, sin que se requiera sentencia condenatoria respecto a los delitos previos".

En consecuencia, no es indispensable contar con una sentencia previa respecto a los delitos subyacentes para que se pueda procesar y sancionar el delito autónomo de lavado de activos. Además, no se exige prueba plena del origen ilícito de los activos objeto del delito, sino únicamente lo que jurídicamente se conoce como "prueba indiciaria", es decir, "una secuencia lógica de proposiciones que conectan premisas sobre hechos conocidos y probados, con conclusiones sobre hechos desconocidos que son materia de discusión" (Fundación Panamericana para el Desarrollo, 2021).

En lo concerniente al concurso de delitos, como se precisó, el artículo 317 del COIP no exige aplicar esta modalidad; únicamente la deja abierta y a disposición de la Fiscalía y los juzgadores cuando consideren pertinente aplicarla con base en los hechos del caso. En conformidad con los artículos 20 y 21 del COIP, existen dos tipos de concurso de delitos:



Concurso real:

Se aplica cuando a una persona le son atribuibles varios delitos autónomos e independientes dentro de un mismo esquema delictivo, en cuyo caso las penas privativas de libertad aplicables se pueden acumular hasta un máximo del doble de la pena más grave, pero nunca más allá de 40 años.



Concurso ideal:

Se aplica cuando una misma conducta es subsumible, es decir, encuadra o corresponde simultáneamente a varios tipos penales; en cuyo caso, se aplicará la pena de la infracción más grave.

En general, en los casos de lavado de activos sería aplicable el concurso real de delitos. Esto requeriría acumular en un mismo proceso la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos subyacentes o base (por ejemplo, tráfico de drogas, minería ilegal, trata de personas, etc.), con el de lavado de activos. En términos de identificación y desmantelamiento o afectación de los grupos o redes de crimen organizado, aplicar de forma sistemática el concurso real de delitos podría resultar altamente beneficioso. Sin embargo, en términos procesales, esto presentaría enormes desafíos, ya que requeriría un esfuerzo investigativo y probatorio de amplio espectro, que permita demostrar conforme a los exigentes estándares constitucionales y legales del proceso penal, cada uno de los delitos en cuestión. A esto se añadirían aspectos de dogmática penal vinculados con la determinación de la participación criminal y los roles de cada persona procesada en la estructura delictiva, lo que de todas maneras también tendría implicaciones probatorias.

Por lo tanto, si bien aplicar ampliamente el concurso de delitos puede ser una práctica deseable desde el punto de vista político-criminal, se deben reconocer las vicisitudes procesales que su aplicación puede acarrear. No obstante, lo que sí resulta claramente factible y deseable, en línea con la citada resolución No. 20-2024 de la Corte Nacional de Justicia, es que en el procesamiento, juzgamiento y sanción del lavado de activos la Fiscalía y los juzgadores identifiquen, al menos en términos indiciarios, los delitos base, precedentes o subyacentes. De esta manera, se podrían identificar con mayor fiabilidad las diversas estructuras, redes y expresiones del crimen organizado en el país, y especialmente las formas de operación, alcance, localización, intensidad y magnitud de las diferentes economías ilícitas que se encuentran operando en el territorio nacional.

b. Marco conceptual

El lavado de activos o blanqueo de capitales es una de las actividades ilícitas consustanciales a los grupos y redes de crimen organizado. La UNODC (2026a) lo conceptualiza como “el procesamiento de productos del delito para disimular su origen ilegal”; siendo por ende “un delito, que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes - dinerarios o no, que en realidad son productos o ‘ganancias’ de delitos graves” (UNODC, 2026a), tales como el narcotráfico, trata de personas, corrupción, entre otros. Según el mismo organismo, esta actividad ilícita es de importancia crítica porque permite a los delincuentes disfrutar de dichas ganancias sin poner en peligro su fuente (UNODC, 2026a).

En la misma línea, según el glosario de definiciones del GAFILAT (2024), el lavado de activos es:

> *El proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (por ej. narcotráfico o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, crímenes de guante blanco, extorsión, secuestro, piratería, etc.). El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.*

Entendido como un proceso o conjunto de operaciones, el lavado de activos puede identificarse y examinarse a través de una serie de niveles o fases; en ese sentido, existe un consenso a nivel internacional que las clasifica de la siguiente manera (OECO, 2024a):

Tabla 2
Fases y dinámicas del lavado de activos

Fase del lavado de activos	Dinámica	Ejemplos y prácticas comunes
1. Colocación	Momento primario en el que, tras percibir los activos ilícitos, se inicia su proceso de lavado separándolos del delito fuente. Consiste en ubicar o introducir transitoriamente el activo en el mercado legal formal de manera estática (conserva su origen ilícito amparado bajo denominaciones formales). El objetivo es evitar su rastreo, comiso, incautación o deterioro.	• Inscripción en productos financieros. • Inversiones y compra de títulos o acciones. • Pagos anticipados de servicios de suministro. • Transferencias telegráficas.

Fase del lavado de activos	Dinámica	Ejemplos y prácticas comunes
2. Estratificación	Etapa donde se inicia la conversión del activo mediante múltiples operaciones económicas y financieras. Consiste en superponer diferentes capas u operaciones sucesivas sobre el mismo activo para disimular su origen ilícito y dificultar su rastreo por parte de las autoridades.	• Constitución de empresas fachada (ghost o shell companies). • Adquisición de bienes sobrevalorados. • Pago de anticipos en alquileres o servicios. • Compra de títulos valores. • Traslados de fondos entre cuentas, patrimonios autónomos o activos bursátiles.
3. Integración	Es la etapa final en la cual el dinero o los activos vuelven al sistema económico bajo el disfraz de una aparente legalidad. Los fondos ya "blanqueados" simulan provenir de actividades legítimas y son reinvertidos en la economía real sin generar sospechas sobre su verdadero origen.	• Reinversión en nuevas operaciones financieras o negocios lícitos. • Actividades que suelen implicar delitos conexos, como la defraudación tributaria o el testaferrismo.

Elaboración: Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

Si bien, en general, las actividades y operaciones correspondientes a cada una de estas fases se pueden diferenciar con bastante claridad, como explica la UNODC (2026b) en la práctica no en todos los casos de lavado de activos se atraviesan las tres etapas; por ejemplo, algunas de ellas podrían combinarse o repetirse varias veces. Por consiguiente, los grupos o redes de delincuencia organizada pueden lavar dinero de múltiples formas y en diversos niveles o capas, lo cual dificulta aún más los esfuerzos de detección y respuesta por parte de los sujetos obligados y las entidades de control. A eso se agrega el uso cada vez más frecuente y diversificado de la tecnología, así como de actores profesionales con habilidades y especialidades en diversas materias (UNODC, 2026c).

El uso de facilitadores profesionales por parte del crimen organizado para sus actividades ilícitas, y en particular para el lavado de activos, ha sido motivo de preocupación por parte de las entidades internacionales de control y seguimiento desde hace ya mucho tiempo. Un informe del Banco Mundial (Does de Willebois et al., 2011) basado en el estudio de 150 casos reales y entrevistas con actores relevantes, reveló que las organizaciones delictivas incluyen o infiltran en sus operaciones a profesionales con conocimientos técnicos y acceso a sistemas financieros, administrativos o gubernamentales legales, que desempeñan un papel central en la ocultación de beneficiarios efectivos y activos ilícitos.

Entre estos actores se incluyen asesores financieros, abogados, contadores, e incluso proveedores especializados en la creación y administración de sociedades y fideicomisos. Según dicho reporte, la participación de intermediarios profesionales es un patrón recurrente, y hay quienes lo hacen de buena fe, o por negligencia, o directamente como participantes intencionales y activos de los esquemas ilícitos. Si bien el citado informe resalta la importancia de estos facilitadores, la cuestión que más destaca es la necesidad de identificar a los beneficiarios efectivos de las operaciones ilícitas. En esa misma línea, entre las principales recomendaciones del Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la UNODC (2025a) se encuentra enfocar las estrategias de respuesta sobre mandos medios de las redes u organizaciones de crimen organizado, específicamente aquellos con gran capital social y habilidades especializadas; esto incluye, entre otros, lavadores de dinero.

De lo explicado en este y otros reportes, se desprende la importancia de implementar estrategias integrales basadas en mejorar el manejo de información y accesibilidad de los registros societarios; requerir a bancos y proveedores de servicios corporativos realizar una debida diligencia efectiva y continua sobre los beneficiarios efectivos; reforzar la supervisión y sanción del incumplimiento; concentrar la información relevante dentro de cada jurisdicción; y fortalecer las capacidades de investigación, especialmente para enfrentar estructuras transnacionales. De allí que sea indispensable una cooperación coordinada entre registros, entidades financieras, profesionales, autoridades investigadoras y jurisdicciones internacionales para superar la opacidad corporativa y rastrear eficazmente los productos de las actividades ilícitas.

En línea con este marco conceptual, la UAFE ha emitido a lo largo de los últimos años una serie de resoluciones, a través de las cuales ha ido ampliando el catálogo de sujetos obligados, a fin de que las acciones de control puedan ser más efectivas e integrales.

A continuación, un resumen de las resoluciones emitidas desde 2022 hasta la actualidad:

Tabla 3
Resoluciones de la UAFE sobre sujetos obligados, 2023 - 2025

Sector	No. de resolución	Fecha	Alcance y contenido	Transacciones y operaciones
Abogados	UAFE DG-2022-0129	08/04/2022	Notificar a abogados, otros profesionales del derecho y personas jurídicas que ofrecen servicios legales o societarios.	• Compra y venta de bienes inmobiliarios. • Administración de dinero, valores, cuentas bancarias u otros activos. • Organización de contribuciones para creación/operación de empresas. • Creación, operación, administración y compra/venta de personas jurídicas o fideicomisos. • Actuación como agente de creación, director, apoderado, fideicomisario. • Provisión de domicilio registrado/comercial/postal.
Contadores	UAFE DG-2022-0130	08/04/2022	Notificar a contadores o personas jurídicas que ofrecen servicios contables, incluyendo auditoría.	• Compra y venta de bienes inmobiliarios. • Administración de dinero, valores y otros activos del cliente. • Administración de cuentas bancarias, de ahorros o valores. • Organización de contribuciones para creación, operación o administración de empresas. • Creación, operación o administración de personas jurídicas y compra/venta de entidades.

Sector	No. de resolución	Fecha	Alcance y contenido	Transacciones y operaciones
Proveedores de servicios de activos virtuales	UAFE DG-2022-0131	08/04/2022	Notificar a los proveedores de servicios de activos virtuales (personas naturales y jurídicas).	• Intercambio entre activos virtuales y monedas de curso legal (y viceversa). • Intercambio entre una o más formas de activos virtuales. • Transferencia de activos virtuales. • Custodia y/o administración de activos virtuales o instrumentos de control. • Participación/provisión de servicios financieros para oferta/venta de activo virtual.
Contadores	UAFE DG-2022-0250	09/06/2022	Reformar la resolución No.UAFE DG-2022-0130 de 08 de abril de 2022.	• Actualización normativa y precisiones para servicios contables y de auditoría.
Proveedores de servicios de activos virtuales	UAFE DG-2022-0577	11/10/2022	Reformar la resolución No. UAFE DG-2022-0131 de 08 de abril de 2022.	• Intercambio entre activos virtuales y fiat / entre activos virtuales. • Transferencia, custodia y/o administración de activos virtuales. • Provisión de servicios financieros para oferta/venta de activos virtuales.
Factoring	UAFE DG-2023-0688	22/09/2023	Notificar como sujetos obligados a compañías y empresas que prestan el servicio de factoring.	• Venta de facturas u otros documentos por cobrar. • Anticipo / desembolso final por venta de facturas. • Comisión por venta de facturas. • Reembolso factoring con recurso. • Resciliación de contrato / devolución de valores.

Sector	No. de resolución	Fecha	Alcance y contenido	Transacciones y operaciones
Clubes de fútbol	UAFE DG-2023-0702	04/10/2023	Notificar a clubes u organizaciones dedicadas al fútbol profesional (Serie A y B - LigaPro y FEF).	• Derechos de transmisión / auspicios comerciales • Venta / compra / préstamo de jugadores (recibo y entrega). • Venta de entradas (taquillas) / abonos hinchas (sociaturas). • Ganancias/beneficios por participación en torneos • Aportes de capital / donaciones recibidas y entregadas. • Convenios de arrendamiento/préstamo de infraestructura. • Pagos a cuerpo técnico y plantillas.
Actores específicos	UAFE DG-2023-0725	24/10/2023	Notificar a: jueces y fiscales; cúpula militar y policial (activo/ pasivo); directores de centros de rehabilitación social y guías (jefaturas); gerentes/directores de aduanas, aeropuertos y puertos; asambleístas.	• Inversiones / renovación / cancelación. • Compra/venta de acciones, participaciones, bienes muebles e inmuebles, activos virtuales. • Cuentas por cobrar / fondos complementarios de pensión/cesantía. • Remodelación de inmuebles / resciliación / donaciones otorgadas y recibidas / herencias.
Actores específicos	UAFE DG-2024-0010	12/01/2024	Reformar la Res No.UAFE-DG-2023-0725 agregando numeral séptimo al art. 2 (ámbito de aplicación) para incluir los demás actores señalados en el art. 1.	• Inclusión explicita de todos los actores señalados en el artículo 1 de la resolución base.

Sector	No. de resolución	Fecha	Alcance y contenido	Transacciones y operaciones
Blindaje de vehículos	UAFE DG-2025-0002	09/01/2025	Incorporar a personas jurídicas que presten el servicio de blindaje de vehículos (instalación de materiales balísticos/químicos, mantenimiento y reparación).	• Instalación de materiales para protección balística, química y otros en vehículos, así como servicios de mantenimiento y reparación de blindaje vehicular.

Elaboración: Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

Como reconoce el último informe de evaluación mutua del GAFILAT (2023), la inclusión en abril de 2022 como sujetos obligados de abogados, contadores y otros profesionales fue un avance importante, pero respecto del cual todavía no se pudo hacer una evaluación específica sobre su implementación y cumplimiento. Posteriormente, la UAFE ha continuado expandiendo la lista de sujetos obligados y especificando aún más sus obligaciones, como se desprende de las resoluciones detalladas en el cuadro previo. En todo caso, esto sugiere que, en general, las agencias de control del Estado ecuatoriano han tenido apertura para incorporar los estándares internacionales sobre la materia. Es menester indagar si la justicia penal también ha mostrado esa disposición. En ese marco, el presente estudio incorpora variables específicas respecto a este tipo de sujetos y sus actividades, cuyas habilidades técnicas y capital social pueden jugar un rol fundamental en la sofisticación de los métodos empleados por los grupos delictivos en sus actividades de lavado de activos.

c. Estimaciones y brechas en la eficacia del control

Por su propia naturaleza ilícita, no es factible estimar de forma exacta los montos del lavado de activos, tanto a nivel global como local. Lo que existen son estimaciones aproximadas a partir de ciertas evidencias indirectas. Así, se estima que el lavado de activos representa alrededor del 2%-5% del PIB global, lo que equivale a aproximadamente entre USD 800.000 millones y USD 2 billones de dólares anuales (UNODC, 2026b).

En el caso del Ecuador, un reciente estudio del OECO (2026b) presentó estimaciones derivadas del cálculo del tamaño de las economías ilícitas en el país, a partir de datos oficiales de incautaciones de droga, perjuicios provocados por actos de corrupción en la contratación pública, así como de la presencia de la minería ilegal. Dicho análisis estima que el lavado de activos en el Ecuador correspondería a un rango aproximado de entre USD 3.910 y USD 6.516 millones. Con relación a las mencionadas tres economías ilícitas, el OECO proyectó las siguientes estimaciones:

Tabla 4

Estimaciones del tamaño económico de tres mercados criminales (OECO, 2026b)

Mercado	Tamaño en USD	Consideración de la medición
Tráfico de sustancias sujetas a fiscalización	Entre USD 692 millones y USD 1.384 millones.	Incautación 2025: 211 tn (USD 415 millones)[1], equivalente a un estimado entre 30% al 60% de la circulación total.[2]
Minería ilegal	Entre USD 1.000 millones y USD 1.385 millones.[3]	Puntos de minería ilegal: 387 (Agencia de Regulación y Control Minero, 2025); cifra de exportación irregular de oro contrastada: USD 1.385 millones (Plan V, 2025).
Corrupción	Entre USD 731 millones y USD 1.244 millones.[4]	Porcentaje de desviación de fondos públicos en función del Índice de Percepción de Corrupción según estimaciones del BID, entre 10% y 17% de la contratación pública.

Elaboración: Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, 2026b.

1. El cálculo se realizó empleando la tabla de precios por sustancia sujeta a fiscalización de la 'Evaluación situacional del entorno estratégico del narcotráfico en Ecuador 2019-2022', elaborada por la Policía Nacional con el apoyo de PADF.
2. La estimación se realizó a través del cálculo de la tasa de interdicción de sustancias sujetas a fiscalización con cifras de la UNODC del Informe de Drogas 2025. Se presentan estimaciones moderadas para no sub o sobredimensionar el fenómeno.
3. Cifra confirmada en 2025 por la entonces Ministra del Interior, Mónica Palencia: https://x.com/MinInteriorEc/status/1883744749426770090
4. El cálculo se realizó con base en la información de la rendición de cuentas de la Secretaría Nacional de Contratación Pública, que establece que en 2025 se adjudicaron USD 7.319 millones en procesos de contratación pública.

Cabe indicar que los Estados y sus agencias de control a nivel mundial solo logran incautar o confiscar anualmente el 1% del total de flujos de dinero ilícito (ICAR, 2023; FATF, 2026). Además, las evaluaciones internacionales periódicas a las medidas dirigidas al combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo (AML/TF), demuestran un declive en su efectividad global (Legorano, 2023). Así, con base en datos del GAFI, para el año 2024 se estimó que la efectividad de este tipo de medidas a nivel mundial se había reducido del 30% al 28% (ICAR, 2024).

Este presumible déficit de eficacia paradójicamente contrasta con los esfuerzos que han venido realizando los Estados y gobiernos a nivel mundial. De hecho, al analizar más detalladamente los resultados de las evaluaciones del GAFI se observa que, en general, ha existido una mejora considerable por parte de los Estados en lo que respecta a la creación y diseño de medidas de cumplimiento, específicamente en lo que concierne a reformas normativas y formulación de políticas públicas (FATF, 2025b). Sin embargo, el principal problema sigue siendo la implementación y efectividad de estas medidas; en otras palabras, si bien existen normas, parámetros y mecanismos adecuados, su aplicación sigue siendo insuficiente o deficiente (FATF, 2025a; FATF, 2025b).

De otro lado, los grupos de delincuencia organizada constantemente buscan maneras de diversificar los métodos que utilizan para el blanqueo de capitales (UNODC, 2026b). En ese sentido, se ha observado con preocupación el uso cada vez más frecuente de mecanismos digitales, en particular los denominados criptoactivos y aplicaciones virtuales de diversa índole (FATF, 2025b). Así, se ha verificado el uso de activos virtuales para blanquear fondos procedentes de una amplia gama de delitos subyacentes, incluyendo comportamientos tan variados como fraudes en línea, ataques de ransomware, tráfico de drogas y precursores químicos, corrupción, financiación del terrorismo, mercados de la dark-net, entre otros (UNODC, 2026c). En este contexto, se han constatado una serie de estafas multimillonarias e indicios de que grupos de crimen organizado utilizan las criptomonedas para ocultar y blanquear fondos ilícitos (ICAR, 2023). Sin embargo, en este aspecto puntual el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI, particularmente la recomendación No. 15 relacionada con el uso de nuevas tecnologías y criptomonedas, sigue siendo un desafío por resolver, especialmente en lo atinente a la efectividad (FATF, 2025c).

Otra área que requiere especial atención es la de minería ilegal. Un reciente informe de la UNODC (2025b) alerta sobre la presencia de grupos de delincuencia organizada en actividades de minería, particularmente de extracción, transporte y comercialización de oro. En lo que concierne al lavado, dicho informe detalla cómo dichos grupos estarían ocultando el origen ilegal del oro a través de su confusión o mezcla con lotes legales, dentro de cuyo proceso también se invierten o reinvierten fondos ilícitos provenientes de otras actividades delictivas, como el narcotráfico. Esto guarda consonancia con lo observado por el OECO (2026b), respecto a que actualmente la minería ilegal constituye

el segundo mercado ilícito de mayor predominancia en el Ecuador, y cuya significancia reside en su capacidad para generar riqueza directa y servir como un mecanismo primario de lavado de activos para las ganancias del narcotráfico.

Respecto a las medidas de control antilavado, en el caso del Ecuador, el GAFILAT en su último informe de evaluación mutua (2023) destacó los esfuerzos realizados y medidas implementadas, especialmente en lo que respecta a la identificación y evaluación de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Al respecto, en general, el diagnóstico fue relativamente favorable, con 10 indicadores de efectividad valorados con cumplimiento moderado, y uno con cumplimiento sustancial. Sin embargo, Ecuador no recibió ninguna calificación de efectividad alta con relación a su sistema de antilavado. Además, en lo concerniente al cumplimiento de las 40 recomendaciones del GAFI, la evaluación arrojó los siguientes resultados:

Tabla 5
Cumplimiento de recomendaciones del GAFI por Ecuador, 2023

Calificaciones técnicas de cumplimiento	
Cumplida	10
Mayoritariamente cumplida	18
Parcialmente cumplida	11
No cumplida	1
No aplicable	0
Total	40

Elaboración: Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

Las recomendaciones que mostraron un cumplimiento parcial o incumplimiento concernieron principalmente a registros y seguimiento a actividades y profesiones no financieras designadas, así como a la utilización de herramientas de seguimiento, monitoreo y sanciones a instituciones bancarias por financiamiento al terrorismo. En tal sentido, Ecuador evitó ser incluido en la lista gris o negra del GAFI; el IEM concluye un nivel de riesgo de lavado de activos medio-alto y medio en financiamiento del terrorismo.

En consonancia con este diagnóstico, el índice de Basilea ALD/CFT para el año 2025, que mide el riesgo global de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ubica al Ecuador con un puntaje de 4,91[5], correspondiente a un nivel de riesgo medio (ICAR, 2025). Por consiguiente, si bien se han implementado políticas, normativa y acciones destacadas por parte del Estado ecuatoriano, persisten desafíos y brechas que todavía requieren atención y respuesta.

Según la citada evaluación del GAFI, en términos generales el Ecuador enfrenta desafíos en torno a la efectividad y eficacia de las medidas previstas en su ordenamiento jurídico, así como en el diseño e implementación de políticas públicas. De forma más específica, los aspectos que requieren mayor atención tienen que ver con lo siguiente:



Limitaciones en la identificación e investigación de casos de lavado de activos, particularmente en lo que respecta al desarrollo de investigaciones financieras paralelas; además, impulsar el uso de técnicas especiales de investigación.

Las investigaciones y procesos penales por lavado de activos se encuentran vinculados principalmente con el narcotráfico y la corrupción; y, en menor medida, con otras amenazas relevantes, como la minería ilegal o la trata de personas.



GAFILAT constató un promedio de 6 sentencias condenatorias anuales por lavado de activos, lo que en criterio de dicho organismo resulta limitado en función del perfil de riesgo y contexto del país. En ese sentido, al comparar con los porcentajes de sentencias condenatorias por delitos determinantes o base (p.ej., narcotráfico, corrupción, contrabando, entre otros), GAFILAT observó que las condenas por lavado de activos representan un porcentaje muy pequeño en contraste con las condenas obtenidas por las principales amenazas.

5. Según esta escala, un valor menor a 4,70 corresponde a un riesgo bajo, 4,70-6,08 a un riesgo medio, y mayor a 6,08 a un riesgo alto.



Si bien Ecuador aplica en buena medida acciones encaminadas a la incautación y comiso de bienes, no se advierte que la Fiscalía cuente con pautas o instrucciones precisas en esta materia, que podrían ser de utilidad para orientar la labor de los fiscales e investigadores y fortalecer la eficacia del sistema. Por lo cual, Ecuador requiere de mejoras considerables en su sistema de decomiso de activos.

Falta de consistencia entre las estadísticas mantenidas por el Consejo de la Judicatura y la información remitida por Fiscalía a GAFILAT; en concreto, se identificaron algunas sentencias condenatorias que no estuvieron reflejadas en tales sistemas estadísticos. Esto impide tener certeza en cuanto a la cantidad de casos de lavado de activos verdaderamente procesados y sentenciados.





En materia de activos virtuales, la Evaluación Nacional de Riesgos realizada por el Ecuador en el año 2021 condujo a la inclusión de los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) como sujetos obligados ante la UAFE. No obstante, el país aún no ha realizado un estudio específico que le permita identificar y evaluar los riesgos relativos al desarrollo de nuevas prácticas comerciales, nuevos productos, nuevos mecanismos de envíos, y nuevas tecnologías o tecnologías en desarrollo.

En su mayor parte estas observaciones tienen que ver con el funcionamiento y efectividad del sistema de justicia penal. En un Estado de Derecho, el sistema de justicia penal, como parte esencial del aparato judicial, tiene un rol fundamental en términos de juridicidad, legitimidad, cumplimiento y eficacia (Tyler, 2003). El proceso penal es el mecanismo idóneo para que el Estado ejerza el uso legítimo de la fuerza, a través de la investigación, procesamiento y sanción de las personas responsables de los delitos (Maculan & Gil, 2020). Únicamente de esta manera, siguiendo el trámite legal y garantizando el debido proceso, la imposición de una pena sobre una persona resulta admisible (Packer, 1964).

En esa misma línea, la imposición de medidas sobre bienes materiales, que van desde la incautación y pueden conducir al comiso (confiscación), solamente se encuentra respaldada jurídicamente si está antecedida de un debido proceso (Ivory & Esquivel, 2026). Por consiguiente, la justicia penal juega un papel indispensable con respecto al objetivo de neutralizar los beneficios económicos que pretenden los grupos de delincuencia organizada, así como identificar y recuperar los diversos bienes y activos utilizados con fines ilícitos.

d. Creación de la Unidad Judicial Especializada

Un hecho destacable dentro del periodo de estudio fue la puesta en funcionamiento de la Unidad Judicial Especializada para el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado. La creación de esta justicia especializada se puede considerar una respuesta institucional frente al drástico incremento de la violencia asociada al crimen organizado, y la insuficiencia de la justicia penal ordinaria para atender a esta problemática. Por ello, se planteó la necesidad de concentrar el conocimiento y juzgamiento de este tipo de delitos en un conjunto de órganos con formación, recursos y capacidades técnicas específicas. Esta justicia especializada se instituyó a través de una reforma legal al COFJ, concretamente incorporando tres disposiciones a continuación del artículo 230 (R.O.-S. 345, 8-XII-2020). Esta normativa caracterizó a la justicia especializada de la siguiente manera:

- Jurisdicción nacional con sede en la ciudad de Quito.
- Competencia general para delitos de corrupción y crimen organizado, que afecten los bienes jurídicos determinados en dicha norma[6].

- Competencia general para impulsar y supervisar todas las diligencias y actuaciones pre-procesales y procesales propias de la jurisdicción penal.

- Corresponde al Consejo de la Judicatura definir mediante resolución las circunstancias complementarias de los delitos que afecten los bienes jurídicos señalados, para que sean conocidos por los jueces especializados o por los jueces ordinarios.

Con esta base legal, el Consejo de la Judicatura emitió la Resolución 190-2021 de 19 de noviembre de 2021, mediante la cual creó la Unidad Judicial Especializada y el Tribunal Especializado, integrados por los jueces seleccionados en el proceso de concurso de merecimientos y oposición correspondiente. En esta resolución se incluyó una lista de los delitos de competencia de la Unidad Judicial Especializada, así como un conjunto de criterios para fijarla en cada caso concreto (artículo 4).

Posteriormente, el Consejo de la Judicatura continuó con el proceso de implementación de la justicia especializada y la selección de los jueces, para lo cual emitió las Resoluciones 218-2021, 061-2022, 062-2022 y 065-2022. De esta manera, se reglamentó el concurso para la selección y designación de jueces, así como las competencias de la Sala Especializada, entre otros aspectos procedimentales y logísticos. Mediante Resoluciones No. 287-2022 y 288-2022 de 1 de diciembre de 2022, el Consejo de la Judicatura designó a los jueces permanentes de las dependencias judiciales con competencia en delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, quienes se posesionaron y empezaron a ejercer funciones el 8 de diciembre de 2022. Por ende, el ámbito temporal (2023-2025) del presente estudio prácticamente coincide con el de la entrada en funcionamiento de la justicia especializada.

El lavado de activos es uno de los delitos contemplados en la lista del Anexo a la Resolución 190-2021, relacionado con el crimen organizado. Conforme a ello, cabe señalar que la determinación de la competencia para el juzgamiento de este y los demás delitos no es categórica ni unívoca. Las reglas fundamentales de la competencia material de la Unidad Judicial Especializada se encuentran recogidas en la citada Resolución, así como en el COFJ y la Sentencia 9-22-IN/22 de la Corte Constitucional del Ecuador. Si bien estas reglas ofrecen criterios para distinguir si un caso debe ser sometido a la justicia especializada o a la ordinaria, existen cuestiones que dejan margen para la interpretación.

6. Humanidad, derechos de libertad, derechos de la propiedad, eficiencia de la administración pública, delitos económicos, producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delitos contra los recursos mineros, delitos contra la actividad hidrocarburífera, derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo y biocombustibles, contra la estructura del estado constitucional y, terrorismo y su financiación.

Por un lado, el artículo 230.1 del COFJ establece que la competencia de la Unidad Judicial Especializada corresponde a los delitos relacionados con corrupción y crimen organizado que amparen una serie de bienes jurídicos allí enlistados. Sin embargo, ese mismo precepto, en su segundo inciso, dispone que el Consejo de la Judicatura "determinará las circunstancias complementarias de los delitos que afecten los bienes jurídicos protegidos antes señalados, para que sean conocidos por las o los jueces especializados o por los jueces ordinarios". La Resolución 190-2021 contiene dichas circunstancias (artículo 4), que en síntesis hacen referencia a los siguientes aspectos:

- Que la perpetración de los delitos obedezca a la intervención de una estructura criminal organizada, de acuerdo con los parámetros y definiciones establecidas en el artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
- Funcionamiento de la estructura criminal organizada en un parámetro de continuidad y reiteración en el cometimiento de delitos.
- Trascendencia o connotación nacional y/o internacional provocada por el o los delitos presuntamente cometidos por los sujetos activos.
- Grave afectación a los bienes jurídicos protegidos que se encuentran establecidos en el artículo 230.1 del COFJ, siempre que se determine que los sujetos activos se adecuan a la primera circunstancia complementaria.
- Concurso real o ideal de infracciones que hayan afectado uno o más de los bienes jurídicos protegidos establecidos en el artículo 230.1 del COFJ, siempre que se determine que los sujetos activos se adecuan a la primera circunstancia complementaria.

Como se puede observar, la aplicación de estos criterios tiene una lógica casuística, es decir, que se deberá determinar en cada caso concreto, a partir de la formulación de cargos y criterio del fiscal a cargo. La referida resolución 190-2021 fue objeto de una acción de inconstitucionalidad decidida por la Corte Constitucional en la Sentencia 9-22-IN/22, a través de la cual dicho organismo estableció algunas condiciones específicas con relación a la determinación de la competencia en cada caso concreto:

Delitos relacionados con el crimen organizado:

Son de competencia de la Unidad Judicial Especializada los que constan en la lista anexa a la Resolución 190-2021, u otros adicionales (es decir, la lista no es taxativa), siempre que cumplan con los parámetros establecidos en el artículo 369 del COIP, que tipifica el delito de delincuencia organizada.

Delitos relacionados con corrupción:

Son de competencia de la Unidad Judicial Especializada únicamente los que constan en la lista de la Resolución 190-2021.

Considerando estos criterios se puede colegir que los casos de delitos de lavado de activos no siempre serán conocidos y juzgados por la Unidad Especializada, sino que dependerá de si se reúnen o no las circunstancias previstas en la Resolución 190-2021, así como los elementos constitutivos de un grupo de delincuencia organizada con base en lo contenido en el artículo 369 del COIP. Esta determinación dependerá principalmente del criterio de cada fiscal a cargo, como titular de la acción penal, con fundamento en los elementos fácticos del caso concreto y de los parámetros jurídicos antes mencionados.

Cabe precisar que la descripción normativa e institucional aquí expuesta corresponde al marco vigente durante el período analizado por este estudio (2023-2025). En septiembre de 2026, una vez concluido dicho período, el Consejo de la Judicatura, mediante Resolución 187-2026 de 7 de septiembre de 2026, reestructuró el modelo de juzgamiento especializado en delitos de corrupción y crimen organizado, trasladando estas competencias a judicaturas penales ordinarias de Quito y a la Corte Provincial de Pichincha.

e. Estándares jurídicos sobre medidas patrimoniales

En el marco del enfoque del OECO sobre las economías ilícitas y el componente patrimonial de las expresiones delictivas de los grupos de delincuencia organizada, es necesario dilucidar sucintamente los estándares jurídicos que rigen en el Ecuador respecto a la aplicación de medidas de carácter penal sobre los bienes, tanto más cuanto que el lavado de activos es un delito de naturaleza eminentemente patrimonial.

Una de las consecuencias ineludibles de enfocar la acción punitiva del Estado sobre las economías criminales debe ser el énfasis que se debe brindar a las medidas cautelares patrimoniales y penas sobre los bienes (principalmente comiso). Sin embargo, a diferencia de las medidas cautelares personales, el COIP y la legislación ecuatoriana en general no contienen estándares específicos para la solicitud, motivación y aplicación de las medidas cautelares reales. Así, el artículo 549 del COIP enlista las medidas que se pueden imponer y en su encabezado dispone que: "el juzgador podrá ordenar las siguientes medidas cautelares sobre los bienes, fondos, derechos, inversiones, acciones, participaciones, activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles de la persona natural o jurídica procesada".

Esta laxitud normativa impide contar con parámetros concretos sobre cuándo, cómo, en qué casos y con qué severidad procede solicitar e imponer una o más de estas medidas. Únicamente existen algunas reglas y estándares respecto a la incautación, que en general pueden ser aplicables en lo que corresponda al resto de medidas cautelares reales. El artículo 557 del COIP determina que el juez puede disponer la incautación de bienes a petición del fiscal, de conformidad con las siguientes reglas:

- Se deben individualizar los bienes que serán objeto de la medida, para lo cual se debe aportar información de los registros públicos correspondientes que permita identificar al bien incautado y sus características.
- El juez dispondrá que el ente encargado de la administración y gestión inmobiliaria del sector público asuma el depósito, custodia, enajenación, resguardo, control y correcta administración del bien incautado.
- Ese mismo ente regulará la forma de administración, custodia, enajenación, producción y cuidado de los bienes incautados, a fin de garantizar su conservación y, en el caso de devolución, su entrega o compensación económica.

- El mismo ente contará con el avalúo elaborado dentro de la investigación fiscal y realizará su propia determinación económica de los bienes, para efectos de gestionar su correcta administración, su enajenación anticipada, enajenación con la sentencia ejecutoriada o donación, para lo cual emitirá la regulación correspondiente.

- En caso de sentencia ejecutoriada, los dineros comisados, instrumentos monetarios, documentos bancarios, financieros o comerciales que hayan sido negociados, los bienes enajenados o los frutos de la administración, pasarán a formar parte de un fondo que se administrará en cuenta especial.

- En caso de que a la persona procesada se le ratifique su inocencia, se le devolverá los bienes que están bajo administración temporal.

- En caso de que hubiera transcurrido un año desde la suspensión del proceso por la falta de comparecencia del procesado al juicio, los bienes incautados podrán ser enajenados anticipadamente.

Según la primera regla es indispensable la individualización precisa de los bienes, con sus principales características, para lo cual se debe acudir a los registros públicos existentes. Igualmente, dentro de estas reglas se hace mención del avalúo, que se debe elaborar durante la "investigación fiscal", término que se puede considerar aplicable tanto a la fase de investigación previa como a la etapa de instrucción fiscal. Finalmente, varias de estas reglas regulan el escenario de la devolución de bienes o su equivalente en los casos en que se ratifique la inocencia de la persona procesada; y, en contrapartida, también la de los casos de sentencia condenatoria y la ejecución de la pena de comiso.
Con relación a la incautación como medida cautelar real, la Corte Constitucional ha emitido algunos estándares jurisprudenciales relevantes. Por un lado, la Corte ha distinguido la incautación como medida cautelar del comiso como pena:

> *[E]l comiso es una pena por el cometimiento de un hecho ilícito que la autoridad judicial impone una vez demostrada la culpabilidad; es decir, como consecuencia jurídica de una acción u omisión penalmente reprimida [...] en cuanto a la incautación, en cambio, el artículo 549 numeral 2 del COIP prevé que es una medida cautelar real.*

> *En concordancia con este artículo, el 557 numeral 8 del COIP señala que la incautación se mantendrá vigente mientras no se cuente con una resolución definitiva, y el numeral 12 establece que, si transcurrió un año desde la suspensión del proceso, por la falta de comparecencia del procesado al juicio, los bienes incautados podrán ser enajenados anticipadamente (Sentencia 357-20-EP/24).*

A partir de esta distinción, la Corte ha señalado que "el juez tiene la obligación de verificar que se cumplan los requisitos legales de cada figura (comiso como pena e incautación como medida cautelar real) y aplicarlos según corresponda" (Sentencia 357-20-EP/24). Por consiguiente, al ser el comiso una pena que solamente se puede imponer en sentencia, no cabe anticiparla y aplicarla en un momento o etapa procesal anterior. En consonancia con este criterio, la Corte Constitucional ha enfatizado reiteradamente que la incautación no puede durar indefinidamente:

> *[L]a autoridad judicial no puede incautar los bienes de la investigación penal de forma indefinida, ya que esto podría generar un enriquecimiento injusto por parte del Estado. Por el contrario, el juez tiene la obligación de establecer cuál será el destino de dichos bienes ya sea declarando el comiso en sentencia condenatoria o devolviendo los bienes a sus propietarios, conforme los requisitos legales y según corresponda en cada caso (Sentencia 2174-13-EP/20).*

En esta línea, la Corte se ha pronunciado en varias ocasiones acerca de la imposición del comiso sobre bienes pertenecientes a terceras personas que no son parte del proceso. En concreto, ha señalado que es obligación de los jueces verificar la verdad procesal respecto de la propiedad de un bien, y que imponer el comiso a través de una decisión que no sea una sentencia condenatoria puede configurar una práctica confiscatoria que vulnera el derecho constitucional a la propiedad (Sentencia 179-17-SEP-CC).

En tal sentido, el comiso penal, como regla general, solamente debe imponerse sobre bienes que sean de propiedad de una o más de las personas procesadas. Así, la Corte ha sostenido que imponer el comiso sobre bienes cuyo propietario no sea una persona declarada culpable por un delito genera incertidumbre y vulnera el derecho a la propiedad y la seguridad jurídica (Sentencia 1322-14-EP/20).

Como excepción a esta regla, el COIP sí permite en ciertos casos el comiso de bienes pertenecientes a terceros, de conformidad con el artículo 69.2.f), "cuando estos hayan sido adquiridos con conocimiento de que proceden del cometimiento de un delito o para imposibilitar el comiso de los bienes de la persona sentenciada".

Al respecto, la Corte ha señalado que, "si bien el objeto del comiso podría pertenecer a una tercera persona, no resulta irrazonable ordenarlo cuando fue adquirido con conocimiento de que procedía del cometimiento de un delito, y con el fin de imposibilitar el comiso de los bienes de la persona sentenciada" (Sentencia 780-18-EP/23). No obstante, la propia Corte ha enfatizado que la facultad de disponer el comiso de bienes de terceros no es amplia ni ilimitada, y que justamente debe sujetarse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 69.2.f) del COIP, ya que no acreditar suficientemente los requisitos exigidos por dicha disposición puede vulnerar la garantía de la motivación (Sentencia 402-21-EP/24).

Los parámetros jurídicos examinados determinan la necesidad de que las medidas cautelares y penas que se impongan sobre bienes estén precedidas de una debida individualización, caracterización e identificación; y, el COIP exige hacer un avalúo de los bienes como parte de la investigación fiscal. Asimismo, la jurisprudencia de la Corte requiere la determinación de la pertenencia de los bienes, tanto porque la incautación -y, por lógica jurídica, las demás medidas cautelares reales- no puede durar indefinidamente; también porque al momento de dictar sentencia el juez o tribunal debe tener perfectamente claro si el bien es de una de las personas que va a ser condenada o de un tercero que no es parte del proceso penal. En definitiva, resulta necesario que en los procesos penales se cuenten con estudios patrimoniales de los bienes presuntamente ilícitos.

Vale la pena mencionar que la UNODC y el Banco Mundial publicaron en el año 2021 un manual para la recuperación de activos (Brun et al., 2021), en el que se detallan algunos aspectos relevantes con relación a la incautación y comiso (confiscación) de bienes relacionados con el cometimiento de delitos. En este sentido, el citado manual

contiene una serie de recomendaciones respecto al cumplimiento de las garantías del debido proceso y la importancia de evitar errores que pueden causar declaratorias de nulidad e impedir la disposición de los bienes incautados. Por ello, el manual recomienda establecer un sistema eficiente de gestión de procesos, que incluya los siguientes elementos:

- Se deben individualizar los bienes que serán objeto de la medida, para lo cual se debe aportar información de los registros públicos correspondientes que permita identificar al bien incautado y sus características.

- El juez dispondrá que el ente encargado de la administración y gestión inmobiliaria del sector público asuma el depósito, custodia, enajenación, resguardo, control y correcta administración del bien incautado.

- Ese mismo ente regulará la forma de administración, custodia, enajenación, producción y cuidado de los bienes incautados, a fin de garantizar su conservación y, en el caso de devolución, su entrega o compensación económica.

- Políticas y procedimientos adecuados para asegurar que las formulaciones de cargos sean prolijas, la evidencia se obtenga de forma diáfana y asegurando la cadena de custodia, y que las garantías del debido proceso sean respetadas.

- En los casos de investigaciones complejas o muy extensas, asignar fiscales e investigadores especializados, que se encarguen de las tareas de recolección, mantenimiento y seguridad de los bienes y evidencias obtenidas.

- Planificación y liderazgo estratégicos, que permitan que el proceso de toma de decisiones sea rápido y fluido, especialmente ante situaciones imprevisibles que requieran aplicar nuevos métodos de investigación o análisis.

- Oportunidad y coordinación, que permitan identificar, anticipar y resolver cualquier riesgo en torno a la recuperación y disposición de los bienes incautados. Esto incluye no solamente la seguridad de los agentes y autoridades judiciales que intervienen en la investigación, sino también el aseguramiento de los bienes y la evitación de su pérdida por acciones fraudulentas de los presuntos delincuentes.

- Generar bases de datos electrónicas sobre casos de bienes incautados, que permitan una permanente actualización. Estas bases deberían incluir gráficos que ilustren el flujo de transacciones financieras, descripciones de cálculos sobre ingresos delictivos, y resúmenes de evidencia documental y testimonial.

Es importante tener en cuenta estos parámetros jurídicos, así como las recomendaciones de GAFILAT antes mencionadas, al momento de analizar la respuesta del sistema de justicia penal en general, y en los casos de lavado de activos en particular. De esta forma se podrá constatar si han existido avances en la eficacia de las medidas establecidas para la prevención, control y combate a esta expresión criminal.



4 Metodología para el análisis de casos y sentencias

a. Objetivo del estudio

Este estudio busca comprender cómo responde el sistema de justicia penal en su conjunto al delito de lavado de activos, a través del análisis y revisión documental exhaustiva de los procesos judiciales ingresados entre 2023 y 2025. De esta forma, se plantea identificar nodos críticos y áreas de mejora que fortalezcan la lucha contra el crimen organizado en el país. Además de evaluar el desempeño institucional, el análisis de las sentencias también permitirá identificar ciertos patrones operativos de las organizaciones criminales, que complementan la comprensión del fenómeno. Debido al rol del lavado de activos en las economías ilícitas y el crimen organizado, este estudio enfatizará el componente financiero, entendido como el motor de facilitación de los encadenamientos criminales. Asimismo, esta investigación buscará identificar los puntos críticos en los procedimientos y resoluciones judiciales a través de potenciales anomalías procesales que puedan favorecer a la impunidad en el cometimiento de este delito.

b. Base de datos utilizada

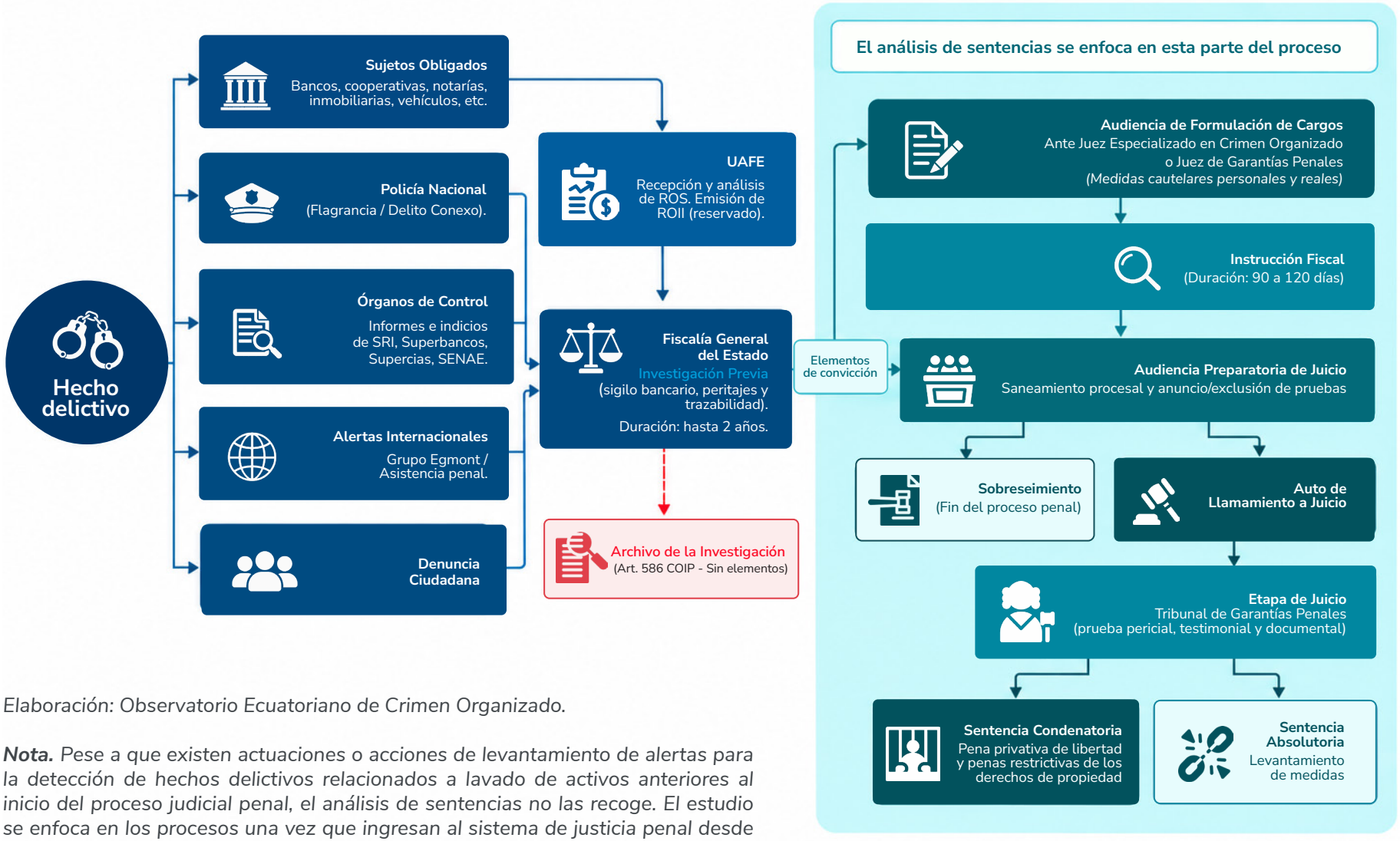
Para alcanzar este cometido, esta investigación parte de la construcción de una base de datos propia, generada de la consulta de datos abiertos del sistema SATJE. La construcción de la base de datos contempló la identificación del total de casos en materia penal ingresados durante el periodo de análisis de este estudio correspondientes al delito de lavado de activos. De esta revisión, se identificaron 48 causas a nivel nacional con códigos únicos en este ámbito. Cada caso fue analizado en su totalidad, desde su ingreso hasta la última resolución o actuación disponible registrada en el SATJE.

La base de datos se construyó a partir de la extracción automatizada de información, aplicando protocolos de revisión homogéneos sobre cada proceso judicial según la fase alcanzada. La revisión se aplicó sobre actas, autos, escritos y providencias disponibles en todas las fases procesales. Según las dimensiones y variables diseñadas, se consolidó una matriz con 256 ingresos, con 150 columnas de puntos de información y elementos de control sobre la extracción. El ejercicio automatizado fue acompañado posteriormente con una revisión manual caso por caso, con el propósito de verificar, auditar y corregir inconsistencias observadas de la automatización. La base de datos se consolidó con 249 observaciones, tras filtrar únicamente los casos determinados para este período de estudio, y 56 columnas de variables relevantes para el análisis, utilizando la información restante de manera referencial.

Esta base de datos comprende los expedientes de casos penales de lavado de activos que constan en el sistema SATJE, dentro del periodo de estudio. Esto quiere decir que únicamente se incluyen aquellos casos en los que se llevó a cabo alguna diligencia de carácter procesal ante alguna autoridad judicial (juez, tribunal o corte) y que, por lo tanto, se encuentran disponibles y accesibles de forma pública. Por consiguiente, este estudio no incluye expedientes relacionados con investigaciones previas, que corresponden a una fase pre-procesal y que, por lo tanto, tienen el carácter de reservado. En ese sentido, cabe aclarar que los datos que se mencionan a lo largo del presente informe referentes a investigaciones previas en curso o archivadas, corresponden a casos en los que se llevó a cabo una audiencia de calificación de flagrancia, pero sin formulación de cargos por parte de la Fiscalía. Igualmente, por la misma razón, el objeto del presente análisis no incluye reportes de actividades sospechosas o de otro tipo, ni alertas o informes de entidades financieras o de control. En definitiva, el enfoque de este trabajo es sobre los procesos y sentencias judiciales en materia penal, respecto del delito de lavado de activos.

Ilustración 1

Flujograma del proceso penal por el delito de lavado de activos



Elaboración: Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

Nota. *Pese a que existen actuaciones o acciones de levantamiento de alertas para la detección de hechos delictivos relacionados a lavado de activos anteriores al inicio del proceso judicial penal, el análisis de sentencias no las recoge. El estudio se enfoca en los procesos una vez que ingresan al sistema de justicia penal desde la primera actuación.*

c. Variables

Con el propósito de cumplir con el objetivo de este estudio y dar respuesta a las interrogantes planteadas, se diseñó una metodología basada en dimensiones, con sus respectivas variables asociadas al flujo procesal de un caso por lavado de activos en el sistema de justicia ecuatoriano. Para esto, se tomó como referencia las metodologías existentes del análisis de sentencias y casos judiciales a nivel regional e internacional, así como ejercicios e informes previos realizados por el OECO.

La metodología contempla 13 dimensiones de análisis, que se derivan en 56 variables que recogen información sobre las particularidades de cada proceso judicial. La aplicabilidad de cada variable está sujeta al desarrollo procesal del caso en particular. En este sentido, no todos los casos adecuan las mismas variaciones, por ende, el total de las variables pueden no ser aplicables en cada uno de ellos. La complejidad de la metodología busca ofrecer una posibilidad de análisis para el universo de casos pese a su naturaleza heterogénea, de ahí que según el nivel de análisis existan variaciones.

Tabla 6
Dimensiones y variables de codificación de registros judiciales

Dimensiones	Variable	
Temporalidad de la resolución	Fecha de ingreso del caso	Fecha de la resolución
	Fecha de Auto Llamamiento / Sobreseimiento	-
Diferimientos en audiencias	Número de diferimientos de audiencia preparatoria	Motivo, responsable e identificación
Tipo de procesado	Personas naturales	Personas jurídicas
Medidas cautelares	Reales	Medidas sobre personas jurídicas
	Detalle medidas reales	Detalle de la medida sobre la persona jurídica
	Personales	Prisión Preventiva
	Motivo de la medida cautelar diferente a la prisión preventiva	Motivo de no ejecución de la prisión preventiva

Dimensiones	Variable	
Perfil de las personas jurídicas	Denominación de la persona jurídica	Giro de negocio / actividad económica registrada
	RUC	Provincia de registro
Perfil de las personas naturales	Nombres	Provincia de nacimiento
	Apellidos	Cantón de domicilio
	Nacionalidad	Sexo
	Número de identificación	Servidor público
	País de origen	-
Detalles de la causa	Calificación de la legalidad de la detención en delito flagrante	Número de involucrados en el proceso
Bienes empleados	Bienes identificados en otros países	Localización geográfica de los bienes
	Avalúo de los bienes identificados	-
Intermediación financiera	Uso de instituciones financieras	Monto por cuenta
	Tipo institución financiera	Vinculación societaria
	Modalidad	Detalle institución financiera
Circunstancias del delito	Lugar de los hechos	Delito precedente
	Provincia de los hechos	Delito principal imputado
	Cantón de los hechos	-
Resolución	Tipo de resolución	Sanciones específicas para personas jurídicas
	Pena	Comiso
	Multa	Avalúo de los bienes
	Rol	Valor de los bienes comisados
Consonancia formulación fiscal / Decisión judicial	Bienes a los que se aplica medidas cautelares en la formulación fiscal	Bienes sancionados en la resolución judicial

Elaboración: Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

d. Detalles técnicos

Para esta investigación, se priorizó un enfoque descriptivo, con componentes cuantitativo y cualitativo de revisión exhaustiva de causas judiciales registradas por el delito de lavado de activos (artículo 317 del COIP), desde el 01 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2025. El análisis se desarrolló a partir de la revisión de ingresos en el SATJE y fuentes estatales complementarias. Para garantizar la rigurosidad técnica requerida, se priorizó como unidad de análisis a los individuos, ya sea personas naturales o jurídicas, vinculadas en cada caso. Por lo tanto, se determinó un universo de análisis de 249 observaciones, de las cuales 202 correspondieron a personas naturales y 47 a personas jurídicas. Sobre cada unidad se extrajeron datos de tipo numérico, textual o compuestos, de acuerdo con los parámetros metodológicos construidos para este estudio. Los puntos de información fueron posteriormente estandarizados y analizados en conjunto por tipo de procesado y variable, para poder establecer descripciones generalizables sobre el total de procesados y del proceso en su conjunto. Los resultados presentados a continuación corresponden a los patrones observados derivados del proceso metodológico aquí descrito.

e. Nota terminológica

Es necesario hacer algunas acotaciones respecto al uso de los términos jurídicos empleados a lo largo de este estudio. En general, es importante precisar que el análisis que se presenta tiene como finalidad medir el funcionamiento del sistema de justicia penal con relación al lavado de activos, a través de una serie de indicadores y variables. En tal sentido, al momento de detallar algunos hallazgos se ha priorizado utilizar ciertas denominaciones de una manera descriptiva e ilustrativa, que pueda ser entendible por un público amplio. En algunos casos, esto puede restarle cierta precisión a términos que tienen un significado específico en el ámbito jurídico. Por ejemplo, si bien un proceso penal inicia únicamente con la formulación de cargos por parte de la Fiscalía, en este estudio se tratan indistintamente como procesos, expedientes, causas o casos, tanto aquellos que pudieron concluir con una sentencia, como también los que fueron archivados durante la investigación previa. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la distinción entre sobreseimiento por falta de acusación fiscal y sobreseimiento por decisión judicial, aunque hubiese acusación. En ese y otros casos análogos, es importante recordar el espíritu divulgativo, descriptivo y didáctico del presente estudio.


BE
SAFE
TOP SECURITY

5 Resultados

En esta sección se presentan y describen los resultados del análisis de los expedientes y sentencias, conforme a lo descrito en la metodología del estudio. En ese sentido, es importante tener en cuenta que algunos hallazgos tienen como unidad de análisis el proceso, y otros a la persona procesada; esta distinción se hace de forma explícita en cada caso. La referencia a cada año del periodo objeto de estudio (2023-2025) corresponde al del inicio o ingreso del caso al sistema de justicia penal.

a. Análisis de las resoluciones emitidas por el sistema de justicia penal para casos de lavado de activos

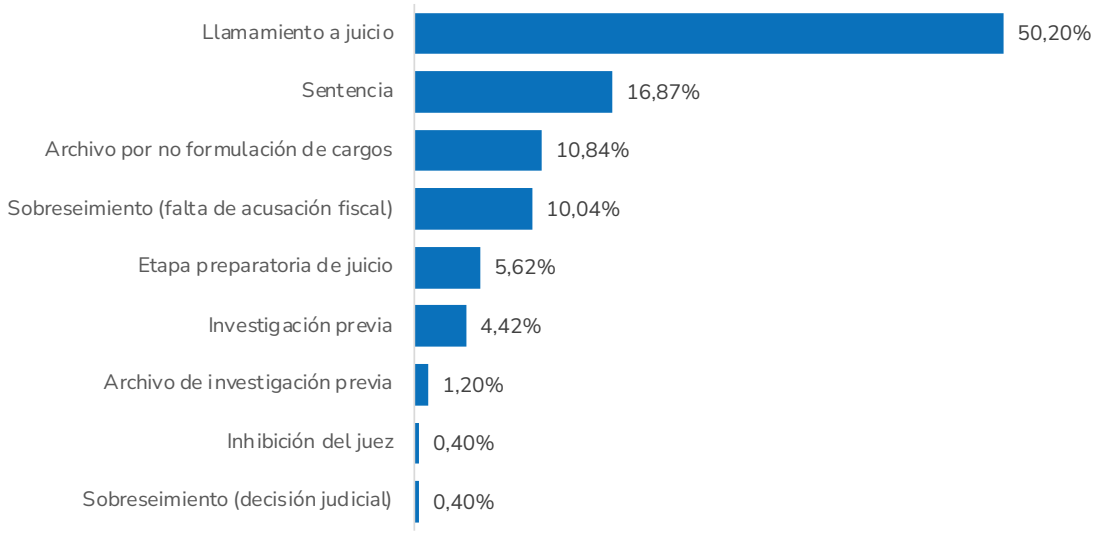
i. Origen de la información de los casos

En cuanto al origen de la información que dio lugar al inicio de las investigaciones por lavado de activos, se observa un claro predominio de la flagrancia como fuente principal, la cual originó 31 de los 48 procesos analizados (64,58%). En segundo lugar, se ubican los reportes de operaciones inusuales e injustificadas (ROII) remitidos por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que dieron origen a 9 procesos (18,75%). Le siguen, en menor proporción, la investigación policial, con 3 casos (6,25%); la asistencia penal internacional y la derivación interna desde la Fiscalía, con 2 procesos cada una (4,17%); y, finalmente, 1 proceso (2,08%) que se originó a partir de una orden judicial. Esta distribución evidencia que, al igual que en periodos anteriores, la respuesta del sistema de justicia frente al lavado de activos continúa dependiendo mayoritariamente de la detección reactiva en flagrancia, antes que de mecanismos de detección financiera proactiva como los reportes de la UAFE, cuya participación, aunque relevante, sigue siendo considerablemente menor.

ii. Tipo de resolución por procesado

En esta sección, se analiza la distribución de los distintos tipos de resolución emitidos por el sistema de justicia entre 2023 y 2025 por cada persona tanto natural como jurídica procesada. La evaluación de estas resoluciones permite identificar el grado de avance de los procesos a nivel individual, así como las principales respuestas institucionales frente a la situación judicial de los procesados.

Gráfico 1
Tipo de resolución por procesado, 2023 – 2025



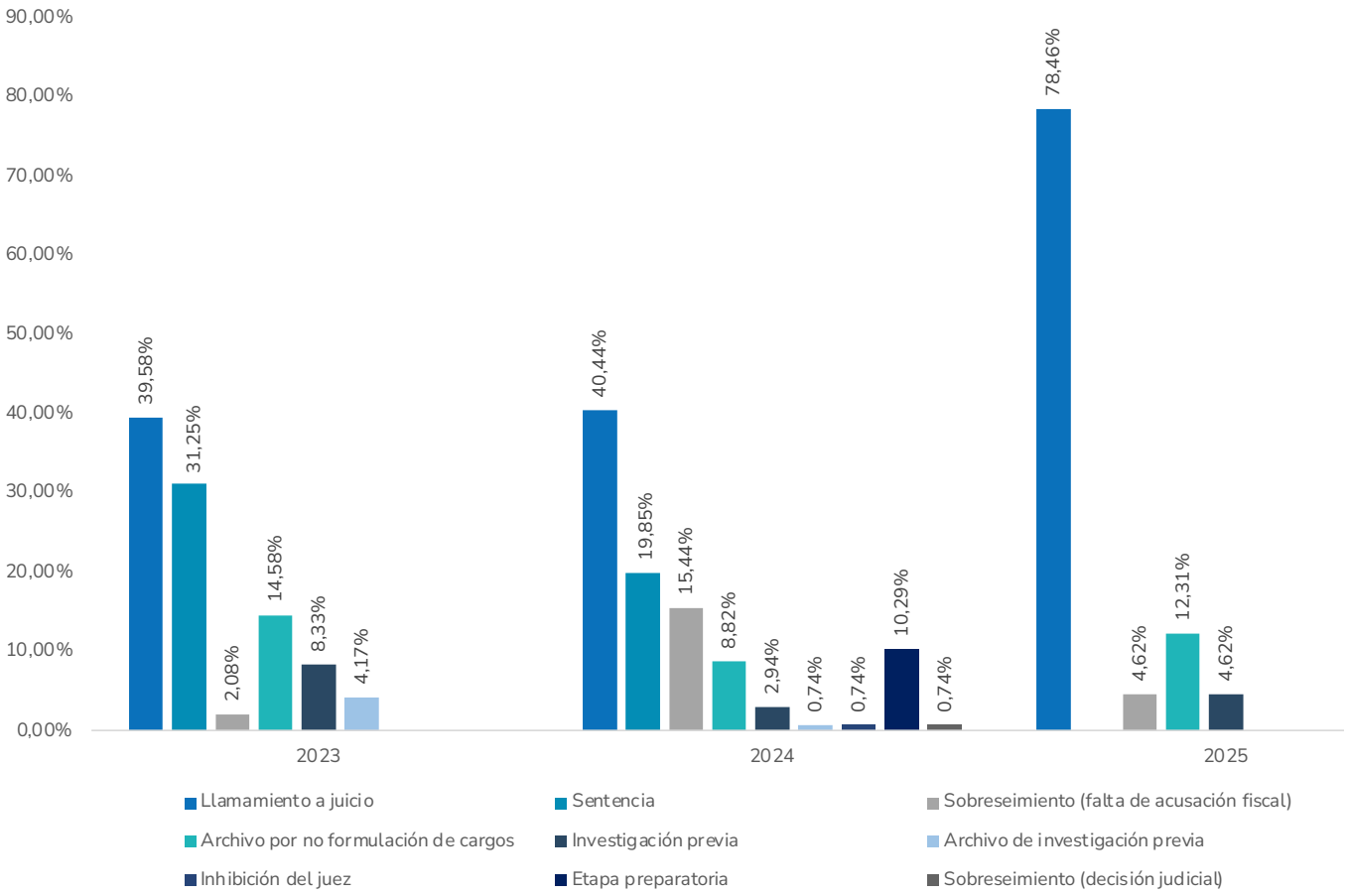
Fuente: *Consejo de la Judicatura, 2023-2025.*
Elaboración: *Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.*

De las 249 personas naturales y jurídicas procesadas identificadas en causas por lavado de activos durante el período 2023 a 2025, la resolución más frecuente es el llamamiento a juicio, el cual se dictó a 125 procesados cuyos casos siguen en trámite, equivalente al 50,20% del total. Además, como se puede observar en el **Gráfico 1,** la segunda resolución con mayor incidencia corresponde a sentencias, registradas para 42 procesados (16,87%); seguida por los archivos por no formulación de cargos para 27 procesados (10,84%); y el sobreseimiento por falta de acusación fiscal, el cual alcanzó a 25 personas (10,04%).

En menor medida, se registraron 14 procesados (5,62%) cuyos casos permanecen en etapa preparatoria de juicio, y 11 procesados (4,42%) se mantienen en investigación previa al momento del levantamiento de la información. Las resoluciones menos frecuentes fueron el archivo de investigación previa, que se registró para 3 procesados (1,20%), así como la inhibición del juez y el sobreseimiento por decisión judicial, cada una con 1 procesado (0,40%).

En virtud de ello, la distribución de resoluciones refleja que el sistema de justicia ha podido trasladar más del 50% de casos hacia una instancia posterior a la instrucción fiscal. Sin embargo, la diferencia entre el número de llamamientos a juicio y el de sentencias también evidencia que una parte considerable de las causas aún no ha alcanzado una resolución definitiva al momento del análisis. En comparación con el análisis de sentencias de 2020 a 2022, que arrojaba un 56,2% de procesados con casos en trámite, se observa un ligero aumento de 4 puntos porcentuales para el período de análisis actual (60,24%). Esto significa que aún más de la mitad de los procesados hasta la fecha de corte de este estudio continúa a la espera de la realización de la audiencia de juicio para determinar su culpabilidad o ratificar su inocencia.

Gráfico 2
Tipo de resolución anual por procesado, 2023 - 2025



Fuente: *Consejo de la Judicatura, 2023-2025.*
Elaboración: *Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.*

Nota. *Las categorías con valor 0% han sido omitidas del gráfico.*

Al desagregar el análisis por el año de ingreso de los procesos, se puede constatar diferencias importantes en el grado de avance procesal de las causas de lavado de activos. Mientras que los procesos más antiguos presentan una mayor proporción de sentencias, los casos más recientes se concentran principalmente en etapas intermedias del procedimiento penal, particularmente en lo que respecta al llamamiento de juicio.

Para los procesos ingresados en el 2023 se registraron 48 procesados vinculados a delitos de lavado de activos. De ellos, 19 personas (39,58%) recibieron llamamiento a juicio, constituyéndose en la resolución predominante para ese año. La segunda resolución más frecuente correspondió a sentencias, registradas para 15 procesados (31,25%), lo que refleja un nivel importante de avance procesal respecto de los años posteriores. De igual forma, 7 procesados (14,58%) fueron objeto de archivo por no formulación de cargos, mientras que 4 (8,33%) permanecían en investigación previa. En menor medida, se registraron 2 archivos de investigación previa (4,17%) y 1 sobreseimiento por falta de acusación fiscal (2,08%). No se identificaron casos de inhibición judicial, etapa preparatoria de juicio ni sobreseimientos por decisión judicial. En tal virtud, los resultados de 2023 muestran una concentración importante de procesados en etapas avanzadas del proceso penal, puesto que, el llamamiento a juicio y las sentencias agruparían más del 70% de las resoluciones registradas para ese año.

Para 2024, el número de procesados ascendió a 136, constituyéndose en el año con mayor cantidad de personas vinculadas a procesos judiciales por lavado de activos. De ellas 55 procesados (40,44%) recibieron llamamiento a juicio, manteniéndose esta como la resolución predominante. Asimismo, se registraron 27 sentenciados (19,85%), cifra superior en términos absolutos a la observada en 2023. Por otra parte, se identificaron 21 sobreseimientos por falta de acusación fiscal (15,44%), 14 procesados en etapa preparatoria de juicio (10,29%), 12 archivos por no formulación de cargos (8,82%) y 4 investigaciones previas (2,94%). Adicionalmente, se registró 1 archivo de investigación previa (0,74%), 1 inhibición del juez (0,74%) y 1 sobreseimiento por decisión judicial (0,74%). A diferencia de lo observado en 2023, durante 2024 se evidencia una mayor diversidad de los desenlaces procesales y una presencia más significativa de resoluciones que concluyeron anticipadamente las causas mediante archivos o sobreseimientos.

Por su parte, los procesos ingresados en 2025 comprenden 65 procesados de los cuales 51 (78,46%) recibieron llamamiento a juicio. Esta proporción constituye la más alta observada durante todo el período analizado y refleja una marcada concentración de las resoluciones en esta etapa procesal. En contraste, no se registran sentencias (0%), situación consistente con la reciente incorporación de estas causas al sistema de justicia y con la duración considerable de los procesos de lavado de activos. Asimismo, 8 procesados (12,31%) recibieron archivo por no formulación de cargos, mientras que permanecieron en investigación previa y sobreseimiento por falta de acusación fiscal 3 personas (4,62%) por cada resolución. No se registraron archivos de investigación previa, inhibiciones judiciales, casos en etapa preparatoria de juicio, ni sobreseimientos por decisión judicial.

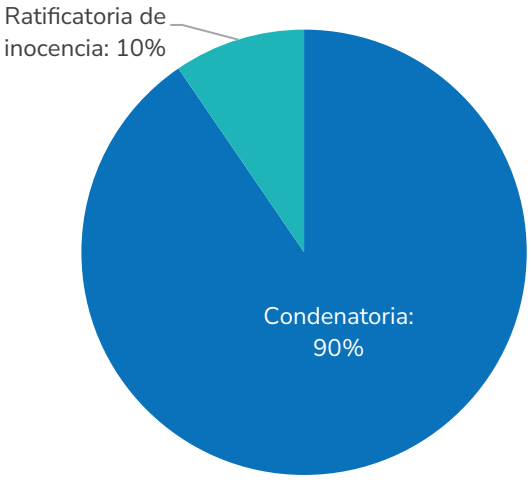
La distribución de las resoluciones, como se expone en el **Gráfico 2**, presenta una marcada concentración en la categoría de llamamiento a juicio. La ausencia de sentencias resulta consistente con la reciente incorporación de estas causas al sistema de justicia, puesto que, los procesos penales suelen requerir un tiempo prolongado para completar las etapas que conllevan a una resolución definitiva. Por ello, los datos de 2025 reflejan principalmente el estado de avance procesal de causas aún en desarrollo, más que su desenlace.

En general, los resultados muestran que el llamamiento a juicio constituye la resolución predominante para los procesados de lavado de activos durante el período analizado (2023 – 2025), concentrando más de la mitad de los casos registrados. También, se observa que las sentencias se encuentran principalmente asociadas a los procesos con el mayor tiempo de tramitación, mientras que las causas más recientes presentan una mayor concentración en etapas intermedias del procesamiento.

iii. Tipo de sentencia por procesado

Luego de haber examinado el tipo de resolución correspondiente a cada procesado, corresponde desagregar el tipo de sentencias dictadas por el sistema de justicia penal. Para ello, se analiza la distribución de los tipos de sentencia que se han emitido respecto a los procesados por lavado de activos entre 2023 y 2025, distinguiendo entre las condenatorias y las que corresponden a la ratificación de la inocencia. Este análisis permite adentrarse en el resultado final para los procesados cuyos casos culminaron su trámite judicial.

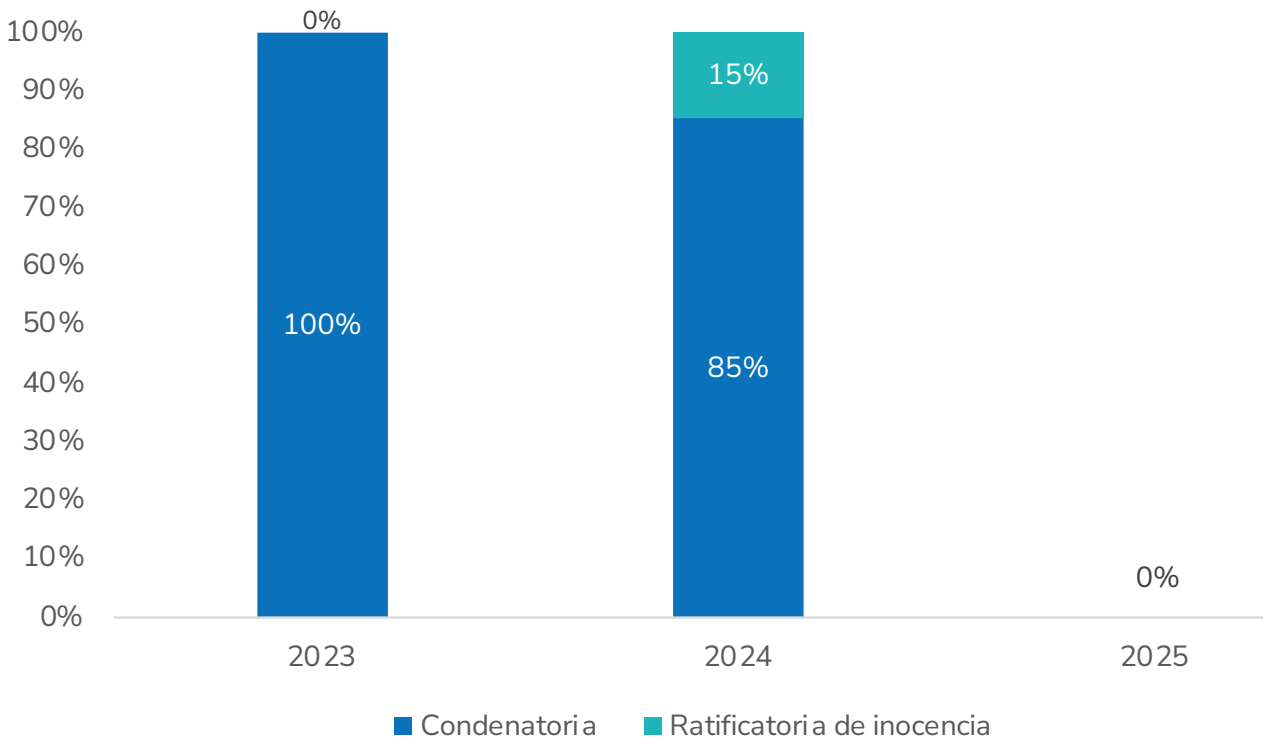
Gráfico 3
Tipo de sentencias por procesado, 2023 - 2025



Fuente: *Consejo de la Judicatura, 2023-2025.*
Elaboración: *Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.*

El total de procesados con sentencia correspondiente al período analizado alcanza la cifra de 42, distribuidos entre 8 casos, de los cuales 38 recibieron una sentencia condenatoria, mientras que, únicamente 4 se beneficiaron de una sentencia ratificatoria de inocencia. En términos porcentuales, esto quiere decir que las condenas representaron el 90% de las sentencias emitidas, frente al 10% correspondiente a decisiones de inocencia para los procesados. Si se considera el total de procesados, 15,3% recibieron sentencia condenatoria y 1,6% ratificatoria de inocencia. Esto evidencia un cambio importante con relación al estudio de sentencias 2020-2022, donde el número de procesados con una sentencia ratificatoria de inocencia (17,5%) más que duplicó el total de procesados con sentencia condenatoria (7,3%).

Gráfico 4
Tipo de sentencias anuales por procesado, 2023 - 2025



Fuente: *Consejo de la Judicatura, 2023-2025.*
Elaboración: *Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.*

En 2024 se registró el mayor número de procesados sentenciados del período de estudio, con un total de 27 a quienes se les emitió una resolución definitiva. De ellos, 23 recibieron sentencias condenatorias, mientras que 4 obtuvieron la ratificación de su inocencia. En esa línea, las condenas representaron el 85% de las sentencias emitidas durante dicho año, mientras que las ratificaciones de inocencia correspondieron al 15%.

En 2024 se registró el mayor número de procesados sentenciados del período de estudio, con un total de 27 a quienes se les emitió una resolución definitiva. De ellos, 23 recibieron sentencias condenatorias, mientras que 4 obtuvieron la ratificación de su inocencia. En esa línea, las condenas representaron el 85% de las sentencias emitidas durante dicho año, mientras que las ratificaciones de inocencia correspondieron al 15%.

De los casos ingresados en el año 2025 no se registran procesados con sentencia, por lo que no existen casos clasificados ni como condenatorios ni como ratificaciones de inocencia. Esta ausencia de resoluciones definitivas resulta consistente con la temporalidad de las causas ingresadas más recientemente al sistema de justicia.

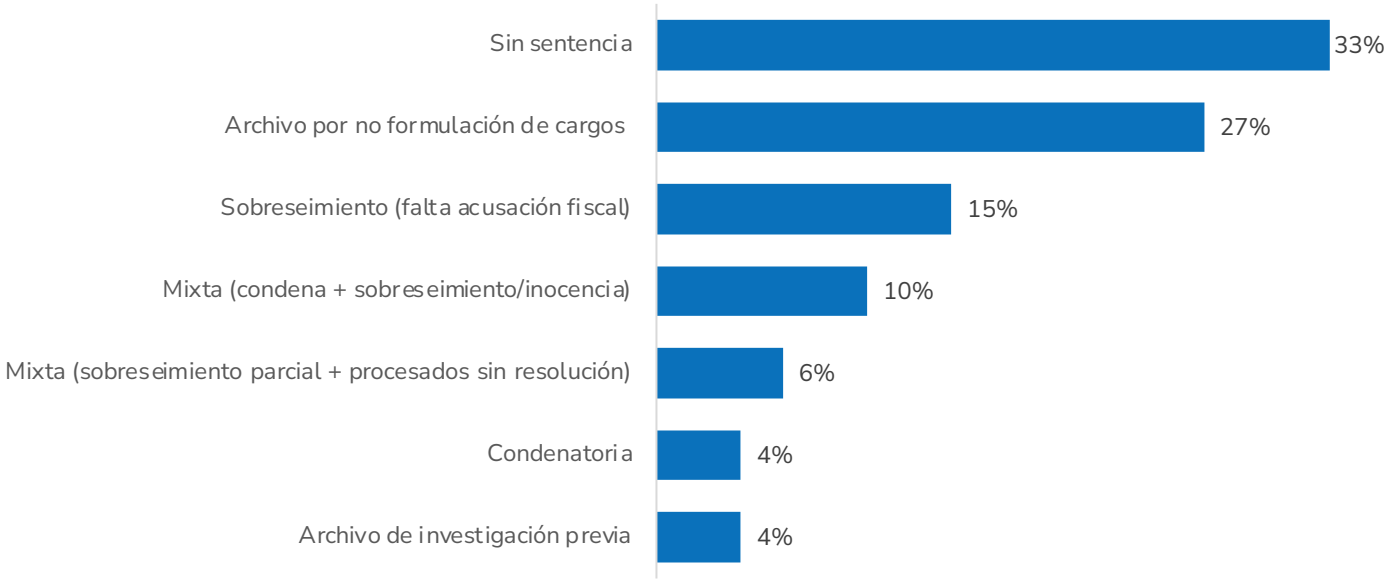
En suma, los resultados evidencian un claro predominio de las sentencias condenatorias dentro de las causas por lavado de activos que alcanzaron una resolución definitiva entre 2023 y 2025. De los 42 procesados sentenciados, casi nueve de cada diez concluyeron con una declaración de responsabilidad penal. Asimismo, las escasas ratificaciones de inocencia identificadas se concentraron exclusivamente en 2024, mientras que de los casos ingresados en 2025 aún no se registran sentencias de ningún tipo.

El resultado de 8 procesos con sentencia en el período 2023-2025, equivalentes a un promedio de 2,7 sentencias condenatorias por año, se ubica por debajo del promedio de 6 sentencias condenatorias anuales por lavado de activos que GAFILAT (2023) ya había calificado como limitado en función del perfil de riesgo del país.

iv. Tipo de resolución por caso

En los apartados anteriores se examinaron las resoluciones judiciales desde la perspectiva individual o por procesado, lo que permitió identificar la situación procesal de cada una de las personas involucradas en las causas por lavado de activos. Sin embargo, debido a que un mismo proceso puede involucrar múltiples procesados con resultados distintos, es necesario analizar las resoluciones desde la perspectiva de los expedientes judiciales, como se plantea a continuación.

Gráfico 5
Tipo de resolución por caso, 2023 – 2025



Fuente: *Consejo de la Judicatura, 2023-2025.*
Elaboración: *Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.*

Para el período analizado se identificaron 48 procesos judiciales por lavado de activos. La categoría más frecuente corresponde a los casos que aún no registran sentencia, con 16 procesos (33%). Le siguen los archivos por no formulación de cargos, con 13 procesos (27%); y los sobreseimientos por falta de acusación fiscal, con 7 procesos (15%). Estas tres categorías comprenden 36 de los 48 casos analizados, lo cual equivale al 75% del total.

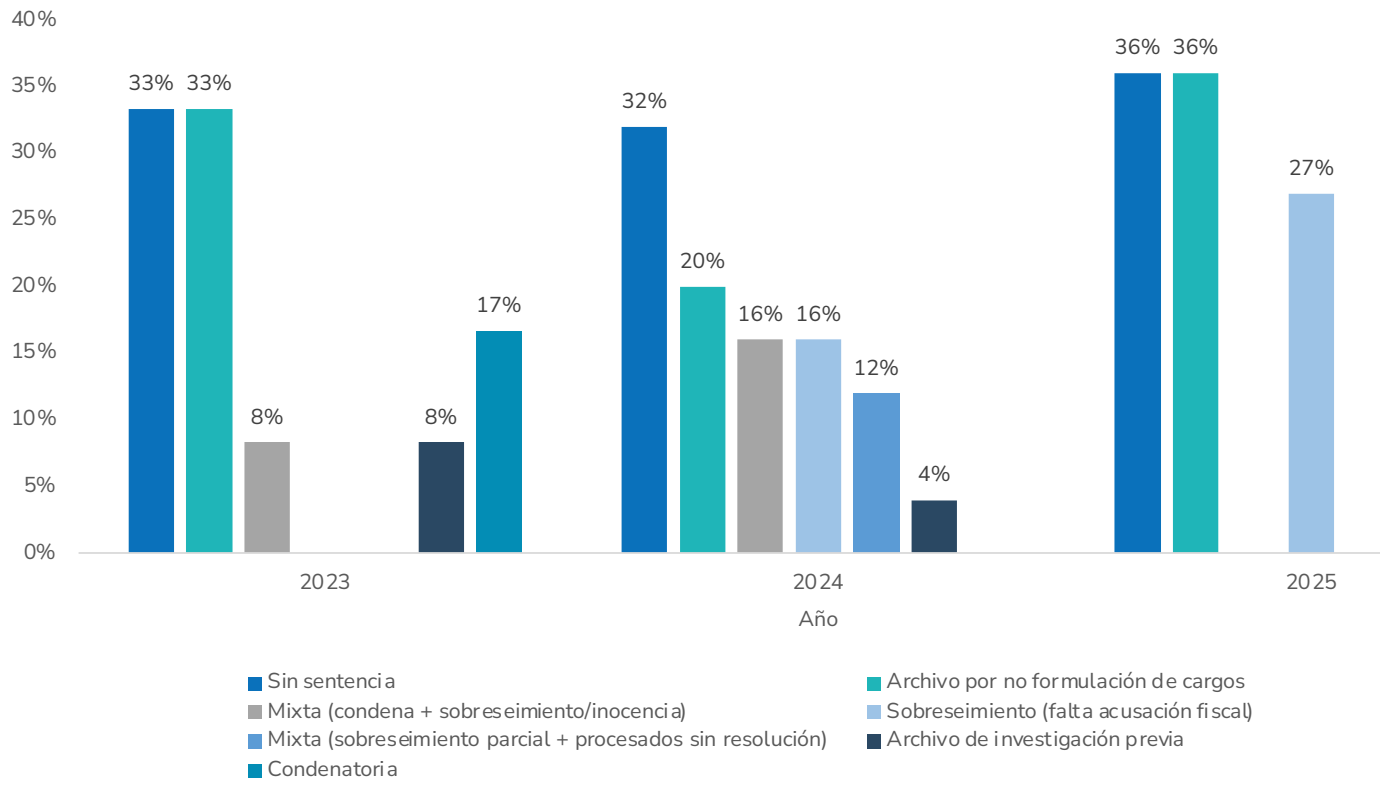
Adicionalmente, se registraron 5 casos con resoluciones mixtas que combinaron condenas con sobreseimientos o ratificaciones de inocencia (10%); 3 casos con resoluciones mixtas caracterizadas por sobreseimientos parciales y la existencia de procesados que aún no contaban con resolución definitiva (6%); y 2 procesos con sentencias íntegramente condenatorias (4%). Finalmente, se observaron archivos de investigación previa en 2 casos (4%).

En virtud de ello, como se observa en el **Gráfico 5**, la mayor parte de los procesos todavía no ha alcanzado una resolución judicial definitiva. La categoría de casos sin sentencia concentra un tercio de las causas analizadas, lo que evidencia que una proporción importante de los procesos se encuentra aún en fases intermedias o pendientes de

una decisión judicial final. El análisis por caso permite observar una realidad distinta del análisis por procesado: mientras que algunos expedientes alcanzaron sentencias condenatorias, también se identifican procesos con resultados mixtos, en los cuales los procesados obtuvieron resoluciones diferentes dentro de una misma causa.

De igual manera, vale mencionar que, las resoluciones que implicaron la terminación anticipada de los procesos, en particular archivos por no formulación de cargos (27%) y sobreseimientos por falta de acusación fiscal (15%), corresponden a 20 expedientes (42%), es decir, una proporción relevante de casos que no avanzaron a juzgamiento, lo que puede reflejar insuficiencia de elementos de convicción.

Gráfico 6
Tipo de resolución anual por caso, 2023 - 2025



Fuente: *Consejo de la Judicatura, 2023-2025.*
Elaboración: *Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.*

Nota. *Las categorías con valor 0% han sido omitidas del gráfico.*

En cuanto al análisis anual, para el 2023 se registraron 12 procesos judiciales por lavado de activos. Las resoluciones más frecuentes fueron los archivos por no formulación de cargos y los casos que aún no registraban sentencia, con 4 registros cada uno (33%). En general, ambas categorías representan 8 de los 12 casos iniciados en ese año, es decir, el 67%; evidenciando que una parte importante de las causas no había alcanzado una resolución judicial concluyente o culminaron sin la formulación de una acusación formal. De igual manera, se identificaron 2 procesos con sentencia condenatoria (17%), mientras que 1 caso (8%) fue archivado durante la fase pre-procesal de investigación, y otro caso (8%) correspondió a una resolución mixta en la que coexistieron condenas con sobreseimientos o ratificaciones de inocencia para los distintos procesados. Cabe indicar que no se registraron casos de tipo mixto por sobreseimiento parcial y procesados sin resolución, ni tampoco sobreseimientos por falta de acusación fiscal.

Debido a lo anterior, si bien se observa una diversidad de resultados para el año 2023, predominan las causas que no avanzaron hacia la etapa de juzgamiento, o que permanecían sin una sentencia al momento del análisis. No obstante, la presencia de tres procesos que alcanzaron algún tipo de decisión condenatoria, tanto las de carácter íntegramente condenatorio como las que tienen una naturaleza mixta, permite evidenciar que una proporción significativa de las investigaciones logró avanzar hasta etapas decisivas del proceso penal.

Para el 2024 se contabilizaron 25 procesos judiciales por lavado de activos, de los cuales, la categoría con mayor frecuencia de ocurrencia corresponde a los casos que aún no registraban sentencia, con 8 procesos (32%). Esta cifra indica que un tercio de las causas permanecía sin una resolución judicial definitiva al momento del análisis. Le siguen 5 archivos por no formulación de cargos (20%), mientras que hubo 4 resoluciones mixtas que combinaron condenas con sobreseimientos o ratificaciones de inocencia, y 4 sobreseimientos por falta de acusación fiscal, con equivalencia del 16% para cada una de estas categorías.

Por otra parte, se identificaron 3 procesos con resoluciones mixtas compuestas por sobreseimientos parciales y procesados sin resolución definitiva (12%), y un archivo de investigación previa (4%), a lo que no se registraron resoluciones íntegramente condenatorias (0%). Como se puede apreciar en el **Gráfico 6,** los procesos ingresados en 2024 presentan una mayor diversidad de desenlaces que los observados en 2023. Aunque los casos sin sentencia continúan siendo la categoría más frecuente, se aprecia una distribución más equilibrada entre los distintos tipos de resolución, incluyendo archivos, sobreseimientos y resoluciones mixtas.

Con relación al 2025, se constata el ingreso de un total de 11 procesos judiciales por lavado de activos al sistema de justicia. En tal virtud, las categorías más frecuentes responden a casos en los que aún no se registra sentencia, y a archivos por no formulación de cargos, con 4 procesos para cada una (36%). Estas dos categorías concentran 8 de los 11 casos analizados (73%), configurándose en la situación predominante para las causas

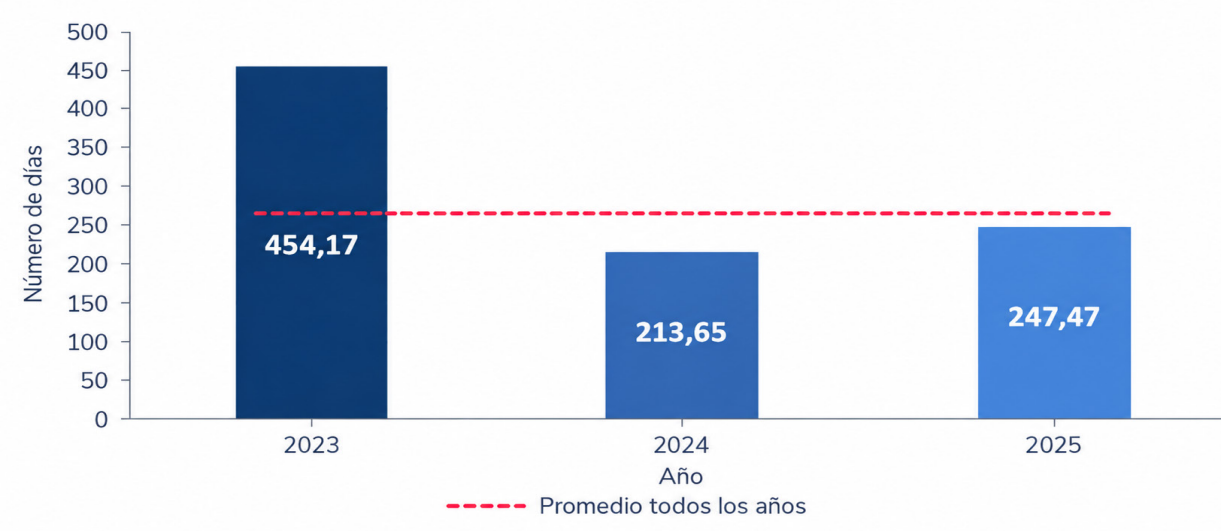
ingresadas ese año. Además, se identificaron 3 procesos con sobreseimiento por falta de acusación fiscal (27%). Contraponiéndose a ello, no se registraron casos con archivo de investigación previa, sentencias condenatorias, resoluciones mixtas que combinen condenas con sobreseimientos o ratificaciones de inocencia, ni tampoco resoluciones mixtas por sobreseimientos parciales y procesados sin resolución definitiva hasta la fecha de corte de este estudio.

Las resoluciones de los procesos se concentran en categorías que no han alcanzado una decisión judicial condenatoria. De hecho, un tercio de las causas permanecía sin sentencia al momento del análisis, mientras que el resto había concluido mediante archivos por no formulación de cargos o sobreseimiento por falta de acusación fiscal.

b. Investigaciones concluidas vs. procesos iniciados

De los 48 procesos ingresados al sistema de justicia entre 2023 y 2025 por lavado de activos, en el 54,1% —26 procesos que agrupan a 159 procesados— la etapa de instrucción fiscal llegó a su fin. Al sistema de justicia le tomó en promedio 265,4 días, desde el inicio del proceso, concluir las investigaciones procesales y pronunciarse sobre llevar a los procesados a juicio (llamamiento a juicio), o abstenerse de acusarles por falta de evidencia u otro motivo legal (sobreseimientos).

Gráfico 7
Promedio de duración del proceso judicial desde su ingreso hasta una primera resolución (llamamiento a juicio o sobreseimiento), 2023 - 2025

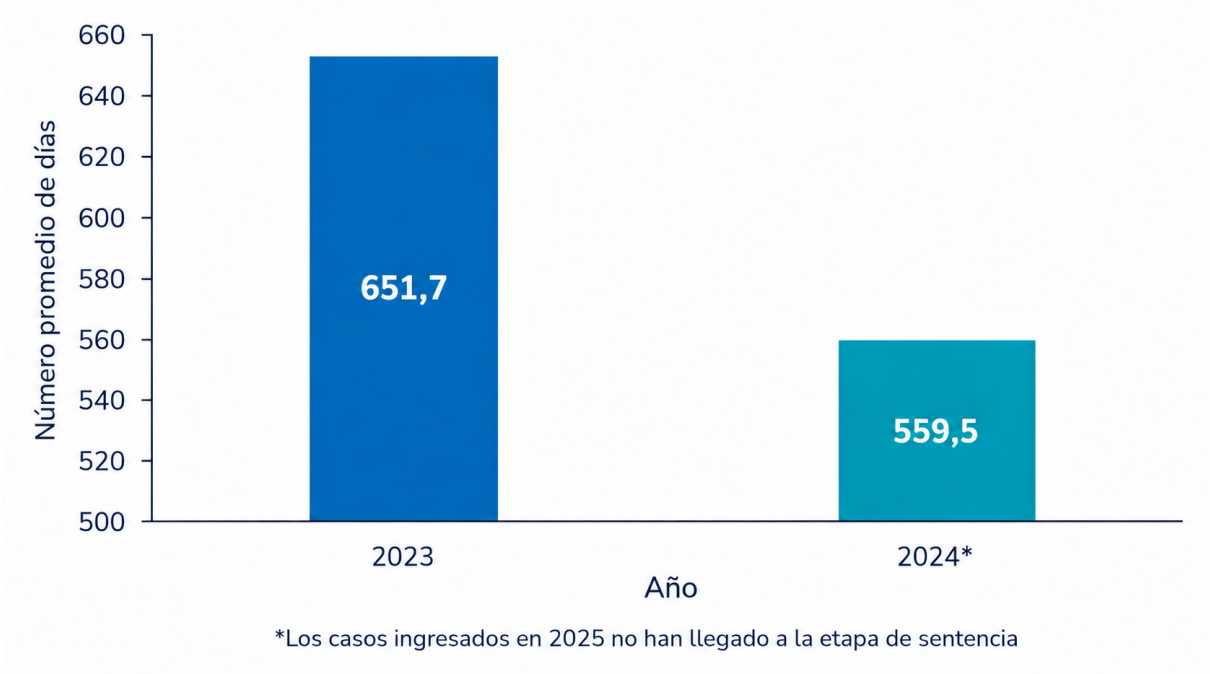


Fuente: *Consejo de la Judicatura, 2023-2025.*
Elaboración: *Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.*

Como se muestra en el **Gráfico 7,** los tiempos de resolución de esta primera etapa procesal han sido dinámicos y sugieren una tendencia de decrecimiento sustancial al compararlos de manera interanual. Al sistema de justicia le tomó 454 días en promedio alcanzar una primera resolución para los casos ingresados en 2023, mientras que para aquellos ingresados en 2024 el promedio de días se redujo a menos de la mitad (213 días). En 2025 se observa un ligero incremento en los tiempos, con un promedio de 247 días; no obstante, sigue siendo una cifra bastante menor a la del 2023 y la de periodos anteriores.

Ahora bien, de los 48 procesos ingresados en el período comprendido por este estudio, 8 procesos —que agrupan a 42 procesados— obtuvieron una sentencia de primera instancia. Alcanzar esta etapa de resolución le tomó al sistema de justicia penal en promedio 586,3 días (aproximadamente un año y seis meses), desde la fecha de ingreso del caso. De ahí que, para los procesados en causas iniciadas en el 2025, no existan todavía sentencias, considerando los mencionados tiempos procesales promedio.

Gráfico 8
Promedio de duración del proceso judicial desde su ingreso hasta la sentencia, 2023 - 2025



Fuente: *Consejo de la Judicatura, 2023-2025.*
Elaboración: *Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.*

De manera similar a los tiempos procesales de la etapa de instrucción, el tiempo hasta la resolución final también registra una reducción interanual. En promedio, los procesados por los casos ingresados en 2023 obtuvieron una sentencia por parte del sistema judicial 651,7 días después del inicio de su proceso; mientras que los procesados en los casos ingresados en 2024 obtuvieron en promedio una sentencia en 559,5 días.

La comparación interanual permite evidenciar una reducción de 92 días en promedio de un año a otro. No obstante, los tiempos continúan siendo elevados, tanto así que, hasta la fecha de corte de este estudio, los casos ingresados en 2025 no llegaron a esta fase de resolución.

Respecto al procesamiento, es importante considerar que para el total de procesados cuyos casos no fueron archivados y se encuentran en etapa de llamamiento a juicio o su resolución (sobreseimiento o sentencia), el 91% fue conocido por la Unidad Judicial Especializada para el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado.

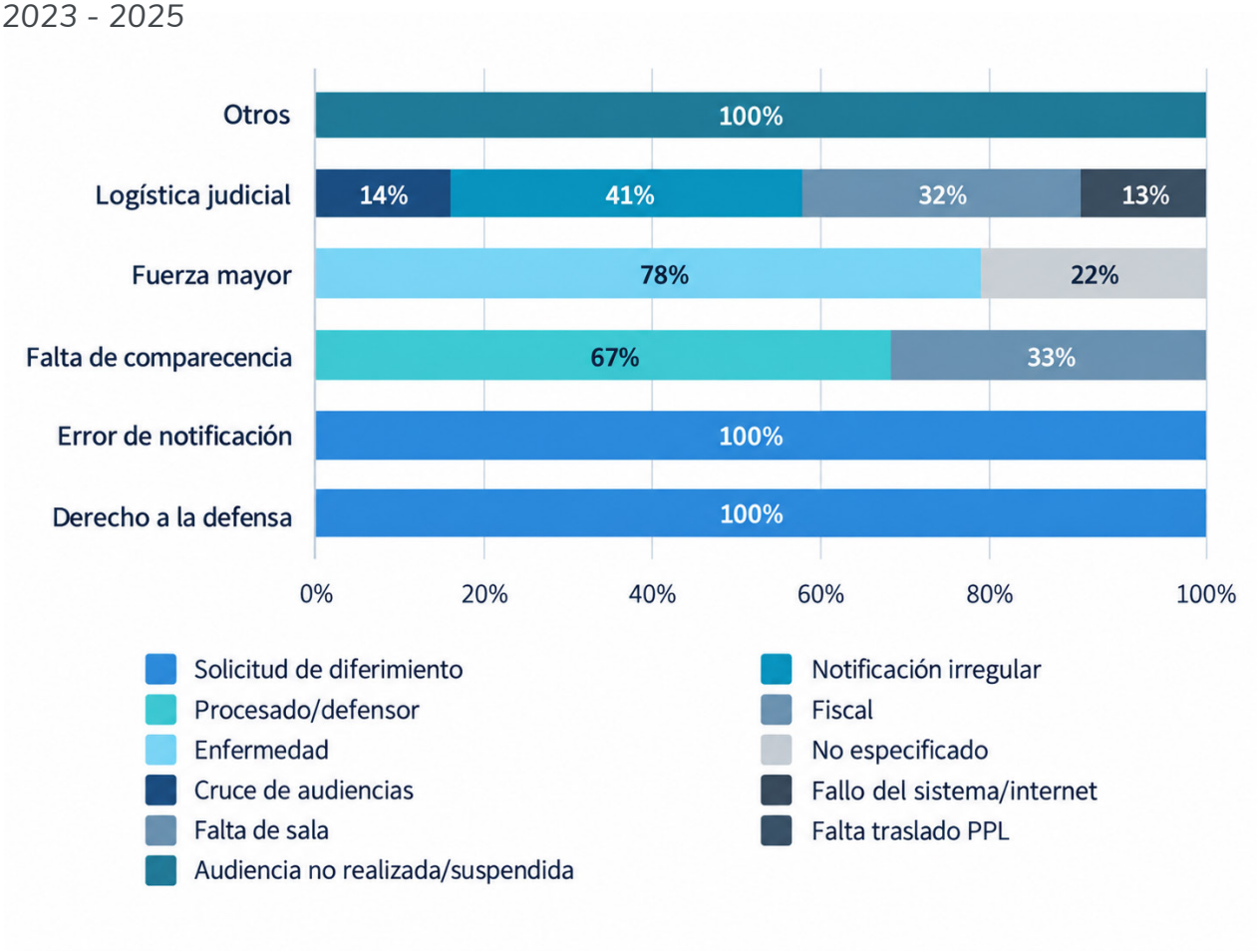
En contrapartida, para el 9% de procesados, sus causas fueron tratadas por unidades de justicia ordinaria correspondientes al lugar donde se cometieron los delitos. Esto evidencia también una alta concentración territorial para la resolución de casos en Quito, donde opera la Unidad Especializada, la que por su competencia material general debe resolver casos de múltiples delitos complejos y de mayor sofisticación.

Los procesos judiciales a medida que avanzan de etapa pueden estar sujetos a retrasos o demoras, algunas de ellas previsibles y otras imprevistas, que alargan los tiempos de resolución y pueden llevar a cuellos de botella en ciertas instancias judiciales. Uno de los nudos críticos más notables en ese sentido son las audiencias fallidas o pospuestas. De aquellos procesos que atravesaron la instrucción fiscal sin ser archivados, se evidencia un total agregado de 155 diferimientos que corresponden a, en promedio, 4 diferimientos por caso.

En cuanto a su distribución, el mínimo de diferimientos por caso es de 1, mientras que el máximo registrado es de 24 en un mismo proceso. Esto se asocia al número de personas procesadas en dicha causa, lo que incrementa la dificultad de mantener el cronograma judicial exento de imprevistos.

Gráfico 9

Motivo de los diferimientos en audiencias judiciales por casos de lavado de activos, 2023 - 2025



Fuente: *Consejo de la Judicatura, 2023-2025.*
Elaboración: *Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.*

La logística judicial, que incluye la no disponibilidad de salas de audiencias, fallos en el sistema electrónico, cruces de audiencias y falta de traslado de las personas privadas de la libertad, constituyen la principal motivación detrás de los diferimientos (65,1%). A esto le siguen los diferimientos por fuerza mayor, enfermedad u otros no especificados, con un 10,5%; los diferimientos por otros motivos (9,3%), los errores de notificación (7%), las ausencias para garantizar el derecho a la defensa (4,7%), y con la menor incidencia la falta de comparecencia, tanto de procesados y defensores, como de fiscales, en un 3,5% de los casos. Dentro del tipo de diferimientos por logística judicial sobresalen los suscitados por fallos del sistema electrónico o de internet (41%) y la no disponibilidad de salas de audiencias (32%); ambos factores se podrían considerar dentro del control del sistema judicial, sin embargo, siguen causando una gran proporción de los retrasos.

c. Temporalidad entre la comisión de los hechos y el inicio del proceso judicial

Adicionalmente, al considerar el año en que presuntamente ocurrieron los hechos investigados frente al año en que la causa efectivamente ingresó al sistema de justicia penal, se evidencia una brecha temporal significativa entre la comisión del delito y su judicialización. En promedio, transcurrieron 6 años entre ambos momentos. Esta brecha, además, presenta una tendencia creciente a lo largo del período analizado: los procesos ingresados en 2023 registraron un promedio de 5 años transcurridos desde la ocurrencia de los hechos; los de 2024, 6 años; y los de 2025, 7 años. Este incremento sostenido sugiere que el sistema de justicia penal está judicializando, con un rezago cada vez mayor, delitos de lavado de activos cuya comisión data de periodos previos, lo cual podría incidir tanto en la disponibilidad y calidad de la prueba, como en los plazos de prescripción de la acción penal.

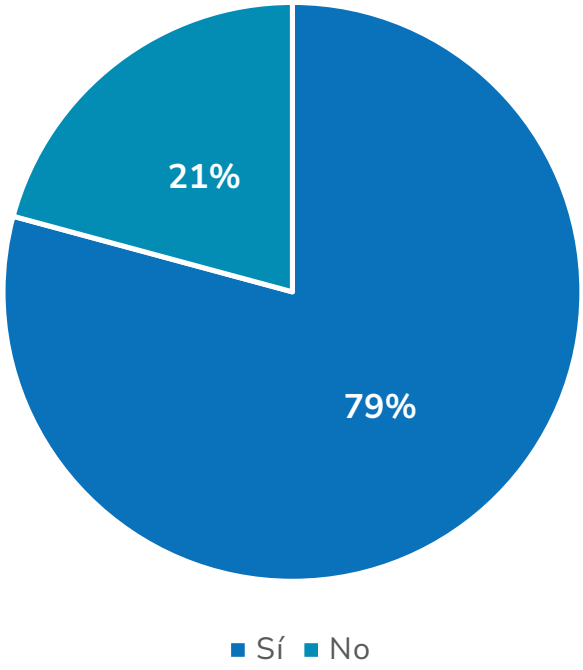
d. Medidas cautelares personales y reales

Las medidas cautelares suponen una de las principales herramientas procesales utilizadas por el sistema de justicia para garantizar la eficacia de la investigación penal, así como la eventual ejecución de las decisiones judiciales. En los casos de lavado de activos estas medidas adquieren una relevancia aún más significativa, ya que están orientadas no solo a asegurar la comparecencia de los procesados, sino también prevenir la fuga o transferencia de sus activos y preservar los bienes vinculados a la actividad delictiva. En virtud de ello, en esta sección se analizan las medidas cautelares a personas naturales y jurídicas dentro de los procesos judiciales de lavado de activos entre 2023 y 2025.

i. Medidas cautelares sobre personas naturales

De las 202 personas naturales procesadas, 160 (79%) estuvieron sujetas a algún tipo de medida cautelar personal; mientras que, 42 procesados (21%) no registraron la imposición de este tipo de medidas. En consecuencia, aproximadamente cuatro de cada cinco personas vinculadas a los procesos judiciales por lavado de activos fueron objeto de una medida cautelar personal durante la tramitación de sus causas.

Gráfico 10
Medidas cautelares personales, 2023 - 2025

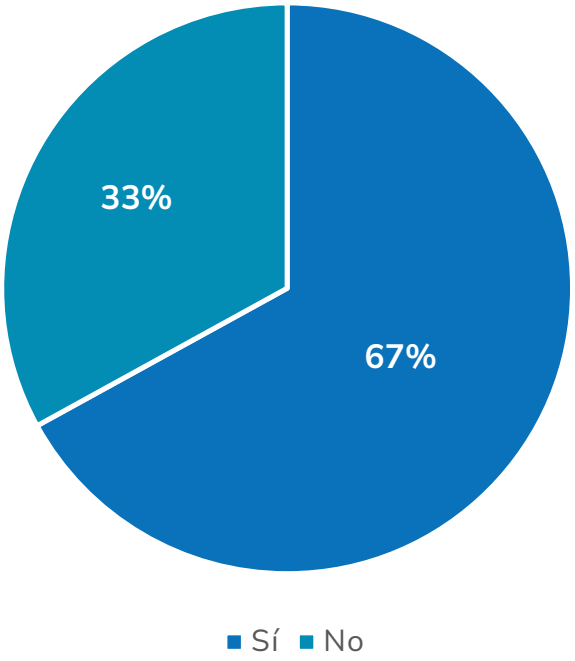


Fuente: *Consejo de la Judicatura, 2023-2025.*
Elaboración: *Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.*

La diferencia entre ambas categorías es importante, puesto que, el número de procesados sometidos a medidas cautelares supera en 118 casos al de aquellos que no registraron este tipo de disposición judicial. A partir de ello, la elevada proporción de personas sujetas a medidas cautelares personales evidencia que, en la mayoría de los casos analizados, las autoridades judiciales consideraron necesaria la adopción de medidas que garanticen la comparecencia de los procesados.

Entre las medidas cautelares personales la que más sobresale es la prisión preventiva. Según los estándares jurídicos aplicables, esta es una medida de *ultima ratio* que se debería imponer de forma excepcional. Sin embargo, como se verá a continuación, su aplicación más bien es frecuente. Como parte de este análisis, también se examina en qué proporción se ha aplicado una medida sustitutiva a la prisión preventiva.

Gráfico 11
Aplicación de medida de prisión preventiva, 2023 - 2025



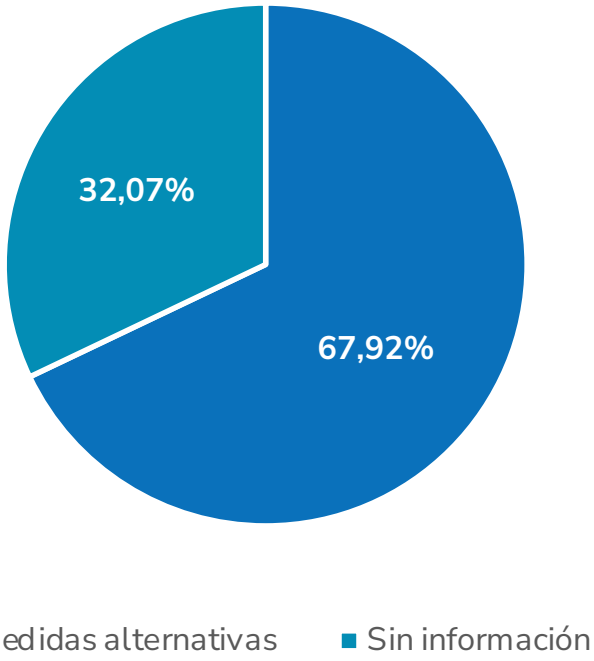
Fuente: *Consejo de la Judicatura, 2023-2025.*
Elaboración: *Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.*

Como se observa en el **Gráfico 11,** de las 160 personas que han estado sujetas a algún tipo de medida cautelar, la prisión preventiva ha sido aplicada en 107 ocasiones (67%) y, en contraste, en 53 ocasiones (33%) no se ha impuesto este tipo de medida. Esto quiere decir que dos terceras partes de las personas con medidas cautelares personales (107 de 160) han recibido la medida más gravosa del abanico de medidas cautelares personales posibles, lo que equivale al 53% de las 202 personas naturales procesadas.

En ese sentido, la diferencia entre los procesados que reciben prisión preventiva de aquellos que no, es sustancial. No es objeto de este estudio examinar específicamente la calidad de la motivación de este tipo de medida, pero las cifras mencionadas vuelven a poner sobre el tapete esta cuestión, que ya fue tratada de forma concreta por el OECO en un informe anterior (2024b). Cabe indicar que los factores a evaluarse por parte de las autoridades judiciales para imponer esta medida suelen adscribirse a la necesidad de garantizar la presencia de los procesados en cada una de las instancias del proceso judicial, minimizar el riesgo de fuga y evitar interferencias en la investigación.

Con base en la información sistematizada de quienes no recibieron la medida de prisión preventiva (53 procesados), se puede distinguir que una mayoría considerable de 36 procesados, es decir, el 67,92%, fueron sujetos de medidas alternativas a la privación de libertad, tales como: prohibición de ausentarse del país, obligación de presentarse periódicamente, arresto domiciliario, y uso de un dispositivo de vigilancia electrónica. Cabe indicar que no fue posible obtener información para 17 procesados (32,08%), lo que equivale a un tercio de la totalidad de los datos respectivos.

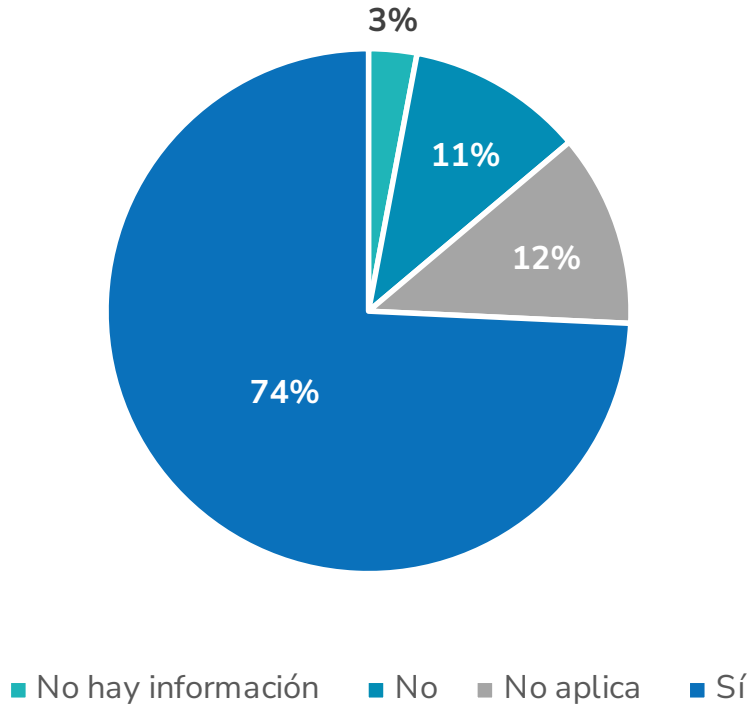
Gráfico 12
Motivos para no aplicación de la prisión preventiva, 2023 - 2025



Fuente: *Consejo de la Judicatura, 2023-2025.*
Elaboración: *Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.*

Considerando lo expuesto, se podría determinar que en más de la mitad de las ocasiones en las que no se dictó la prisión preventiva, el administrador de justicia optó por el uso de medidas alternativas. De todas maneras, es llamativa la ausencia de información para casi un tercio de los procesados, lo cual se podría deber tanto a una decisión deliberada del juez en cada caso concreto, como a una falta de registro en el sistema SATJE. Este es un aspecto que requeriría mayor atención por parte de las autoridades judiciales.

Gráfico 13
Medidas cautelares reales, 2023 - 2025

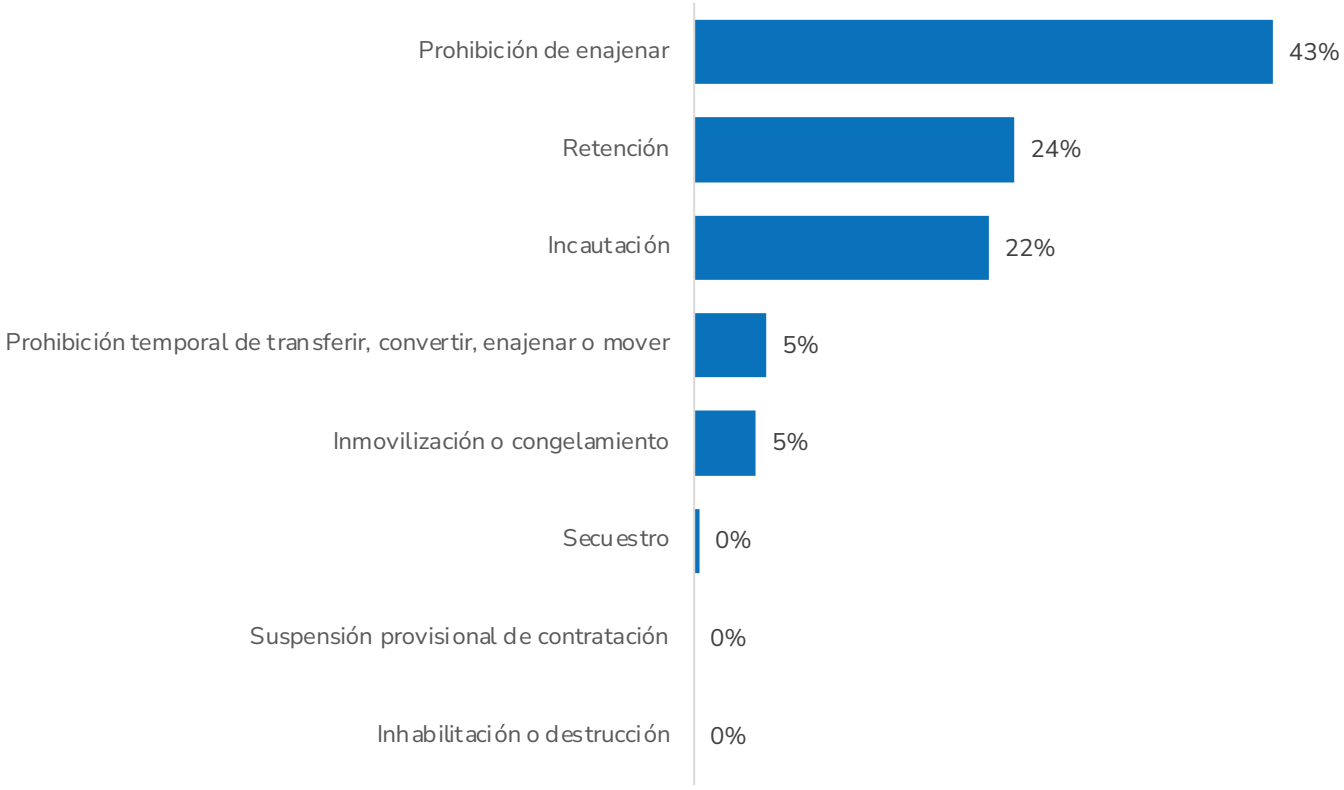


Fuente: *Consejo de la Judicatura, 2023-2025.*
Elaboración: *Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.*

En lo que se refiere a las medidas cautelares reales, es decir sobre los bienes utilizados o relacionados con el cometimiento de los delitos, 150 (74%) de los procesados estuvieron sujetos a al menos una medida cautelar real; y, al contrario, 22 procesados (11%) no registraron este tipo de medidas. Por otro lado, se debe mencionar que en 6 procesados (3%) no se encontró información sobre la existencia de medidas cautelares reales para los procesados, mientras que 24 procesados (12%) se encuentran categorizados como "no aplica".

Como se puede advertir, las medidas cautelares reales son ampliamente utilizadas dentro de los procesos judiciales por lavado de activos, ya que, en términos relativos casi tres cuartas partes de los procesados fueron objeto de este tipo de medidas, lo que resulta consistente con la naturaleza patrimonial de este tipo de delito en el que se debe preservar bienes, activos o recursos que pueden tener origen ilícito. Sin embargo, la aplicación de este tipo de medidas es un 14% inferior a lo registrado en el periodo 2020-2022, lo que debe ser tenido en cuenta al momento de evaluar este indicador.

Gráfico 14
Frecuencia del tipo de medidas cautelares reales aplicadas, 2023 - 2025



Fuente: *Consejo de la Judicatura, 2023-2025.*
Elaboración: *Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.*

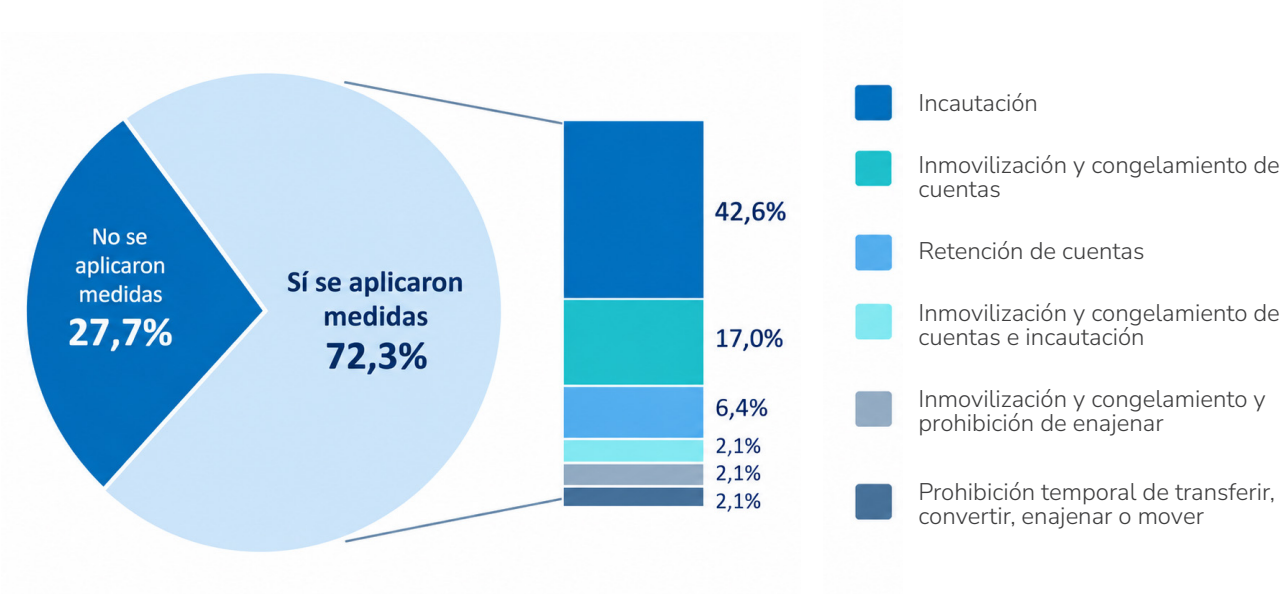
Para el período analizado se registraron 261 medidas cautelares reales aplicadas dentro de los procesos judiciales por lavado de activos. De ese universo, la medida más frecuente fue la prohibición de enajenar, con 113 ocurrencias (43%); seguida de la retención, con 63 registros (24%); y, la incautación, con 58 (22%). Estas tres categorías llegan a reunir a 234 de las 261 medidas registradas (89,7%), constituyéndose en los mecanismos cautelares predominantes dentro de las causas analizadas.

En menor medida, se registraron 14 prohibiciones temporales de transferir, convertir, enajenar o mover bienes (5%) y 12 medidas de inmovilización o congelamiento (5%). Por su parte, el secuestro fue aplicado en una sola ocasión (0,38%). No se identificaron casos de inhabilitación o destrucción, ni de suspensión provisional de contratación, lo que quiere decir que ambos reflejaron una ocurrencia de 0%.

j. Medidas cautelares sobre personas jurídicas

Del total de 47 personas jurídicas procesadas, el sistema de justicia aplicó medidas cautelares sobre bienes en la formulación de cargos para 34 de ellas, es decir el 72,3%. Las 13 personas jurídicas restantes no recibieron medidas cautelares sobre sus bienes. En su mayoría, sobre cada persona jurídica se aplicó una medida cautelar real única, no obstante, para dos empresas procesadas se aplicaron dos medidas reales combinadas. La medida cautelar aplicada con mayor frecuencia fue la incautación de bienes para un 42,6% de los procesados, seguida de la inmovilización y congelamiento de cuentas (17%), la retención de cuentas (6,4%), la prohibición de transferir, convertir, enajenar o mover bienes (2,1%), y finalmente, una proporción combinada de 4,2% que corresponde a personas jurídicas a quienes se les aplicaron varias medidas a la vez: inmovilización, congelación e incautación, e inmovilización, congelación y prohibición de enajenar, respectivamente.

Gráfico 15
Frecuencia de las medidas cautelares sobre bienes aplicadas a las personas jurídicas procesadas, 2023 - 2025

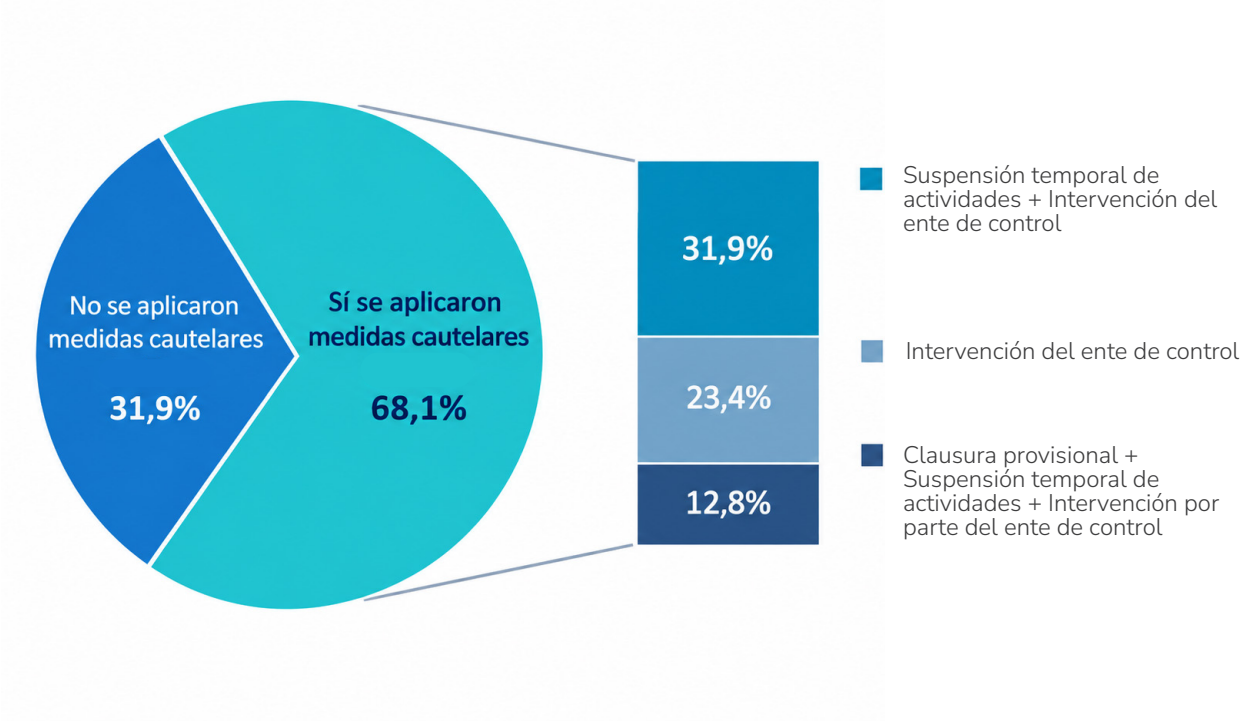


Fuente: *Consejo de la Judicatura, 2023-2025.*
Elaboración: *Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.*

Al tomar en consideración a las personas jurídicas procesadas, se evidencia que dentro de este grupo el déficit de aplicación de medidas cautelares sobre sus bienes es del 27,7%. Pese a que en gran medida las personas jurídicas recibieron medidas cautelares sobre sus bienes, la deficiencia del sistema justicia subyace en que no identifica personas jurídicas consistentemente para todos los casos. De los 48 procesos ingresados en el sistema de justicia, se procesaron personas jurídicas únicamente en 14 ocasiones (29%), por lo que un nodo crítico para la persecución efectiva de los bienes debe partir de un análisis de estas vinculaciones societarias.

Las medidas sobre bienes fueron acompañadas por las medidas específicas aplicadas sobre las personas jurídicas. Del total de personas jurídicas procesadas, el 68,1% recibió al menos una medida cautelar específica. Las medidas cautelares más aplicadas corresponden a la combinación de la suspensión temporal de actividades y la intervención por parte del ente competente de control seguido de la intervención del ente de control por sí sola, y finalmente, la combinación de las tres medidas (clausura provisional, suspensión de actividades e intervención por parte del ente de control).

Gráfico 16
Frecuencia de las medidas cautelares sobre personas jurídicas, 2023 - 2025



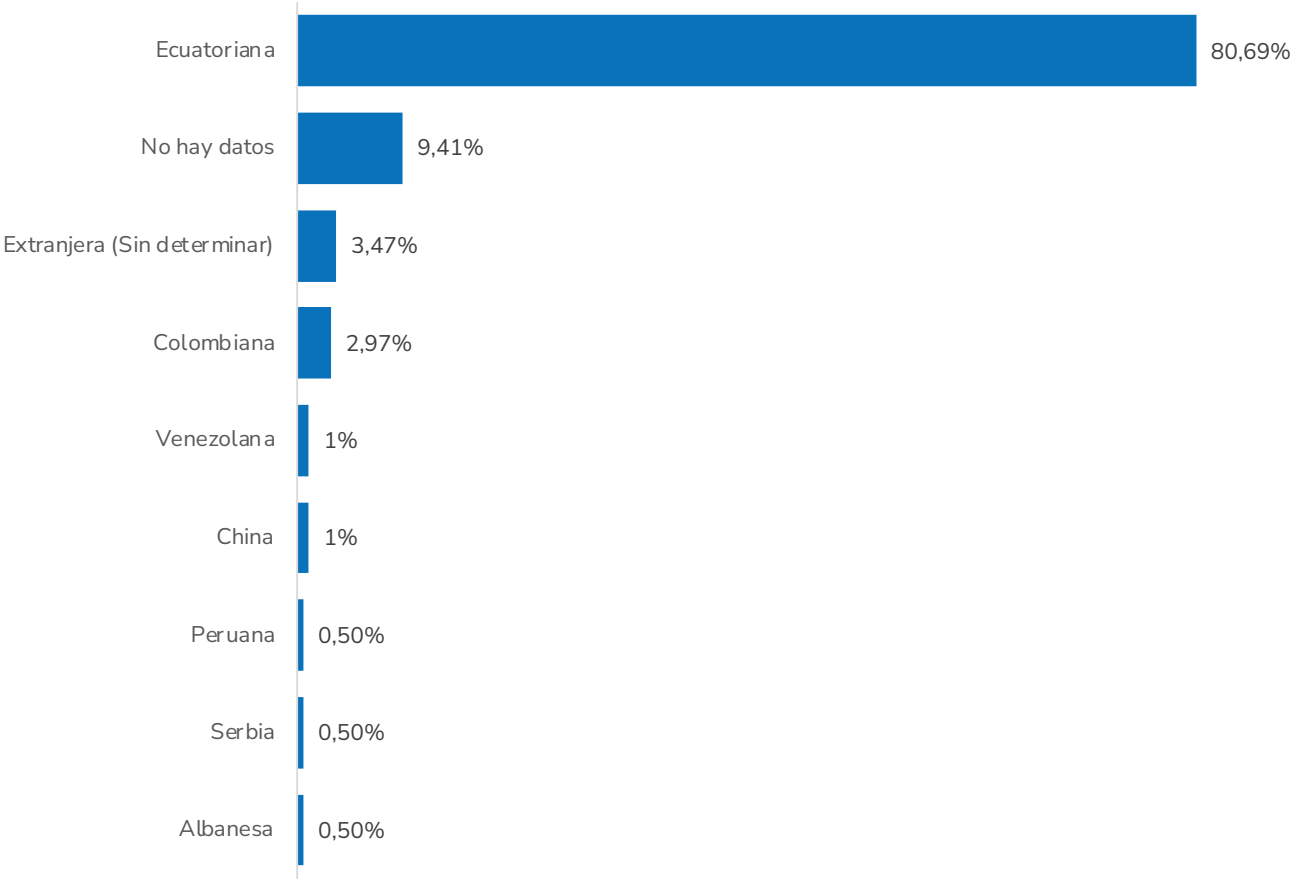
Fuente: *Consejo de la Judicatura, 2023-2025.*
Elaboración: *Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.*

e. Perfil de los procesados/condenados

i. Personas naturales

El análisis del perfil de los procesados permite identificar las principales características sociodemográficas de las personas naturales que han sido encausadas penalmente por el delito de lavado de activos entre 2023 y 2025. En esta línea, se examinan variables relacionadas con la nacionalidad, el lugar de nacimiento, el sexo y la condición de servidor público, con el fin de comprender patrones predominantes entre el universo de los procesados.

Gráfico 17
Nacionalidad de las personas naturales en procesos judiciales de lavado de activos, 2023 - 2025

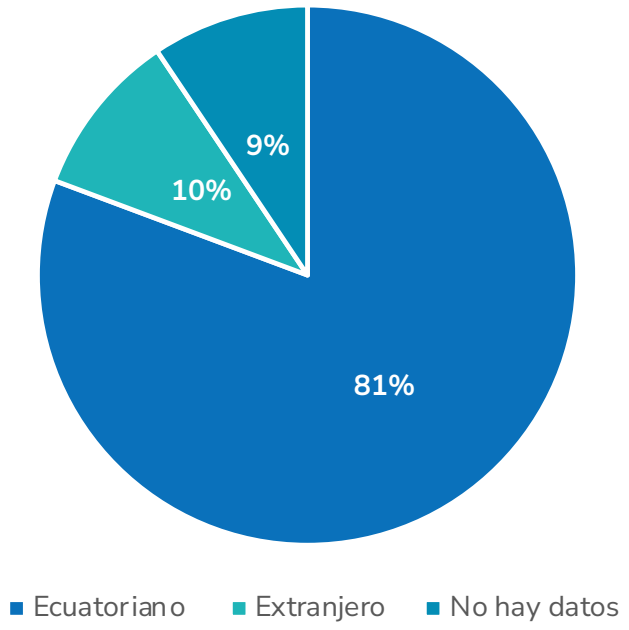


Fuente: *Consejo de la Judicatura, 2023-2025.*
Elaboración: *Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.*

De las 202 personas naturales procesadas por lavado de activos durante el periodo analizado, la gran mayoría corresponden a ciudadanos ecuatorianos. En total, se identificaron 163 personas de nacionalidad ecuatoriana (80,69%), seguidas por 6 personas de nacionalidad colombiana (3%), y 2 personas de nacionalidad china y venezolana cada una (1%). Adicionalmente, se identificó una persona de nacionalidad albanesa (0,5%), una de nacionalidad serbia (0,5%), y una de nacionalidad peruana (0,5%); mientras que 7 personas (3,47%) fueron clasificadas como extranjeras, pero sin determinar una nacionalidad específica. Cabe mencionar que se identificaron 19 personas (9,41%) cuyos datos de información de nacionalidad no fueron registrados.

Si bien una amplia mayoría de las personas procesadas son de nacionalidad ecuatoriana, la presencia de procesados de diversas nacionalidades, entre los que se cuenta a aquellos que no se pudo determinar una nacionalidad específica, da cuenta de la participación de actores internacionales dentro de algunas de las estructuras delictivas investigadas. De igual manera, la proporción de registros sin información sobre una nacionalidad específica expone las limitaciones en la disponibilidad de ciertos datos sociodemográficos de los expedientes consultados.

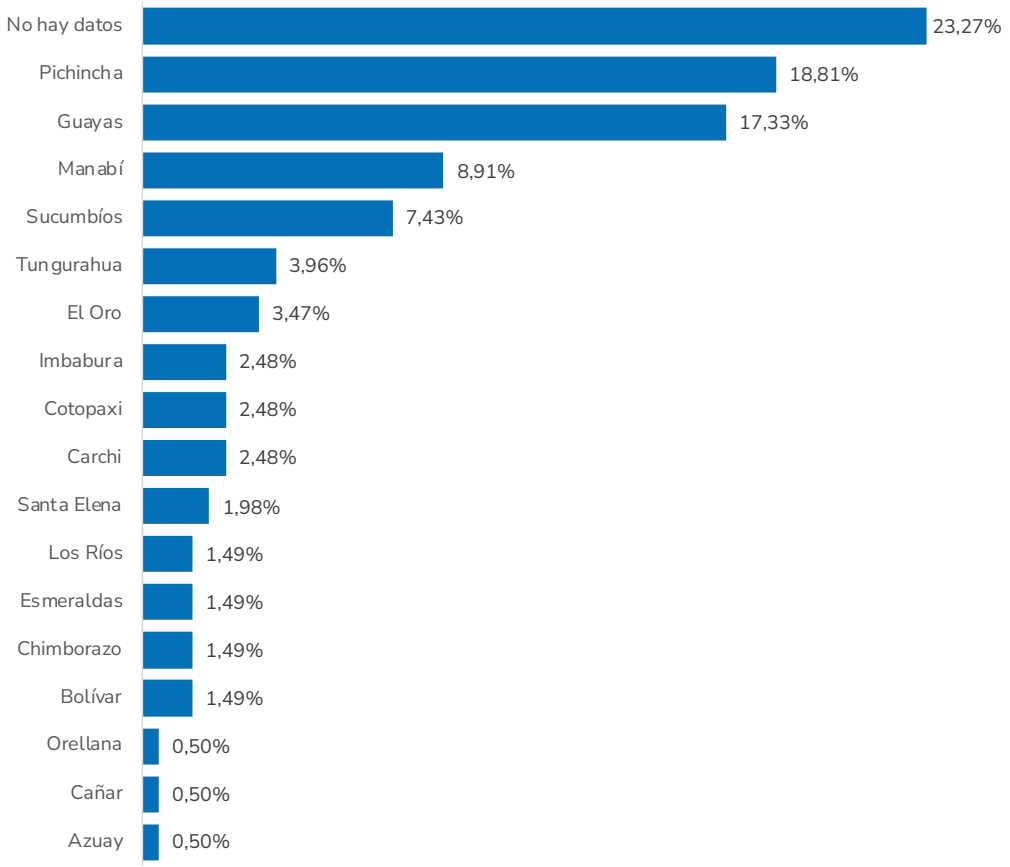
Gráfico 18
División de las personas naturales entre nacionales y extranjeros en procesos judiciales de lavado de activos, 2023 - 2025



Fuente: *Consejo de la Judicatura, 2023-2025.*
Elaboración: *Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.*

En consonancia con lo expuesto anteriormente, y con el propósito de simplificar la distribución de nacionalidad entre los procesados por lavado de activos exclusivamente entre ecuatorianos y extranjeros, se puede observar en el **Gráfico 18** que, de las 202 personas naturales, 163 corresponden a ecuatorianos (81%), 20 fueron identificadas como extranjeras (10%) y 19 se catalogan como sin información sobre nacionalidad (9%).

Gráfico 19
Personas naturales en procesos judiciales de lavado de activos por provincia de nacimiento, 2023 - 2025



Fuente: *Consejo de la Judicatura, 2023-2025.*
Elaboración: *Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.*

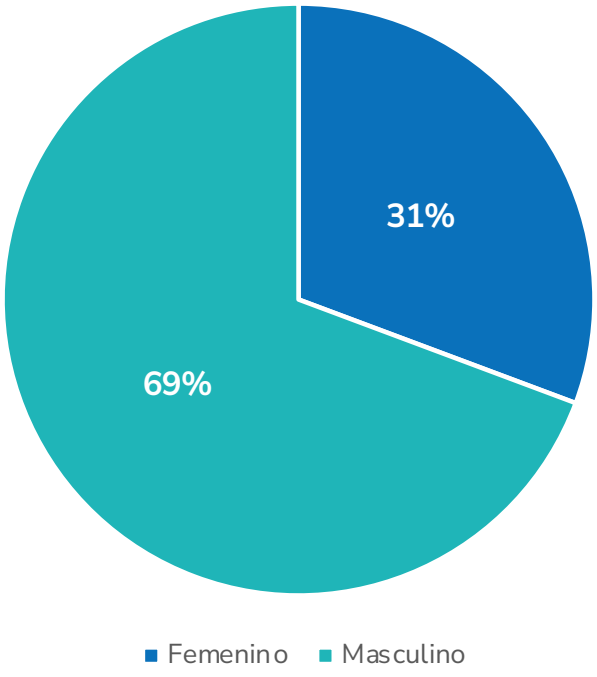
Las 163 personas naturales ecuatorianas procesadas por lavado de activos provienen de al menos 17 provincias del país. La mayor concentración se encuentra en Pichincha, con 38 procesados (18,81%); y le sigue Guayas, con 35 (17,33%). Estas dos provincias representan 73 personas procesadas, lo cual equivale al 36,14% del total analizado. Asimismo, se identificaron 18 personas nacidas en Manabí (8,91%) y 15 en Sucumbíos (7,43%), siendo las siguientes provincias con mayor representación.

Un segundo grupo de provincias registra porcentajes menores. Tungurahua contabiliza 8 procesados (3,96%), El Oro 7 (3,47%), mientras que Carchi, Cotopaxi e Imbabura registran 5 personas cada una (2,48%). Por su parte, Santa Elena presenta 4 procesados (1,98%); Bolívar, Chimborazo, Esmeraldas y Los Ríos registran 3 procesados cada una (1,49%); y finalmente Azuay, Cañar y Orellana reportan un procesado cada una (0,5%).

Además, en 47 casos (23,27%) no fue posible identificar la provincia de nacimiento de la persona procesada, pese a que, se registró que su nacionalidad era ecuatoriana. Esta categoría constituye el segundo valor más alto entre el conjunto de los datos, únicamente siendo superada por la provincia de Pichincha, lo que expone nuevamente las limitaciones de disponibilidad de información que aún tiene el sistema SATJE.

En virtud de lo observado en el **Gráfico 19**, el lugar de nacimiento de los procesados por lavado de activos se encuentra distribuido de forma dispersa a nivel nacional, aunque de cierta manera se observa una concentración en los principales centros económicos y financieros del país: Pichincha y Guayas. De todas maneras, la evidencia muestra que la presencia de procesados nacidos en provincias de la Costa, Sierra y Amazonía no se circunscribe a una zona o localidad específica del territorio ecuatoriano.

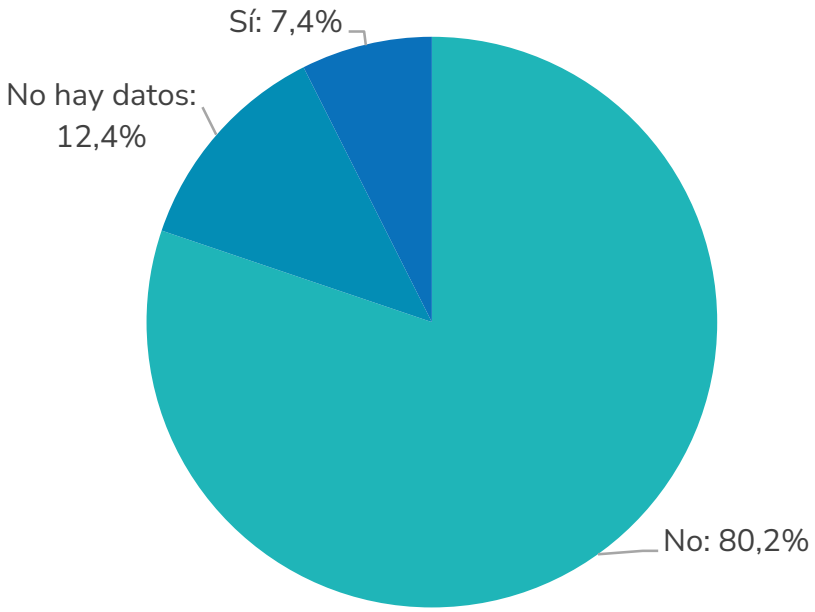
Gráfico 20
Distribución de personas naturales en procesos judiciales de lavado de activos por sexo, 2023 - 2025



Fuente: *Consejo de la Judicatura, 2023-2025.*
Elaboración: *Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.*

En cuanto a la distribución de las personas naturales inmersas en procesos judiciales de lavado de activos por su sexo, se identifica que 140 personas corresponden al sexo masculino (69%) y 62 personas al femenino (31%). Por ello, se observa una marcada predominancia de hombres entre las personas procesadas por este delito, siendo las mujeres un poco menos de un tercio del total de los involucrados. Sin embargo, se puede apreciar que en este delito la proporción de participación de las mujeres es mucho mayor que la de otros delitos; por ejemplo, en el tráfico de drogas se estima que llega al 17% (OECO, 2025a), y en el delito de delincuencia organizada al 14% (OECO, 2025b).

Gráfico 21
Personas naturales identificadas como servidores públicos en procesos judiciales de lavado de activos, 2023 - 2025



Fuente: *Consejo de la Judicatura, 2023-2025.*
Elaboración: *Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.*

Acerca de si los procesados tenían relación laboral con el sector público, se pudo identificar que, de las 202 personas naturales, 162 no fueron identificadas como servidores públicos (80,2%), mientras que 15 personas sí tenían o habían mantenido dicha condición (7,4%). Respecto a 25 procesados (12,4%), no fue posible determinar si tenían o no algún vínculo con el sector público debido a la falta de información en el sistema SATJE.

La presencia de 15 servidores públicos procesados por el delito de lavado de activos reviste una particular gravedad, no solo por la pena agravada, sino sobre todo por las responsabilidades y deberes inherentes al ejercicio de la función pública. Al desagregar la institución de procedencia de los servidores públicos identificados, se observa una diversidad de entidades involucradas: Policía Nacional, Gobierno Central, Servicio de Rentas Internas (SRI), Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) y Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales. De este grupo, 3 personas fueron además identificadas como Personas Expuestas Políticamente (PEP), lo cual resulta particularmente relevante considerando el mayor riesgo reputacional, patrimonial y de integridad institucional que dicha condición conlleva para el sistema antilavado.

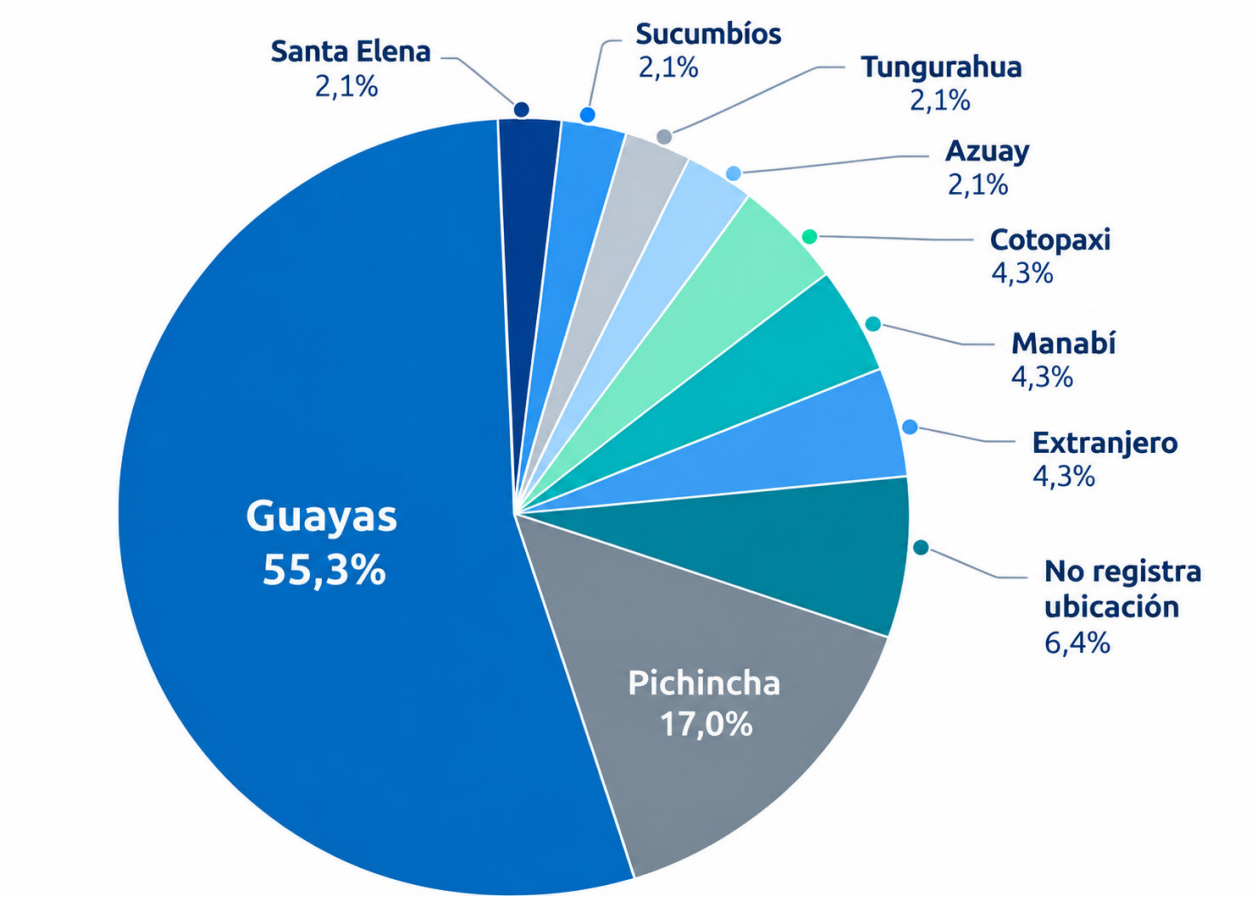
A fin de identificar la temporalidad en la cual los 15 procesados por el delito de lavado de activos fungieron como servidores públicos, se determina que, en 11 casos, es decir, el 73,33% no hay registro de información, y apenas en los 4 (26,67%) casos restantes se logró obtener algún dato. En ese sentido, entre los registros con información disponible, se identificó un servidor público que ejerció funciones antes del delito (6,67%); uno cuya vinculación se extendió antes y después del delito (6,67%); uno que mantuvo su condición de servidor público antes, después del delito y que, además, continúa ejerciendo funciones públicas (6,67%); y, uno que desempeñó funciones públicas durante la ocurrencia de los hechos investigados (6,67%).

ii. Personas jurídicas

Se identificaron 14 expedientes judiciales con procesamiento a personas jurídicas, para un total de 47 sujetos individualizados. En promedio, se estima que por cada proceso se emplea 3,4 personas jurídicas para el cometimiento del delito de lavado de activos. El proceso con mayor número de personas jurídicas involucradas registra la participación de 8 en total, mientras que existen procesos con la participación de una sola persona jurídica.

De acuerdo con los datos obtenidos del SATJE, contrastados con información de la Superintendencia de Compañías, el 55,3% de las personas jurídicas procesadas fueron registradas en la provincia de Guayas, seguidas del 17% registradas en la provincia de Pichincha, el 4,3% en Cotopaxi y el 4,3% en Manabí. Además, se evidencian registros por 2,1% del total en Azuay, Tungurahua, Sucumbíos y Santa Elena, respectivamente. Del total de personas jurídicas, en el 6,4% de los casos no fue posible obtener el lugar de registro debido a que no se pudo determinar un nombre ni número de RUC válido de consulta; y en un 4,3% adicional la ubicación mencionada de registro es el extranjero.

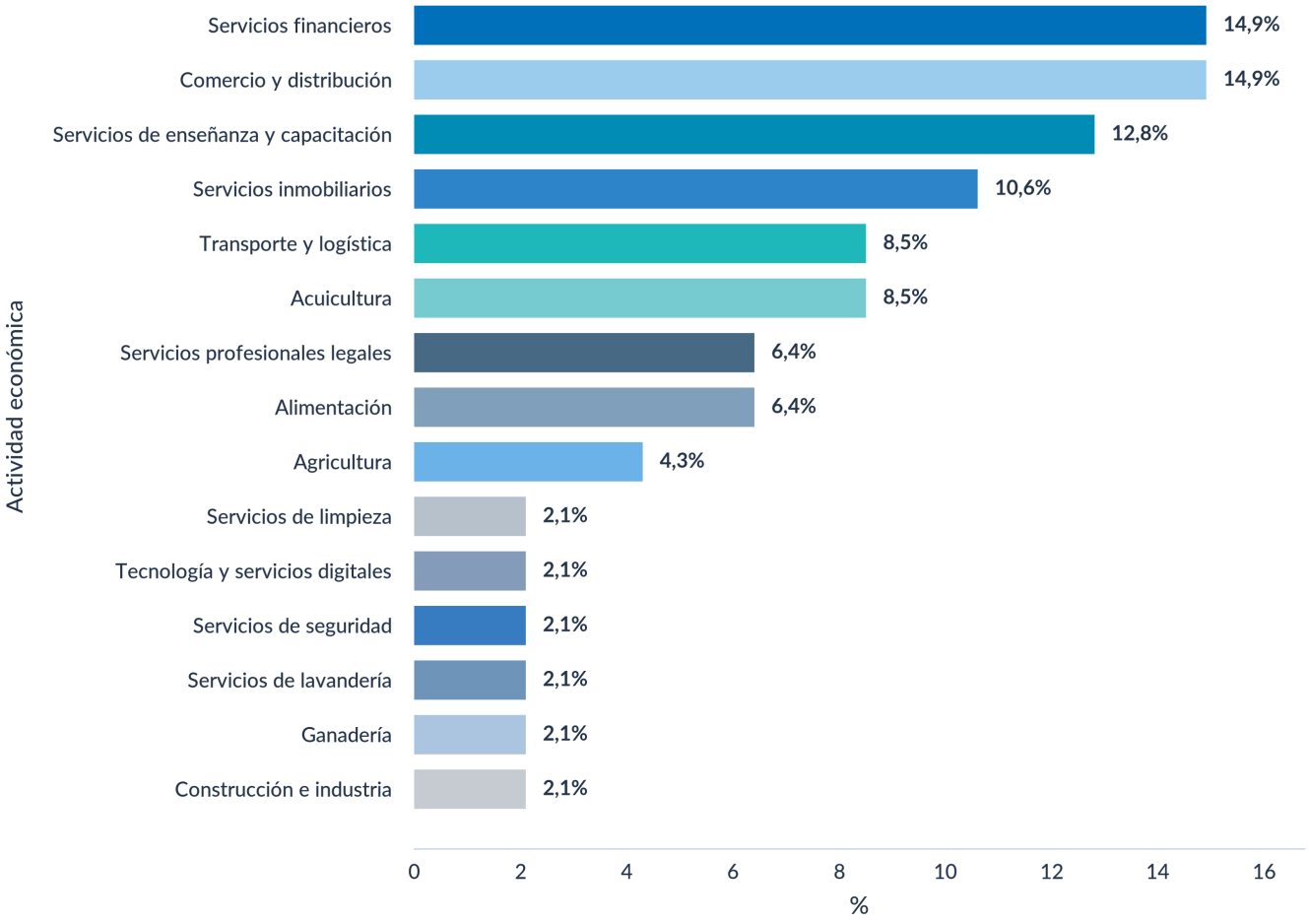
Gráfico 22
Personas jurídicas procesadas por provincia de registro, 2023 - 2025



Fuente: *Consejo de la Judicatura, 2023-2025; Superintendencia de Compañías, 2026.*
Elaboración: *Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.*

Las personas jurídicas procesadas registran una multiplicidad de actividades económicas en sus giros de negocio principales, con el presunto objetivo de ocultar sus verdaderos fines. La actividad que se registra con mayor predominancia es la de servicios financieros (14,9%), seguida del comercio y la distribución (14,9%), servicios de enseñanza (12,8%), servicios inmobiliarios (10,6%), y servicios de transporte y logística y acuicultura, con un 8,5% cada una.

Gráfico 23
Personas jurídicas procesadas por actividad económica, 2023 - 2025



Fuente: *Consejo de la Judicatura, 2023-2025; Superintendencia de Compañías, 2026.*
Elaboración: *Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.*

Resulta llamativa la aparición de personas jurídicas registradas con giros de negocio como lavandería de ropa, ganadería, servicios legales, seguridad privada y agricultura, lo que evidenciaría la diversificación del delito de lavado hacia múltiples sectores de la economía. Esta información puede ser relevante para los entes de control a fin de definir el alcance del régimen de sujetos obligados y sus consiguientes deberes.

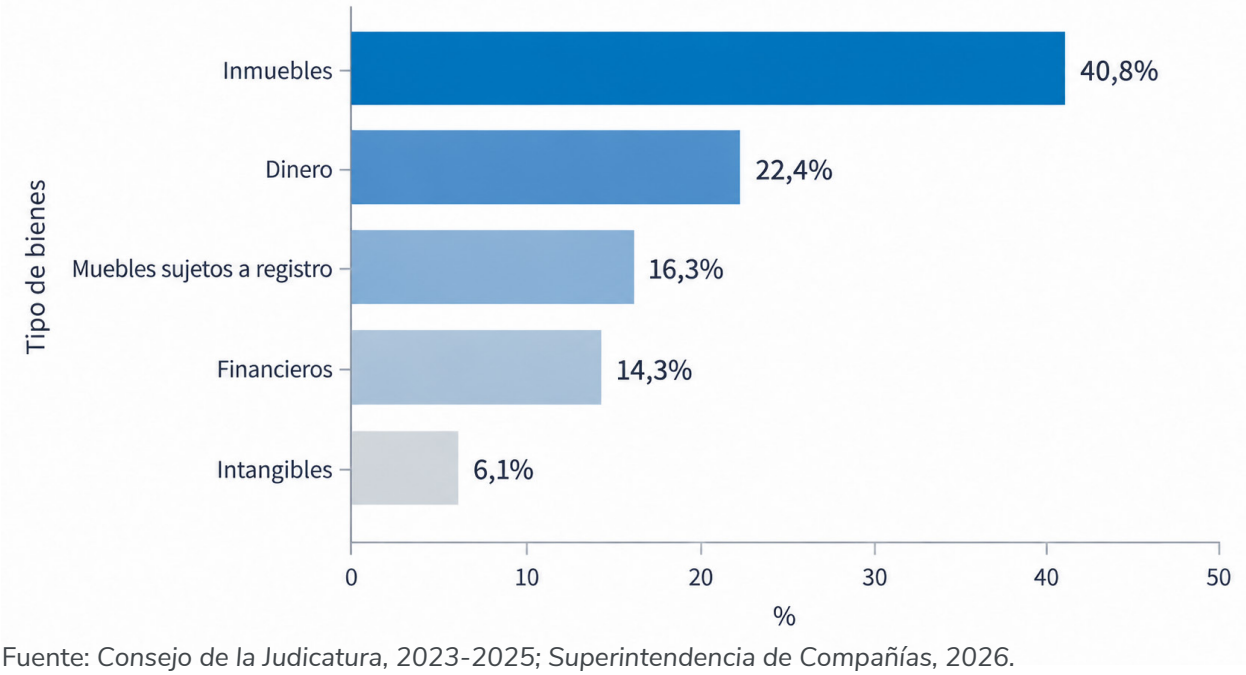
iii. Entramados societarios

El análisis de los datos permite observar que las personas jurídicas, en sus diferentes giros de negocio, fueron empleadas para el movimiento de flujos financieros ilícitos aplicando mecanismos como: facturación de clientes ficticios, contrataciones entre personas jurídicas de una misma red, uso del RUC para afiliación de empleados al seguro social y la contratación pública con entidades del Estado.

Las personas jurídicas emplearon en un 40,8% la adquisición de bienes inmuebles, como viviendas, terrenos y oficinas para el lavado de activos. Este hallazgo va en línea con el análisis de sentencias de lavado de activos 2020-2022 (OECO, 2023), donde se determinó que el sector inmobiliario correspondía al de mayor asociación con el lavado de activos. A esto le sigue con un 22,4% la acumulación de dinero en efectivo, la adquisición de bienes muebles sujetos a registro –como motocicletas, automóviles y maquinaria pesada- en un 16,3%, activos financieros como acciones o títulos empresariales en un 14,3%, y bienes intangibles como criptoactivos en un 6,1%. Como se mencionó anteriormente, si se toman en cuenta las evaluaciones y recomendaciones del GAFI y GAFILAT, así como lo señalado en los reportes de UNODC y otros organismos, es posible que todavía el sistema de justicia penal ecuatoriano no refleje en su verdadera magnitud el alcance del uso de activos virtuales y otros medios tecnológicos para este tipo de delito.

Gráfico 24

Tipo de bienes empleados por las personas jurídicas, 2023 - 2025

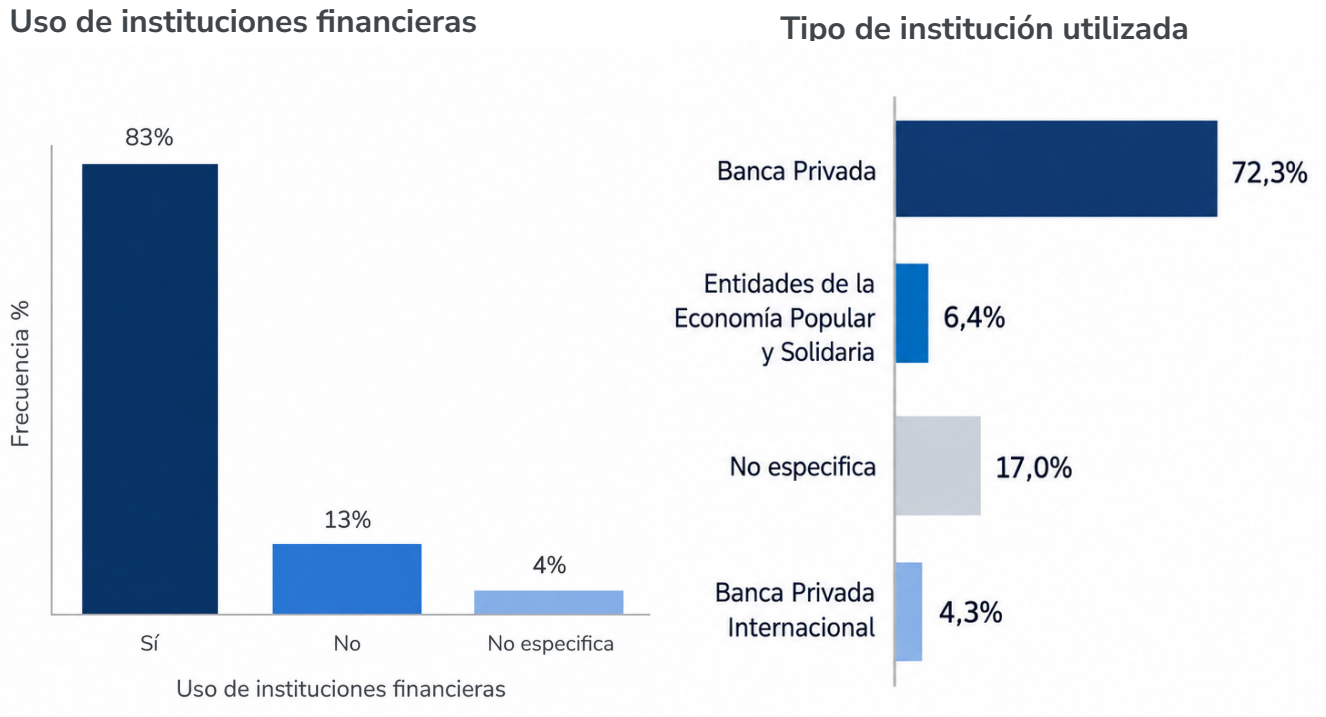


Fuente: *Consejo de la Judicatura, 2023-2025; Superintendencia de Compañías, 2026.*
Elaboración: *Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.*

En total, 6 de cada 10 personas jurídicas emplearon bienes localizados en Ecuador; y 1 de cada 10, bienes ubicados en el extranjero. Sin embargo, el saldo restante corresponde a casos en los que no se pudo determinar la ubicación de los bienes, por lo cual este dato no se podría considerar plenamente fiable. El 42,9% de las personas jurídicas con bienes localizados en Ecuador se ubicaron en Guayas, y 20% en la provincia de Pichincha, seguido de Manabí con un 5,7%. Esta distribución se alinea con la ubicación de registro de las personas jurídicas, evidenciando la incidencia geográfica del lavado de activos.

Adicionalmente, se pudo determinar que del total de personas jurídicas procesadas el 83% empleó el sistema financiero para dar apariencia de licitud al dinero de origen ilícito. Dentro de este grupo, se identificó que las personas jurídicas contaron en su mayoría con cuentas bancarias en instituciones financieras de la banca privada (72,3%), mientras que un 6,4% en entidades de la Economía Popular y Solidaria, y un 4,3% en bancos localizados fuera del Ecuador. Cabe indicar que respecto al 17% restante no se pudo determinar el tipo de institución financiera empleada.

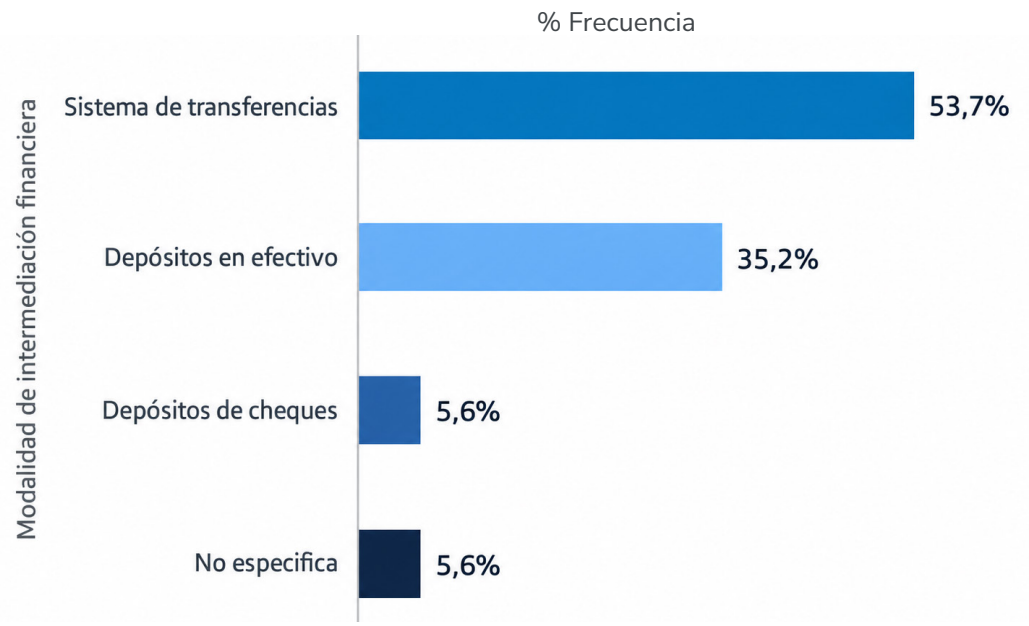
Gráfico 25
Uso de instituciones financieras y tipo de institución utilizada, 2023 - 2025



Fuente: *Consejo de la Judicatura, 2023-2025; Superintendencia de Compañías, 2026.*
Elaboración: *Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.*

De acuerdo con la información de los procesos judiciales, los flujos financieros empleados por las personas jurídicas correspondieron en un 53,7% a sistemas de transferencias entre entidades financieras, 35,2% a depósitos en efectivo y 5,6% a depósitos de cheques. El 5,6% restante no se pudo determinar por falta de información.

Gráfico 26
Modalidades de los movimientos de los flujos financieros ilícitos, 2023 - 2025



Fuente: *Consejo de la Judicatura, 2023-2025.*
Elaboración: *Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.*

Al realizar un análisis detallado de los sectores empleados por el lavado de activos entre 2023 y 2025, se observa una tendencia hacia la estratificación de capitales a través de la adquisición de bienes. De los procesos judiciales se pudo determinar que las personas jurídicas adquirieron al menos 77 bienes inmuebles —lotes de terreno, oficinas, departamentos y casas—, que de acuerdo con los avalúos realizados por el sistema de justicia suman USD 4.874.747; así como, 41 bienes muebles sujetos a registro —automóviles, motocicletas, maquinaria pesada y volquetas—, de los cuales solo 5 registran avalúos de alrededor de USD 263.000 en conjunto.

Tabla 7
Avalúo de los bienes de las personas jurídicas correspondiente a los procesos de lavado de activos, 2023 - 2025

Tipo de bien	Cantidad	Avalúo total
Inmuebles	77 bienes identificados	USD 4.874.747,80
Muebles sujetos a registro*	41 bienes identificados	USD 263.000,00
Muebles no sujetos a registro	1 bien identificado	No especifica
Financieros	4 activos financieros identificados	No especifica
Dinero en efectivo	4 instancias en las que se identificó dinero en efectivo	No especifica

* Solo existe información disponible sobre avalúos de 5 muebles sujetos a registro de los 41 identificados.

Fuente: *Consejo de la Judicatura, 2023-2025.*
Elaboración: *Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.*

Además, el sistema de justicia detectó 62 cuentas bancarias de las personas jurídicas analizadas; que, en conjunto, fueron utilizadas para realizar movimientos financieros por aproximadamente USD 441.032.599. Estas transacciones corresponden al traslado de capitales de una cuenta a otra, en general con el propósito de evitar la trazabilidad y detección por parte de las entidades de control, lo que dificulta la estimación de las cantidades reales de dinero ilícito que pudo haber sido legalizado.

f. Casos representativos y tipologías comunes

De manera ilustrativa, resulta interesante describir sintéticamente las principales tipologías observadas en casos representativos. Así, del estudio cualitativo y seguimiento de los 8 casos con sentencias condenatorias identificadas en el presente estudio, se desprenden algunos patrones relevantes acerca de la operación y modalidades del lavado de activos en el Ecuador.

En la siguiente tabla se sintetizan los principales aspectos:

Tabla 8
Casos representativos y tipologías de lavado de activos identificadas en las sentencias condenatorias, 2023 - 2025

Lugar de juzgamiento	Fecha de sentencia	Modalidad	Bienes	Comiso
Guayaquil	28-11-2023	Empresas fachada, movimientos financieros injustificados y adquisición de bienes para lavar dinero del narcotráfico.	Camaroneras, predios rurales, departamentos, parqueaderos, vehículos, embarcaciones y cuentas.	Bienes inmuebles, muebles y cuentas.
Manta	11-09-2023	Testaferrismo y empresa fachada para lavar dinero del narcotráfico.	Terrenos, edificaciones, vehículos, embarcaciones y cuentas.	Bienes inmuebles, muebles; disolución de JOALLY.
Quito	18-05-2024	Estratificación financiera mediante constructoras y empresa de transporte.	Casas, departamentos, oficinas, terrenos, camiones, vehículos y cuentas.	Bienes e inversiones.
Quito	28-08-2024	Captación ilegal de dinero y empresas fachada.	Departamentos, oficina, lotes, camioneta, motocicletas y equipos.	Comiso; disolución de Llakirurak.
Quito	21-04-2025	Lavado de activos de organización criminal mediante empresas fachada y triangulación.	Haciendas, solares, vehículos de lujo, motocicletas, joyas y pólizas.	Bienes inmuebles y muebles.
Quito	15-07-2025	Compañías fachada, testaferrismo y compra de bienes.	Predios, finca, departamento, estacionamientos, vehículos y camiones.	Bienes y fondos.

Lugar de juzgamiento	Fecha de sentencia	Modalidad	Bienes	Comiso
Quito	14-07-2025	Depósitos fraccionados, empresas familiares y ocultamiento patrimonial.	Lotes, oficinas, finca, vehículos, camiones, cuentas.	Bienes, inversiones y fondos.
Quito	17-12-2024	Pitufeo, testaferrismo y empresas de transporte.	Casa, locales, terrenos, departamento, camiones, SUV y cuentas.	Bienes, cuentas e inversiones.

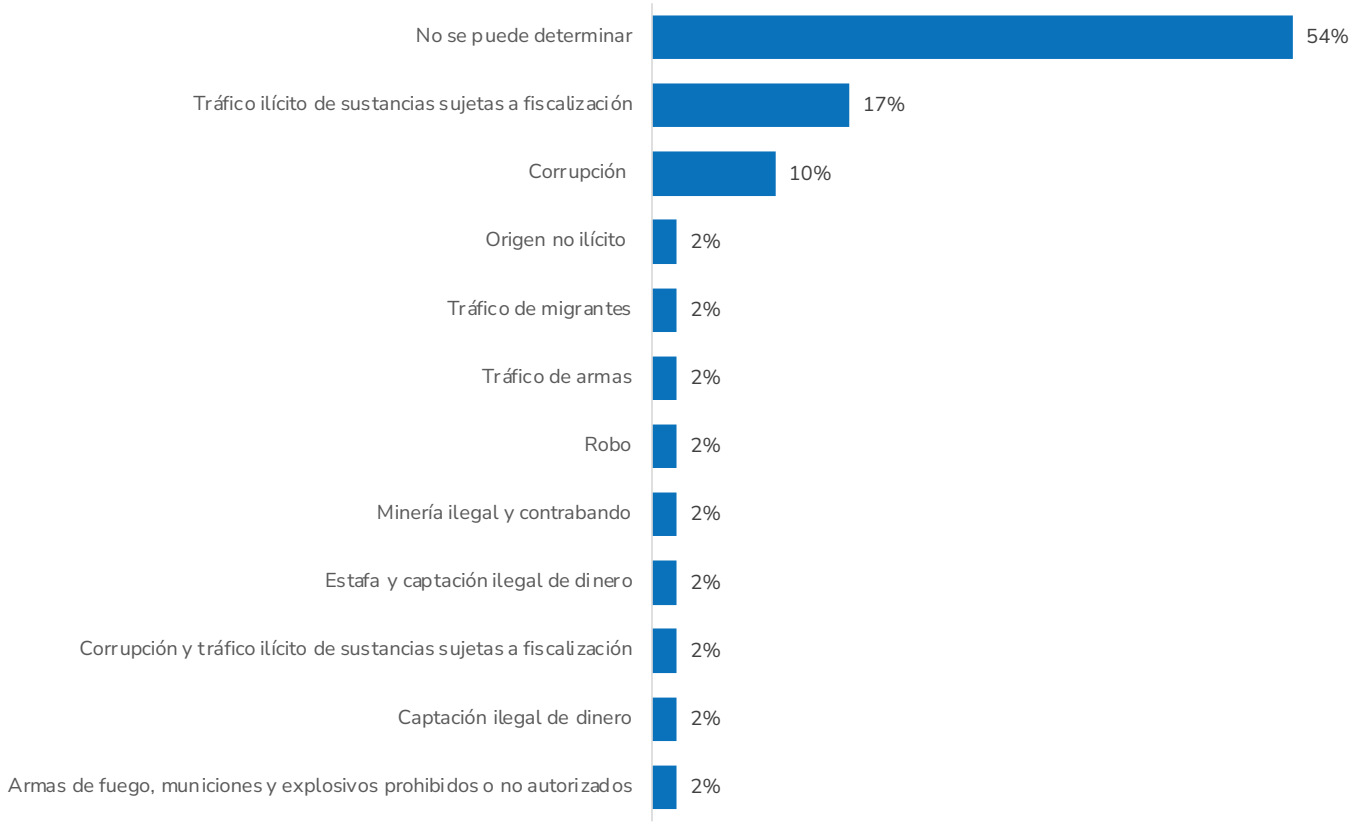
Elaboración: *Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.*

De esta revisión se destaca el uso de empresas fachada y estructuras societarias complejas, lo que evidenciaría el involucramiento, en mayor o menor medida, de facilitadores profesionales, especialmente en materia legal. Asimismo, se observa la intersección con actividades económicas vinculadas a la pesca, transporte, mercado inmobiliario, y compra y venta de vehículos. Respecto al uso de criptoactivos y medios digitales, si bien no se identificó un patrón sistemático, sí se constató en uno de los casos el uso de estos mecanismos, en el marco de operaciones de captación ilegal de dinero. Otros elementos comunes al lavado de activos incluyen el empleo de bienes inmuebles de diverso tipo, vehículos de alta gama, y cuentas bancarias personales y corporativas.

g. Persecución individual y no estructural

Una de las particularidades del delito de lavado de activos es que su comisión presupone la existencia de recursos provenientes de una actividad ilícita previa. Por esta razón, el análisis de los delitos base o delitos precedentes asociados a los procesos judiciales permite comprender cuáles son las principales fuentes de generación de fondos que posteriormente habrían sido objeto de operaciones de lavado. De igual manera, esta evaluación aporta elementos para determinar si la actuación del sistema de justicia se concentra principalmente en manifestaciones individuales de criminalidad o si, por el contrario, alcanza delitos que poseen un carácter más complejo y estructurado y que suelen instrumentalizarse con recursos de origen ilícito. En ese sentido, a continuación, se presentan los delitos base identificados en los procesos judiciales por lavado de activos registrados durante el período de estudio.

Gráfico 27
Delitos de origen al delito de lavado de activos por caso, 2023 - 2025



Fuente: *Consejo de la Judicatura, 2023-2025.*
Elaboración: *Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.*

Tomando en consideración los 48 procesos judiciales examinados, en 26 casos (54%) no fue posible identificar el delito precedente, constituyéndose en la categoría más frecuente. Esto significa que en más de la mitad de los procesos analizados el origen del dinero presuntamente lavado no pudo ser plenamente establecido o individualizado. No obstante, si de los 26 casos se restan los 12[7] archivados por no formulación de cargos, la proporción de causas sin delito precedente se reduce al 29%, que de todas maneras sigue siendo un valor considerable teniendo en cuenta que la mayoría de los procesos analizados se encuentran en etapa de juicio.

7. Si bien el total de casos archivados por no formulación de cargos es 13, para este cálculo se consideran únicamente 12 porque en uno de ellos sí se identificó el delito precedente (narcotráfico).

Entre los delitos base que sí pudieron ser identificados, el más frecuente fue el tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, presente en 8 procesos (17%). Este resultado es consistente con la literatura especializada y con la experiencia de casos internacionales que identifican al narcotráfico como una de las principales fuentes de generación de capitales ilícitos susceptibles de estar sujetas a operaciones de lavado de activos, así como a investigaciones previas del OECO (2026a), donde el narcotráfico es considerado el principal mercado ilícito en el país.

Por su parte, los delitos relacionados con la corrupción se identificaron en 5 procesos (10%), representando el segundo delito base más frecuente entre aquellos que pudieron ser determinados. Este hallazgo evidencia que una parte relevante de las investigaciones de lavado de activos se encuentra vinculada con la obtención ilícita de recursos provenientes de actividades asociadas al abuso de la función pública o actividades relacionadas a ello.

Las categorías restantes registran una incidencia significativamente menor. Se identificó un proceso (2%), para cada uno de los siguientes delitos o combinaciones de delitos: armas de fuego, municiones y explosivos prohibidos o no autorizados; captación ilegal de dinero; corrupción y tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización; estafa y captación ilegal de dinero; minería ilegal y contrabando; robo; tráfico de armas; tráfico de migrantes; y casos en los que se detectó un origen no ilícito de los recursos investigados, pero sin una referencia específica a algún delito.

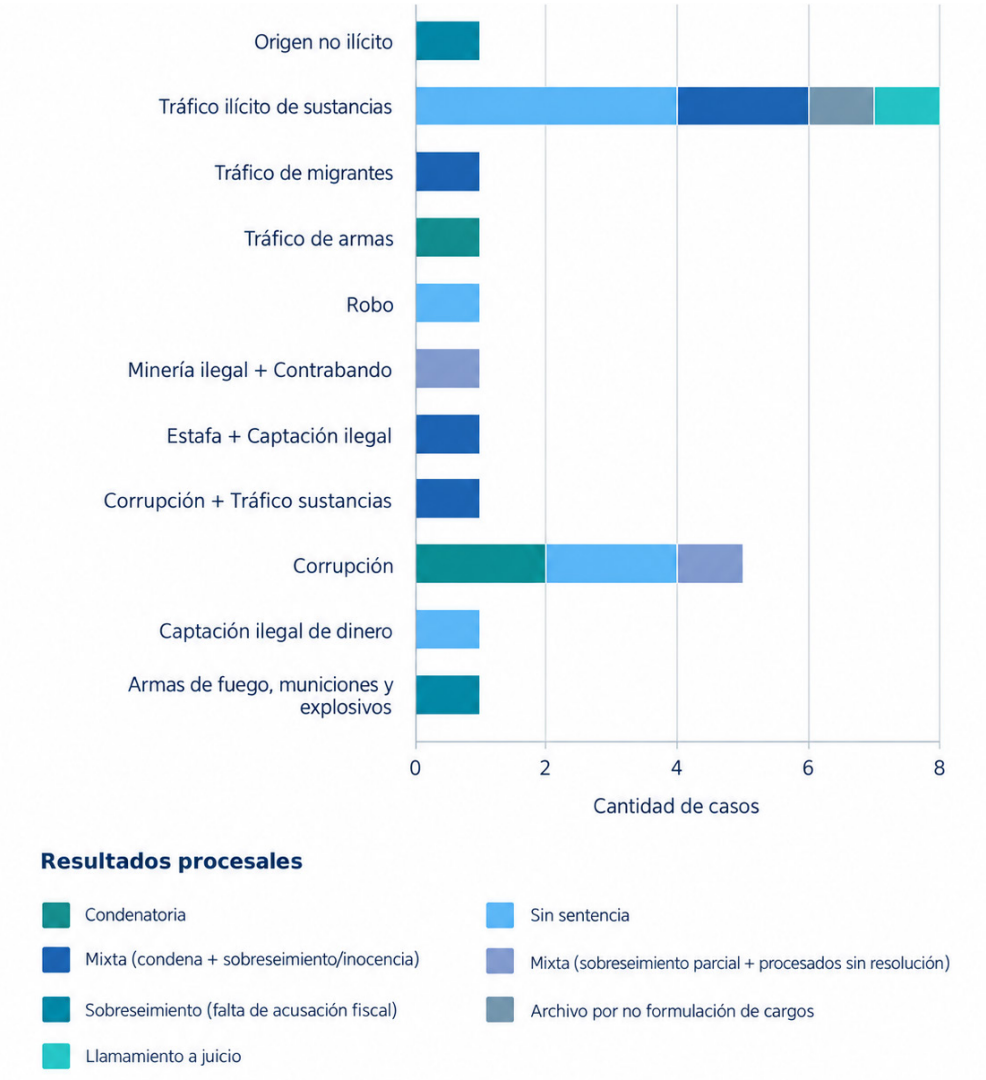
Por lo anteriormente señalado, los resultados reflejan la diversidad de actividades ilícitas que pueden generar recursos susceptibles de ser incorporados posteriormente al circuito económico formal, mediante operaciones de lavado de activos. Sin embargo, hay una preeminencia de categorías asociadas a delitos base no determinados, lo cual, evidencia una de las principales complejidades de este tipo de investigaciones: la dificultad de acreditar judicialmente el origen específico de los fondos de un proceso de lavado de activos. En virtud de ello, aunque el tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización y los delitos de corrupción destacan como las fuentes ilícitas identificadas con mayor frecuencia, la información demuestra que una proporción sustancial de los casos continúa presentando desafíos probatorios para establecer con precisión el delito precedente que dio orden a los activos materia del proceso.

Con el propósito de comprender cómo evolucionan los procesos judiciales en función del delito precedente que habría dado origen a los recursos que fueron objeto de lavado de activos, se expone un análisis de la relación entre el delito precedente identificado y el tipo de resolución alcanzada en cada caso. Este ejercicio permite observar si determinados delitos precedentes presentan una mayor probabilidad de avanzar hacia etapas de juzgamiento o de culminar con resoluciones definitivas.

Cabe indicar que este análisis excluye los 26 procesos (54% del total) agrupados en la categoría “No se puede determinar”, la cual corresponde a aquellos casos en los que no fue posible identificar el delito base o la procedencia ilícita específica de los recursos investigados. Debido a la ausencia de esta información, no se consideró pertinente examinar las resoluciones alcanzadas por dichas causas en función de un delito precedente que no pudo ser establecido.

Gráfico 28

Tipo de resolución por caso para delito precedente identificado, 2023 - 2025



Fuente: *Consejo de la Judicatura, 2023-2025.*
Elaboración: *Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.*

Entre los procesos cuyo delito base sí fue identificado, el grupo más numeroso está vinculado al tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, con 8 casos (17%). Dentro de esta categoría, se observa una diversidad de resultados procesales: 4 casos permanecían sin sentencia (50%); 2 registraban resoluciones mixtas que combinaron condenas con sobreseimientos o ratificaciones de inocencia (25%); 1 había sido archivado por no formulación de cargos (12,50%); mientras que tan solo 1 había alcanzado la etapa de llamamiento de juicio (12,50%). Estos resultados reflejan los distintos niveles de avance procesal dentro de las investigaciones vinculadas al narcotráfico como delito precedente.

Por su parte, los procesos vinculados a corrupción representan 5 casos (10%), de los cuales 2 concluyeron con sentencias condenatorias (40%), 2 permanecían sin sentencia (40%) y 1 registró una resolución mixta por sobreseimiento parcial y procesados sin resolución definitiva (20%). Este comportamiento evidencia que las causas relacionadas con corrupción presentan un grado de avance significativo con respecto a otros delitos base identificados, al concentrar una proporción importante de resoluciones condenatorias.

Asimismo, se identificaron tres procesos relacionados con combinaciones de delitos precedentes que concluyeron mediante resoluciones mixtas, con un caso cada uno (2%): corrupción y tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, estafa y captación ilegal de dinero, y tráfico de migrantes. En todos ellos se registraron resoluciones que combinaron condenas con sobreseimientos o ratificaciones de inocencia para distintos procesados dentro de una misma causa.

Los restantes delitos bases identificados registran un solo proceso cada uno. De esta manera, un caso vinculado a tráfico de armas concluyó con una sentencia condenatoria; y otro relacionado con armas de fuego, municiones y explosivos prohibidos o no autorizados, finalizó con sobreseimiento; los procesos relacionados con captación ilegal de dinero y robo permanecían sin sentencia; mientras que, el caso cuyo origen de los recursos fue considerado no lícito (sin delito específico) culminó mediante sobreseimiento por falta de acusación fiscal. Por último, el proceso relacionado con minería ilegal y contrabando registró una resolución mixta, compuesta por un sobreseimiento parcial y procesados sin resolución definitiva.

Por lo tanto, como se puede distinguir en el **Gráfico 28,** los delitos base que presentan una mayor cantidad de procesos identificados son el tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización y la corrupción, los cuales concentran 13 de los 22 casos para los que fue posible determinar un delito precedente (59%). Además, son estas categorías las que muestran los niveles más altos de avance procesal y la mayor diversidad de resultados judiciales. En contraste, la existencia de más de la mitad de los procesos sin un delito base determinado pone en evidencia las dificultades que aún enfrenta el sistema de justicia para establecer de forma precisa el origen ilícito de los activos investigados.

h. Enfoque aislado y no sistémico

Debido a la naturaleza del lavado de activos y las características propias de este delito, la persecución del sistema de justicia debería aplicar un enfoque sistémico orientado a desmantelar o atacar a una organización o estructura criminal, más allá de personas individuales. Del análisis de sentencias, se evidencia que en los casos de lavado de activos ingresados entre 2023 y 2025, el sistema de justicia vincula en promedio 4 personas naturales por caso judicial, con procesos que vinculan de uno a veintiún personas naturales en una misma investigación. Sin embargo, el análisis evidencia que el 65% de procesos vinculan de 1 a 3 personas naturales, mientras que un número marginal de casos evidencia la vinculación de estructuras criminales de mayor complejidad que incluyen personas jurídicas, estructuras societarias e intermediarios como testaferros o 'presta nombres'.

De ahí que, solo el 25% del total de casos analizados evidencie la vinculación de personas jurídicas como procesados (en 12 de los 48 casos analizados). Respecto a las redes empresariales, se observaron entramados societarios desde la vinculación de una sola persona jurídica hasta ocho personas jurídicas dentro de un mismo esquema. No obstante, no se identifica una distribución consistente respecto a cómo se organizan las estructuras societarias, siendo diferentes en cada caso.

El sistema de justicia, en este sentido, mantiene una priorización sobre la vinculación e investigación de las personas naturales, pese a que el marco normativo habilita la judicialización de personas jurídicas. La relevancia de estas últimas subyace en que, de acuerdo con las investigaciones de GAFILAT y sus recomendaciones, estas aparecen entre las modalidades y técnicas más frecuentes del lavado de activos en la región. Por lo que la vinculación marginal de personas jurídicas permite observar una potencial área de intervención y mejora para la judicialización de este delito.

i. Disparidad en la imposición de penas, multas y otros tipos de sanciones o reparaciones

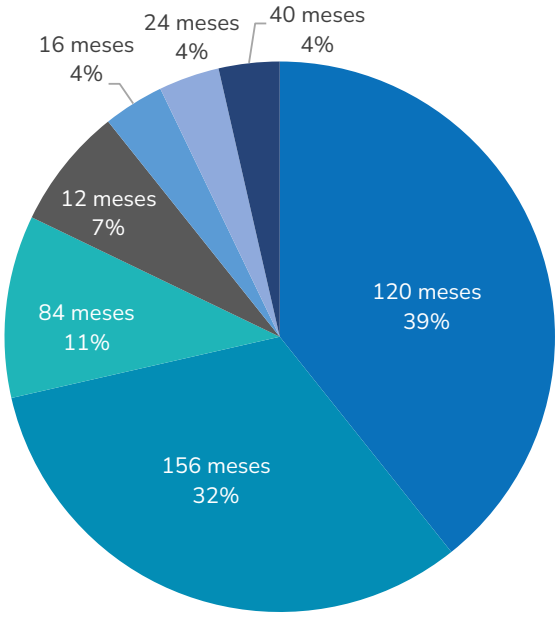
Para el período 2023 a 2025, se registraron 28 personas naturales condenadas por el delito de lavado de activos. La pena más frecuente fue la de 120 meses (10 años) de privación de libertad, aplicada a 11 personas (39%); seguida por las condenas de 156 meses (13 años), impuestas a 9 personas (32%). Entre estas dos penas se concentran 20 de las 28 condenas registradas, esto es el 71%, lo cual, evidencia una marcada concentración de las sanciones en los rangos más altos observados en la muestra.

En un segundo nivel de frecuencia, se ubican las penas de 84 meses (7 años), aplicadas a 3 personas (11%). Por su parte, las condenas de 12 meses fueron impuestas a 2 personas (7%), mientras que las penas de 16 meses, 24 meses y 40 meses (4% cada una) correspondieron a una persona, respectivamente[8].

En función de lo expuesto, la distribución de las penas presenta una dispersión considerable, oscilando entre 12 y 156 meses de privación de libertad. Sin embargo, la mayor concentración se encuentra en las sanciones de 120 y 156 meses, lo que sugiere que la mayoría de las condenas impuestas se ubican en rangos relativamente altos en cuanto a gravedad de la pena.

De igual manera, el que haya penas significativamente distintas para personas condenadas por el mismo delito refleja la heterogeneidad de los casos judicializados. Para comprender esta imputación disímil para cada condenado, se debe tomar en consideración cuestiones más peculiares que se pueden dar en un proceso judicial, tales como: el grado de participación de cada uno de los procesados, la cuantía de los activos involucrados, la existencia de circunstancias agravantes o atenuantes, entre otras.

Gráfico 29
Frecuencia de la temporalidad penas para sentenciados por lavado de activos, 2023 - 2025



Fuente: *Consejo de la Judicatura, 2023-2025; Superintendencia de Compañías, 2026.*
Elaboración: *Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.*

8. La existencia de penas inferiores al rango mínimo previsto actualmente en el artículo 317 del COIP se debe a la presencia de casos cuyos hechos ocurrieron con anterioridad a la reforma efectuada en julio de 2024 (R.O. 599-S, 12-VII-2024), a través de la cual se agravaron de forma estructural todas las penas previstas para este delito.

Además de las penas privativas de libertad, los tribunales impusieron 28 multas a personas naturales condenadas por lavado de activos. Los montos evidencian una notable dispersión, con sanciones económicas que van desde USD 57.380,00 hasta USD 19.908.000,96; reflejando diferencias sustanciales en la cuantía de las multas impuestas.

La multa más frecuente fue la de USD 2.313.376,63; aplicada en 4 ocasiones (14,29%); mientras que la multa de USD 57.380,00 fue impuesta a 3 personas (10,71%). Los restantes montos registraron una única ocurrencia cada uno (3,57% del total de multas), lo que evidencia una elevada variabilidad en las sanciones económicas impuestas por el sistema de justicia.

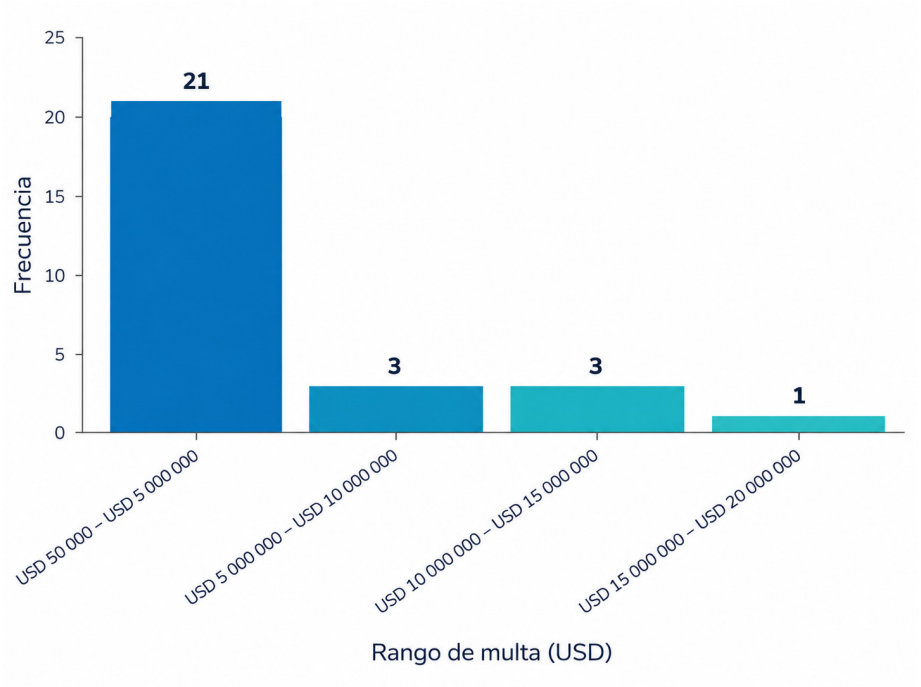
En virtud de ello, las sanciones monetarias presentan una distribución diversa, abarcando un amplio rango de montos que van desde cifras inferiores a los cien mil dólares, hasta multas cercana a los veinte millones de dólares.

Esta dispersión sugeriría que el aparato de justicia, al igual que con lo sucedido con las penas privativas de la libertad, ha ajustado las sanciones económicas a las particularidades de cada caso, considerando factores como la magnitud de los activos involucrados, el beneficio económico obtenido, entre otras cuestiones específicas establecidas en el COIP.

Con el fin de identificar patrones generales en la cuantía de las multas impuestas, los montos fueron agrupados en intervalos de USD 5 millones. Los resultados muestran una marcada concentración de las sanciones económicas en los rangos inferiores de la distribución.

Así, como se distingue en el **Gráfico 30**, 21 de las 28 multas registradas (75%) se ubican en el intervalo comprendido entre USD 50.000 y USD 5.000.000. Por su parte, 3 multas (10,71%) se encuentran en el rango de USD 5.000.000 a USD 10.000.000; en tanto que otras 3 multas (10,71%) corresponden al intervalo de USD 10.000.000 a USD 15.000.000. Finalmente, solo una multa (3,57%) supera los USD 15 millones, ubicándose en el rango de entre los USD 15.000.000 a USD 20.000.000.

Gráfico 30
Distribución de multas para sentenciados por lavado de activos, 2023 - 2025



Fuente: *Consejo de la Judicatura, 2023-2025; Superintendencia de Compañías, 2026.*
Elaboración: *Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.*

Como se puede ver, la distribución presenta una clara asimetría hacia la derecha. Aunque la mayoría de las multas se concentra en los rangos inferiores, existe un número reducido de sanciones que representan una alta cuantía, lo que extiende considerablemente el rango total de los valores observados. Por lo tanto, si bien la mayor parte de las condenas económicas se sitúan por debajo de los USD 5 millones, determinados casos de lavado de activos involucran sanciones cuyos montos son excepcionalmente elevados.

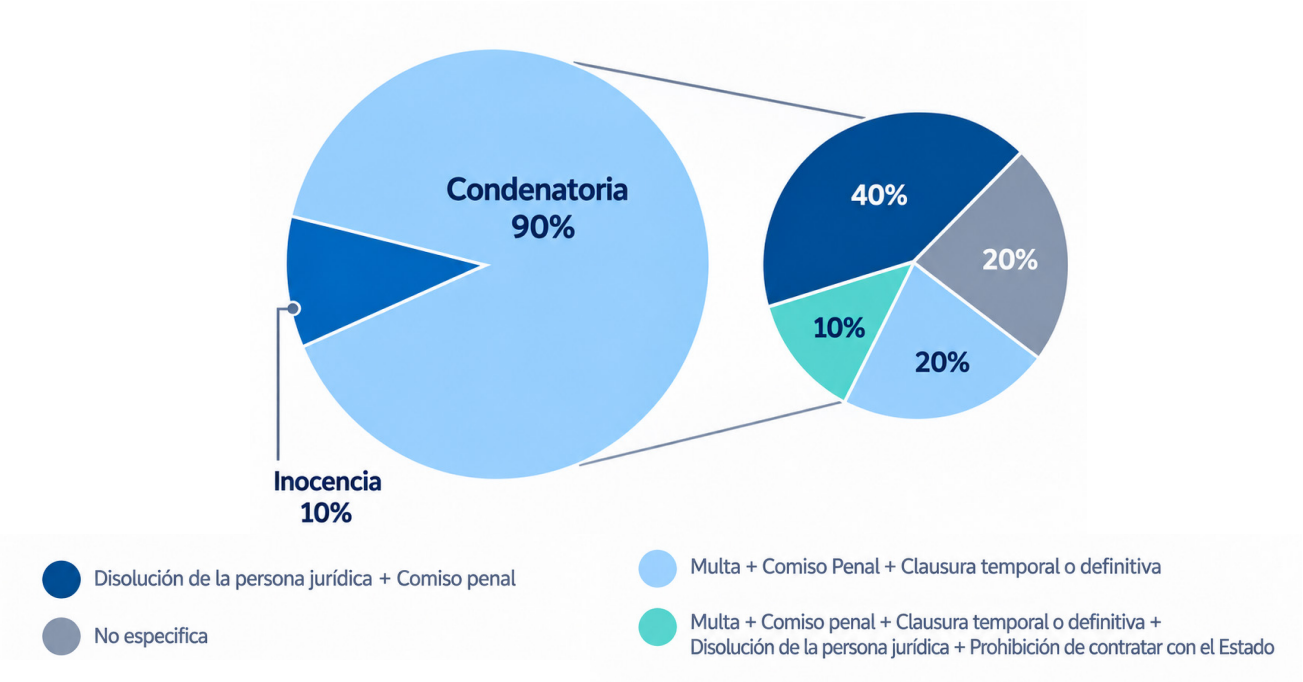
Cabe también señalar una discrepancia entre las resoluciones impuestas por el sistema de justicia en cuanto a la interpretación de la ley. En dos casos diferentes que alcanzaron sentencia condenatoria se pudo evidenciar la aplicación tanto de la multa por el duplo del monto lavado (redacción del artículo 317 del COIP vigente para hechos anteriores a la reforma de julio de 2024, que posteriormente elevó dicha multa al quíntuplo), así como también la imposición de la multa prevista en el artículo 70 del COIP.

Esto indicaría la aplicación de dos penas monetarias simultáneas por el mismo delito, lo cual amerita revisión a la luz del estándar de sanciones “efectivas, proporcionadas y disuasivas” que exige la Recomendación 3 del GAFI, dado que la coexistencia de ambas multas puede generar incertidumbre sobre el criterio aplicable y afectar la proporcionalidad y previsibilidad de la sanción.

i. Penas y multas para personas jurídicas

De los procesos con sentencia condenatoria, tan solo 4 involucran sanciones sobre personas jurídicas. Dentro de los casos correspondientes a este tipo de resolución, 10 personas jurídicas han sido mencionadas en las sentencias, no obstante, se registran sanciones únicamente sobre 7, es decir, el 15% de todas las personas jurídicas procesadas entre 2023 y 2025. Esto resulta llamativo dado que se evidencia que en los procesos judiciales restantes que recibieron sentencias condenatorias, no existieron sanciones sobre entramados societarios, priorizando la judicialización individual, pese a la complejidad que supone el delito de lavado de activos.

Gráfico 31
Frecuencia del tipo de sanción aplicada sobre las personas jurídicas sentenciadas por menciones en las sentencias, 2023 - 2025



Fuente: *Consejo de la Judicatura, 2023-2025.*
Elaboración: *Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.*

Con relación a la distribución de cada una de las sanciones sobre las personas jurídicas sentenciadas de manera condenatoria, sobre el 40% (4) se aplicó una combinación de las sanciones de disolución de la persona jurídica y comiso penal, sobre el 20% (2), se aplicó la combinación de tres sanciones: multa, comiso penal y clausura definitiva, y finalmente sobre 10% (1), se aplicó la combinación de cuatro sanciones: multa, comiso, clausura definitiva, disolución de la persona jurídica y prohibición de contratar con el Estado.

De estas resoluciones se observa la priorización del sistema de justicia sobre los beneficios económicos finales debido a la aplicación del comiso penal para todos los sancionados, seguido de las multas y las clausuras como las sanciones más frecuentes.

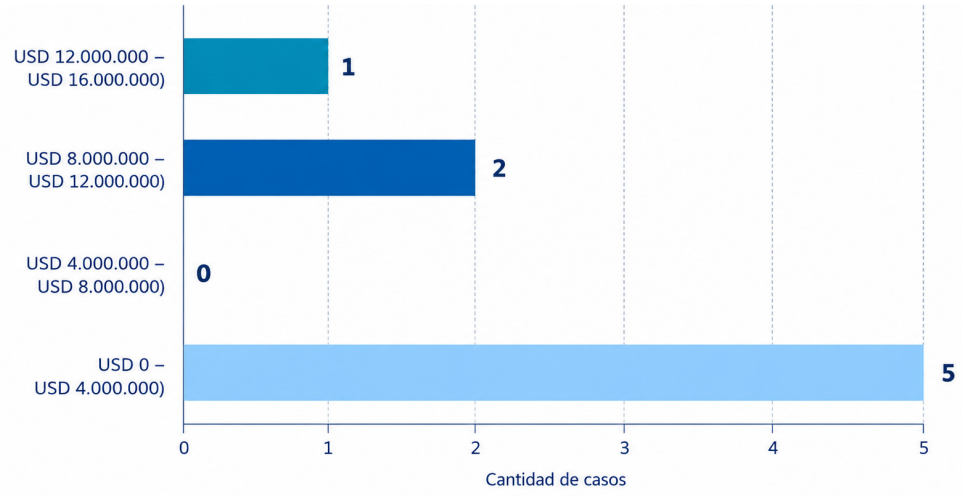
ii. Peculiaridades y disparidades en la aplicación de comisos

El análisis de las sentencias condenatorias emitidas contra personas naturales por lavado de activos muestra que el comiso de bienes fue aplicado en la totalidad de los casos registrados. En efecto, de las 28 personas naturales condenadas, todas fueron objeto de una medida de comiso (100%); no se identificó ningún caso en el que una sentencia condenatoria hubiera sido emitida sin disponer de esta medida.

El comiso constituye una consecuencia jurídica constante dentro de las condenas de lavado de activos para el período analizado. La aplicación universal de esta medida resulta consistente con la naturaleza patrimonial del delito, en tanto el objetivo del sistema de justicia no se limita a sancionar penalmente a los responsables, sino que, también se busca privarlos de los bienes, activos o instrumentos de los cuales han obtenido beneficio por las actividades ilícitas realizadas.

Sin perjuicio de lo mencionado, debido a que en varios procesos los bienes comisados eran compartidos entre dos o más condenados o fueron valorados de manera conjunta dentro de una misma causa, el análisis que sigue se realiza sobre los valores de los bienes objeto de comiso por caso y no sobre montos individualizados por persona.

Gráfico 32
Distribución de valores comisados por caso, 2023 - 2025



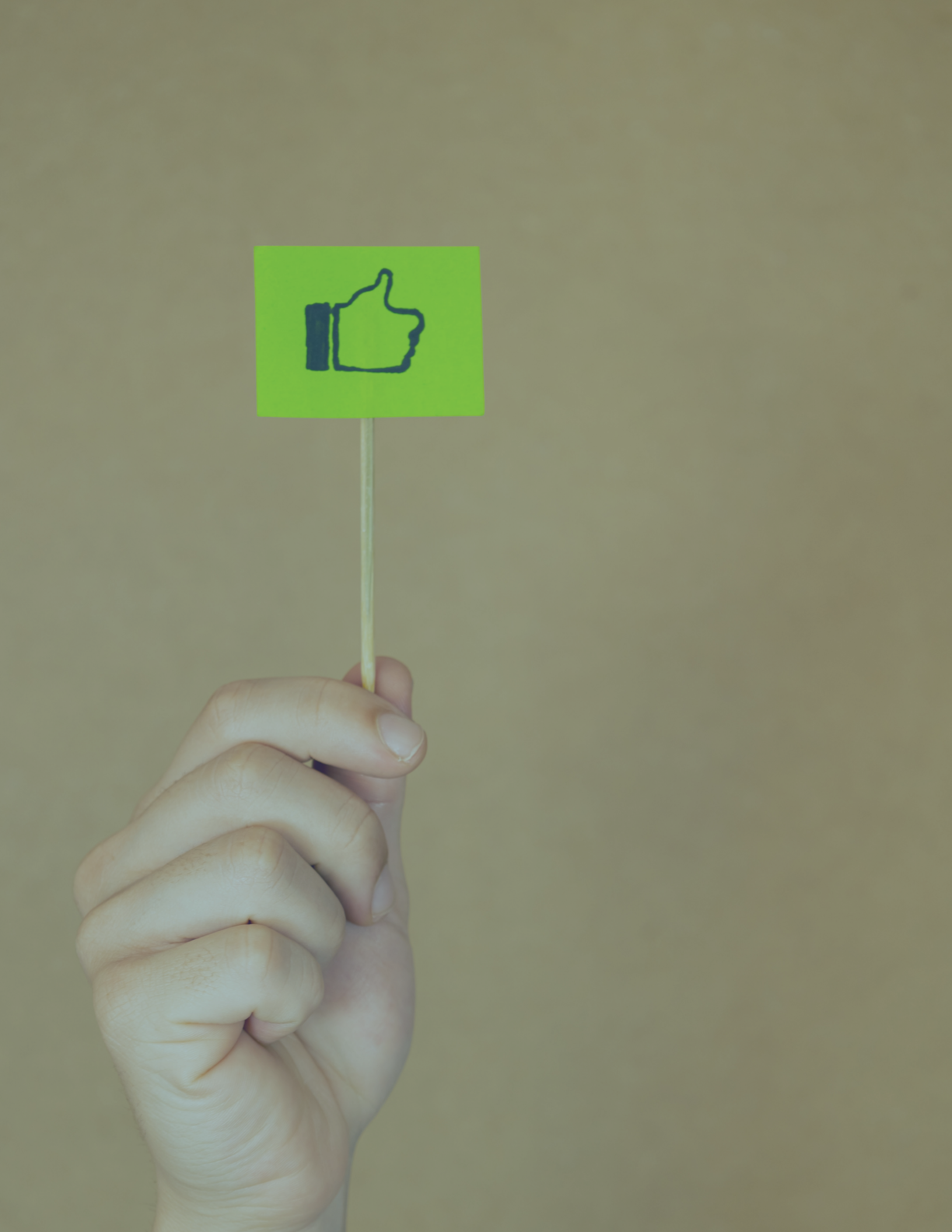
Fuente: *Consejo de la Judicatura, 2023-2025.*
Elaboración: *Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.*

En los 8 procesos en los que se dictó sentencia, el valor total comisado asciende a USD 40 millones. Los montos presentan una elevada dispersión, con valores que oscilan entre USD 47.980 y USD 12.784.646. Esta amplitud evidencia diferencias sustanciales en la magnitud económica de los bienes que han sido sujetos a comiso. El análisis por rangos muestra una distribución marcadamente asimétrica, en la cual, de las 8 valoraciones registradas, 5 (62,50%) se ubican en el intervalo que comprende USD 0 y USD 4 millones, mientras que no se registran bienes comisados en el rango entre USD 4 millones y USD 8 millones (0%). Por otra parte, 2 valoraciones (25%) se ubican entre USD 8 millones y USD 12 millones, y 1 caso (12,50%) se sitúa entre USD 12 millones y USD 16 millones.

Como se puede observar en el **Gráfico 32**, aunque la mayoría de los bienes comisados corresponde a valores inferiores a USD 4 millones, una parte sustancial del valor económico total se concentra en un número reducido de activos de alta cuantía. En particular, tres valores superan los USD 10 millones, representado por sí solos una proporción significativa del total comisado.

De igual manera, la distribución planteada sugiere que el comiso en causas de lavado de activos presenta una dinámica similar a la que se identifica en el análisis de multas; esto es, existe un grupo mayoritario de casos con valores relativamente moderados y un número reducido de expedientes con montos excepcionalmente elevados que incrementan de forma considerable el valor agregado del conjunto. Por ello, el monto total de los USD 40 millones, no obedece a una distribución homogénea entre los casos analizados, sino a una importante concentración patrimonial en un grupo limitado de bienes de alto valor económico.

Al contrastar este valor con el volumen de flujos financieros identificados en los procesos analizados (por ejemplo, los USD 441.032.599 movilizados a través de las 62 cuentas bancarias de personas jurídicas detectadas en este estudio); o frente a las estimaciones sobre la magnitud del lavado de activos en el país (entre USD 3.910 y USD 6.516 millones anuales, según OECO (2026b), el monto comisado representa una fracción reducida del total de recursos que habrían transitado por esquemas de lavado durante el período. Si bien esta comparación no permite establecer una tasa de recuperación de activos en sentido estricto, ni permite extraer conclusiones definitivas sobre la efectividad del comiso, dado que ambas cifras no son plenamente equiparables ni corresponden necesariamente a las mismas causas o periodos, sí evidencia la brecha significativa entre los flujos ilícitos detectados y los bienes efectivamente recuperados por el sistema de justicia, en línea con la tendencia global reportada por ICAR (2023) y FATF (2026), según la cual los Estados solo logran incautar en promedio el 1% de los flujos ilícitos anuales.



6 Recomendaciones

Con base en el análisis de datos efectuado, en relación con el marco conceptual y normativo detallado en la primera parte de este informe, desde el OECO se pueden formular las siguientes recomendaciones de política pública:

Fortalecer las investigaciones financieras paralelas desde las etapas iniciales del proceso penal: El elevado porcentaje de procesos en los que no fue posible determinar el delito precedente, junto con la limitada reconstrucción de los flujos financieros observada en los casos analizados, evidencia la necesidad de que las investigaciones por lavado de activos incorporen sistemáticamente investigaciones financieras paralelas. Esto permitiría identificar con mayor precisión el origen ilícito de los activos, los beneficiarios efectivos y las redes económicas vinculadas, en consonancia con las recomendaciones del GAFI, GAFILAT, UNODC y Banco Mundial.





Priorizar la recuperación de activos mediante un uso más eficaz de medidas cautelares patrimoniales: Considerando que el principal objetivo del lavado de activos consiste en preservar y disfrutar las ganancias provenientes del delito, la respuesta institucional debería poner mayor énfasis en la protección temprana del patrimonio ilícito. Al respecto, resulta conveniente desarrollar lineamientos institucionales para que la Fiscalía solicite oportunamente medidas cautelares reales y para que los jueces apliquen criterios homogéneos de motivación, individualización y seguimiento de dichas medidas, conforme a los estándares constitucionales y jurisprudenciales analizados.

Institucionalizar la elaboración de estudios patrimoniales como parte de la investigación penal: Los resultados muestran limitaciones en la identificación y valoración de bienes objeto de medidas cautelares y comiso. En consecuencia, debería establecerse como práctica institucional la realización de estudios patrimoniales integrales que documenten la titularidad, valoración, localización y trazabilidad de los activos investigados, facilitando tanto la adopción de medidas cautelares como la ejecución posterior del comiso.





Orientar la persecución penal hacia el desmantelamiento de estructuras criminales y no únicamente hacia la sanción de personas individuales: El análisis evidencia que muchos procesos se concentran en un número reducido de personas procesadas, mientras que la literatura especializada destaca que el lavado de activos constituye una actividad propia de organizaciones criminales complejas. Por ello, las investigaciones deberían fortalecer el análisis de estructuras criminales, relaciones societarias, roles diferenciados, beneficiarios efectivos y vínculos entre los distintos participantes, con el propósito de afectar integralmente las capacidades económicas de las organizaciones.

Fortalecer la identificación y judicialización de facilitadores profesionales: Si bien la información disponible no permitió identificar en cada caso la profesión u ocupación de todos los procesados, el análisis cualitativo de las sentencias condenatorias (Tabla 8) evidencia el uso recurrente de empresas fachada y estructuras societarias complejas, lo que sugiere la posible intervención de facilitadores profesionales, en línea con la evolución normativa impulsada por la UAFE y los estándares internacionales sobre la materia. Sobre esta base, resulta recomendable desarrollar protocolos de investigación orientados a identificar la posible intervención de facilitadores profesionales cuando existan elementos objetivos que lo justifiquen, así como fortalecer el intercambio de información entre la Fiscalía, la UAFE y los demás organismos de control.



Mejorar la identificación del delito precedente y promover una comprensión más integral de las economías ilícitas: La imposibilidad de identificar el delito base en más de la mitad de los procesos limita la comprensión de las dinámicas criminales y dificulta el diseño de políticas públicas focalizadas. Sin perjuicio de la autonomía del delito de lavado de activos, las investigaciones deberían procurar reconstruir, al menos de manera indiciaria, el origen de los recursos ilícitos y sus vínculos con las principales economías criminales presentes en el país, conforme al precedente jurisprudencial de la Corte Nacional de Justicia.





Consolidar capacidades técnicas especializadas en materia de lavado de activos: Durante el período analizado, el 91% de los procesos con algún tipo de resolución fue conocido por la entonces Unidad Judicial Especializada para el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado, lo que confirma la relevancia de contar con operadores de justicia con formación técnica específica para este tipo de delitos.

Con independencia del modelo institucional mediante el cual se organice el juzgamiento de estos casos, los resultados del estudio evidencian la necesidad de sostener y profundizar dicha especialización a través de programas permanentes de capacitación dirigidos a fiscales, jueces, peritos e investigadores en materias como análisis financiero, recuperación de activos, beneficiarios efectivos, estructuras societarias, activos virtuales y cooperación internacional.





Desarrollar sistemas integrados de información sobre procesos y recuperación de activos: En concordancia con las observaciones formuladas por el GAFILAT respecto a las inconsistencias estadísticas y con las recomendaciones internacionales sobre gestión de bienes, resulta conveniente implementar un sistema unificado que permita registrar el ciclo completo de los procesos por lavado de activos, incluyendo medidas cautelares, bienes identificados, avalúos, administración de activos, comisos y destino final de los bienes recuperados. Esto facilitaría la evaluación permanente de la efectividad del sistema de justicia penal.

Ampliar las investigaciones hacia sectores económicos emergentes y mecanismos sofisticados de lavado de activos: La literatura revisada advierte un incremento del uso de activos virtuales, estructuras corporativas complejas y mecanismos asociados a la minería ilegal. En consecuencia, las instituciones encargadas de la investigación penal deberían incorporar metodologías especializadas para detectar estas modalidades y fortalecer la cooperación con los organismos administrativos de seguimiento y control.





Incorporar indicadores periódicos de desempeño para evaluar la respuesta del sistema de justicia penal: Considerando que este estudio forma parte de una serie de investigaciones del OECO, sería recomendable institucionalizar un conjunto de indicadores que permitan medir periódicamente aspectos como tiempos procesales, uso de medidas cautelares patrimoniales, identificación de delitos precedentes, recuperación efectiva de activos, participación de personas jurídicas, utilización de facilitadores profesionales y resultados de las sentencias. Ello contribuiría a evaluar la evolución de la política criminal y a orientar futuras reformas normativas e institucionales.



7 Referencias

Agencia de Regulación y Control Minero. (2025). Informe de Rendición de Cuentas 2024. https://controlminero.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2025/06/Informe-de-rendicion-de-cuentas-2024-ARCOM.pdf.

Brun, Jean-Pierre, Anastasia Sotiropoulou, Larissa Gray, Clive Scott, Kevin M. Stephenson. Asset Recovery Handbook A Guide for Practitioners, Second Edition. Stolen Asset Recovery (StAR) Series. World Bank Group & UNODC, 2021: https://star.worldbank.org/sites/default/files/2020-12/Asset%20Recovery%20Handbook%20-%20Second%20Edition.pdf.

Código Orgánico de la Función Judicial. Suplemento del Registro Oficial No. 544, 9 de marzo de 2009.

Código Orgánico Integral Penal. Suplemento del Registro Oficial No. 180, 10 de febrero de 2014.

Consejo de la Judicatura. Resolución No. 190-2021. Cuarto Suplemento del Registro Oficial No. 585, 25 de noviembre de 2021.

Consejo de la Judicatura. Resolución No. 218-2021. Suplemento del Registro Oficial No. 623, 21 de enero de 2022.

Consejo de la Judicatura. Resolución No. 061-2022. Registro Oficial No. 26, 22 de marzo de 2022.

Consejo de la Judicatura. Resolución No. 062-2022. Registro Oficial No. 26, 22 de marzo de 2022.

Consejo de la Judicatura. Resolución No. 065-2022. Registro Oficial No. 36, 5 de abril de 2022.

Consejo de la Judicatura. Resolución No. 287-2022. Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 213, 20 de diciembre de 2022.

Consejo de la Judicatura. Resolución No. 288-2022. Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 213, 20 de diciembre de 2022.

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Registro Oficial No. 561, 23 de abril de 2002.

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, Registro Oficial No. 378, 15 de febrero de 1990.

Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia 179-17-SEP-CC, 14 de junio de 2017.

Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia 2174-13-EP/20, 15 de julio de 2020.

Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia 1322-14-EP/20, 16 de diciembre de 2020.

Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia 9-22-IN/22, 19 de septiembre de 2022.

Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia 780-18-EP/23, 26 de abril de 2023.

Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia 357-20-EP/24, 18 de julio de 2024.

Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia 402-21-EP/24, 8 de agosto de 2024.

Corte Nacional de Justicia. Resolución No. 20-2024. Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 689, 22 de noviembre de 2024.

Does de Willebois, E. van der et al. (2011). The puppet masters: How the corrupt use legal structures to hide stolen assets and what to do about it. Washington, DC: World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/e80259c9-d3ca-5d16-adef-fec02a3989dd/content.

Financial Action Task Force. (2025a). Asset Recovery Guidance and Best Practices. Paris. https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/Asset-Recovery-Guidance-Best-Practices.pdf.coredownload.pdf.

Financial Action Task Force. (2025b). Annual Report 2024 – 2025. https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/annual-reports/fatf-annual-report-2024-2025.pdf.coredownload.pdf.

Financial Action Task Force. (2025c). Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers. Paris, France. https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/recommendations/2025-Targeted-Upate-VA-VASPs.pdf.coredownload.pdf.

Financial Action Task Force. (2026). International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation. Paris, France. www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html.

Fundación Panamericana para el Desarrollo. (2021). Alcance, análisis y validación de la prueba indiciaria. https://oeco.padf.org/wp-content/uploads/2026/01/7.-ALCANCE-ANALISIS-Y-VALIDACION-DE-LA-PRUEBA-INDICIARIA.pdf.

Galvin, M. A., & Ulmer, J. T. (2022). Expanding Our Understanding of Focal Concerns: Alternative Sentences, Race, and "Salvageability." Justice Quarterly, 39(6), 1332–1353. https://doi.org/10.1080/07418825.2021.1954234.

Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. (2023). Informe de evaluación mutua de la República del Ecuador. https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/fsrb-mer/GAFILAT-Spanish-Mutual-Evaluation-Ecudaor-2023.pdf.coredownload.pdf.

Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. (2024). Glosario de definiciones. https://gafilat.org/index.php/es/glosario-de-definiciones.

International Centre for Asset Recovery. (2023). Basel AML Index 2023: 12th Public Edition Ranking money laundering and terrorist financing risks around the world. https://baselgovernance.org/cms/api/assets/a84f4527-9c86-4cd6-8507-493089075642/Basel-AML-Index-2023-12th-Edition.pdf?v=20231113110446000

International Centre for Asset Recovery. (2024). Basel AML Index 2023: 12th Public Edition Ranking money laundering and terrorist financing risks around the world. https://baselgovernance.org/sites/default/files/2023-11/Basel%20AML%20Index%202023%2012th%20Edition.pdf.

International Centre for Asset Recovery. (2025). Basel AML Index. https://index.baselgovernance.org/ranking.

Ivory, Radha, & Yara Esquivel Soto. (2026). Human Rights in Asset Recovery Processes Lessons from the ECtHR. Stolen Asset Recovery Initiative. World Bank Group. UNODC. https://track.unodc.org/track/uploads/res/track/resourcehub/2026/human_rights_in_asset_recovery_processes_html/StAR_2026_Human_Rights_in_Asset_Recovery_Processes.pdf.

Legorano, Giovanni. (2023). Authorities confiscate just 1% of illicit financial flows, as AML systems flounder. The Banker. https://www.thebanker.com/content/82bc24c1-38d2-4f7d-86fd-762907c28ffc.

Maculan, E., & Alicia Gil Gil. (2020). The Rationale and Purposes of Criminal Law and Punishment in Transitional Contexts, Oxford Journal of Legal Studies, Volume 40, Issue 1, March 2020, Pages 132–157, https://doi.org/10.1093/ojls/gqz033.

Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. (2023). Resumen del análisis de sentencias por lavado de activos en Ecuador 2020-2022. PADF. https://oeco.padf.org/wp-content/uploads/2023/11/ESTUDIO-DE-SENTENCIAS-DE-LAVADO-DE-ACTIVOS-resumen.pdf.

Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. (2024a). Guía interpretativa del alcance del delito de lavado de activos en Ecuador. PADF. https://oeco.padf.org/wp-content/uploads/2026/01/5.-GUIA-INTERPRETATIVA-DEL-ALCANCE-DEL-DELITO-DE-LAVADO-DE-ACTIVOS-EN-ECUADOR.pdf.

Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. (2024b). Evaluación de la calidad de la prisión preventiva en casos relacionados a delincuencia organizada en Ecuador. https://oeco.padf.org/wp-content/uploads/2024/03/Estudio-sobre-Prision-preventiva-para-casos-de-crimen-organizado.-OECO-PADF-1.pdf.

Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. (2025a). Análisis de la respuesta del sistema de justicia penal en casos de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización 2020-2022. PADF. https://oeco.padf.org/wp-content/uploads/2025/09/Analisis-de-respuesta-Version-corta-Ajustada.pdf.

Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. (2025b). Análisis de la respuesta del sistema de Justicia Penal en casos de Delincuencia Organizada. 2020-2022 PADF. https://oeco.padf.org/wp-content/uploads/2025/07/Analisis-sentencias-delincuencia-organizada-2020-2022.-Publico_compressed.pdf.

Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. (2026a). Informe de caracterización de crimen organizado en Ecuador 2025. PADF. https://oeco.padf.org/informe-de-caracterizacionde-crimen-organizado-en-ecuador-2025/.

Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. (2026b). Factsheet: Una aproximación a la medición del lavado de activos en Ecuador. Magnitud, modalidades y tipos. PADF. https://oeco.padf.org/wp-content/uploads/2026/07/Factsheet-1-Lavadoactivos-1.pdf.

Packer, H. L. (1964). Two Models of the Criminal Process. University of Pennsylvania Law Review, 113(1), 1–68. https://doi.org/10.2307/3310562.

Plan V. (2025). 56 exportadores sin rastros vendieron oro por más de 1.300 millones desde Ecuador. https://planv.com.ec/investigacion/oro-sin-rastro-x-mas-1300millones-ecuador/.

Savelsberg, J. J. (1992). Law that does not fit society: Sentencing guidelines as a neoclassical reaction to the dilemmas of substantivized law. American Journal of Sociology, 97(5), 1346–1381. https://doi.org/10.1086/229904.

Steffensmeier, D., Ulmer, J., & Kramer, J. (1998). The interaction of race, gender, and age in criminal sentencing: The punishment cost of being young, black, and male. Criminology, 36(4), 763–798. https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1998.tb01265.x.

Tyler, T. R. (2003). Procedural Justice, Legitimacy, and the Effective Rule of Law. Crime and Justice, 30, 283–357. http://www.jstor.org/stable/1147701.

Ulmer, J. T. (2012). Recent Developments and New Directions in Sentencing Research. Justice Quarterly, 29(1), 1–40. https://doi.org/10.1080/07418825.2011.624115.

Ulmer, J. T., & Johnson, B. (2004). Sentencing in context: A multilevel analysis. Criminology, 42(1), 137–178. https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.2004.tb00516.x.

Ulmer, J. T., Silver, E., & Hanrath, L. (2023). Back to basics: A critical examination of the focal concerns framework from the perspective of judges. Justice Quarterly, 40(6), 813–836. https://doi.org/10.1080/07418825.2022.21322.

Unidad de Análisis Financiero y Económico. (2026). Conoce si eres sujeto obligado. https://www.uafe.gob.ec/resoluciones-sujetos-obligados/.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2026a). Lavado de activos. https://www.unodc.org/rocol/es/lavado-de-activos.html.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2026b). Money laundering. https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/overview.html.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2026c). Research Brief on Transnational Organized Crime. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/toctaBrief_2026/Transnational_Organized_Crime_Brief_2026.pdf.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2025a). World Drug Report 2025. http://unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR_2025/WDR25_B2_Contemporary_drug_issues.pdf.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2025b). Global Analysis on Crimes that Affect the Environment – Part 2b: Minerals Crime: Illegal Gold Mining. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crimes%20on%20Environment/ECR25_P2b_Minerals_Crime.pdf



PADF
FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO

Crime · Lab

OECO
OBSERVATORIO ECUATORIANO
DE CRIMEN ORGANIZADO